

1043 REUNION — Continuación de la 53ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 4 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Miguel P. Del Pero

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
AGUIRRE CÁMARA, José
ALFONSIN, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARRASCAETA, Félix de
ARROYO, Ramón F.
AVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BEHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BERRINI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CALVO, Carlos Alberto
CANTONI, Angel Serafin
CARDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CASAS, David Jorge
CATALAN, Guillermo
CENTENO, José Isaac
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COSTANTINO, Adolfo I.
CREBLI, Francisco R.
CRAMIANI, Salvador
DEL PERO, Miguel P.
DE LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
DOMINGUEZ, Luis C.
DRENA, Reinaldo

FABRIZIO, Luis N.
FERNÁNDEZ, José M.
FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ MENDY, Julio O.
FERREIRA, Jorge W.
FIGUEROA, Jaime Hernán
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GARAY, Fermín J.
GARCÍA, Horacio
GARCÍA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GARÓFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GODOY, Ruperto Honorio
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZALEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIERREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRÉ, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LEÓN, Luis Agustín
LESCANO, Edmundo A.
LILJESTHÖM, Eduardo R.
LOZANO, Martín
LUCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARSICO, Adalberto O.
MARTÍNEZ, Ramón S.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MENDEZ DOYLE, Abel Víctor
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MOR ROIG, Arturo
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUNIAGURRIA, Camilo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.

MUSITANI, Héctor Francisco
NOUGUÉS, Isaias J.
OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNÁNDEZ, Angel H.
PATLIS, León
PENA, Roberto M.
PEREIRA, Antonio
PÉREZ, Raúl
PERNASSETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
RASINES, Osvaldo Gregorio
REQUENA, Raúl María
RITACCO, Araldo A.
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRIGUEZ VAGARIA, Eduardo
ROIS, Roberto
ROSITO, M. Oscar
RUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
RUIZ, Amalio David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Héctor R.
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERÚ GARCÍA, Alberto
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
SOLARI, Juan Antonio
TARULLI, Pascual
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE de PÉREZ TORT, Lidia
VÁZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, EN COMISION:

ANTÓN, Luis
AVETA, Francisco O.

AUSENTES, CON LICENCIA:

BOFFI, Luis L.
CÓGGIOLA, Luis S.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
SCALITER, Juan
VACA LOBO, Juan Manuel

AUSENTES, CON AVISO:

CORNEJO LINARES, Juan Carlos
FERRARI, Luis
MERCADO, José Ignacio

MONTE, Ricardo Alvaro
PALACIOS, Alfredo L.
POSSE, Melchor S.
ROBERTO, Mario

AUSENTES, SIN AVISO:

ARIAS, Luis Osvaldo
CALABRESE, Pablo
CASTELLAR, Miguel A.
CHRISTE, Jorge J.
DE CARA, José Eduardo
DÍAZ, Diógenes C.

FERNANDEZ NÚÑEZ, Isidro
FRAGA, Jorge Horacio
LLORENS, Héctor
PEDRINI, Ferdinando
PENA Y LILLO, Silvestre
PÉREZ GALLART, Alcides B.
RENÉ, José María
RIAL, Oscar
RODRÍGUEZ, Rogelio Ramón
ROMEU VERDIER, Gabriel
SARRULLE, Oscar E.
TACHELLA, Eliberto S. J.
VINALS, Fernando J.

SUMARIO

- 1.—**Manifestaciones en minoría.** (Pág. 6856.)
- 2.—**Continuación de la sesión.** (Pág. 6858.)
- 3.—**Estatuto de los Partidos Políticos.** Termina la consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda (orden del día 417). (Pág. 6858.)
- 4.—**Moción del señor diputado Del Pero** de que se levante la sesión. Se aprueba. (Pág. 6899.)
- 5.—**Apéndice:**
 - I.—**Sanción de la Honorable Cámara.** (Pág. 6900.)
 - II.—**Inserción.** (Pág. 6908.)

—En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre de 1964, a la hora 12 y 20:

1

MANIFESTACIONES EN MINORÍA

Sr. Sago. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

Sr. Sago. — ¿Podría informar la Presidencia cuántos señores diputados hay en la casa?

Sr. Presidente (Mor Roig). — En la casa hay 90 señores diputados.

Sr. Sago. — Hace más de dos horas que se está llamando para sesionar y creo prudente tomar alguna decisión al respecto o que se levante la sesión.

Sr. Cárdenas. — ¿Qué posibilidades hay de lograr quórum, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Inciertas, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Ruego al señor diputado Sago quiera retirar la proposición que acaba de formular. Estimo que a esta altura del año parlamentario, estando a consideración de la Honorable Cámara un tema de tanta importancia como el Estatuto de los Partidos Políticos, directamente vinculado con el proceso preelectoral ya iniciado con vistas a los comicios del 14 de

marzo del año próximo, debemos hacer un gran esfuerzo para asegurar el éxito de la sesión, esperando, para ello, todo el tiempo necesario que permita a los diputados ausentes cumplir con su deber ocupando sus bancas.

Además, tenemos pendiente el tratamiento de un asunto muy importante, acerca del cual el pueblo también está esperando el pronunciamiento de la Honorable Cámara, como es el dictamen de la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo, y para los días subsiguientes esperan sanción el presupuesto, la reforma impositiva y otros asuntos que interesan fundamentalmente al país.

Por eso vuelvo a rogar al señor diputado Sago que no insista en su moción y que, en cambio, nos pongamos todos al servicio del propósito de que la reunión de hoy no fracase. Encarezco al señor presidente de la Honorable Cámara y a los presidentes de bloques que, en la medida de sus posibilidades, hagan cuanto esté a sus alcances para que concurran a cumplir con su deber los colegas ausentes.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

Sr. Sago. — Yo no había formulado una moción concreta, pero sí era mi propósito que fijáramos una hora para reanudar la sesión, a efectos de que los miembros de la Comisión de Presupuesto, que tienen mucha tarea, puedan ir a trabajar. Aquí en el recinto estamos perdiendo tiempo, mientras no puedan reunirse las comisiones ni adelantamos el trabajo parlamentario en ningún aspecto.

De manera que aclaro que no he hecho moción de levantar la sesión y sólo propongo que fijemos una hora determinada, por ejemplo a las 15, para volver a reunirnos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — En este momento tenemos una tremenda responsabilidad, y por eso, diría, que por sobre el incidente de anoche, que pareciera haber producido algún efecto con relación a la reunión de hoy, está la pacificación nacional, la confianza que debe tener el pueblo argentino en este Parlamento, y la necesidad de restablecer en alguna medida la seriedad con que debe funcionar la Honorable Cámara, que es representativa de la soberanía popular.

Entiendo que, ante todo eso, nada puede postponerse. Entiendo que es fundamental que hoy mismo tenga sanción el Estatuto de los Partidos Políticos, porque hace —como lo he dicho y lo repito— a un estado de ánimo, a una situación histórica que vive el país y a la que nosotros debemos concurrir a resolver, con claros objetivos nacionales.

Dilatar por cualquier circunstancia la sanción del Estatuto de los Partidos Políticos, es ir contra los intereses generales del país, y por eso, yo, como diputado, he venido a sentarme en mi banca, y exhorto a los demás señores diputados para que, por sobre todas las incidencias partidistas y convencionalismos, pensemos en esta hora trascendente que es necesario demostrar un alto nivel de responsabilidad, continuando con la consideración de los dictámenes relacionados con el Estatuto de los Partidos Políticos, que es indispensable para la pacificación y la normalización institucional y política del país. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

En tal sentido, entiendo que debemos seguir el debate, por lo cual convendría exhortar a los señores diputados que están en la casa a concurrir al recinto.

Sr. Elena. — Me parece muy buena la proposición del señor diputado preopinante. Pero es necesario que escuchen los señores diputados de todos los sectores.

Sr. Pizarro. — ¿Hay oradores anotados para continuar con el debate del Estatuto de los Partidos Políticos?

Sr. Presidente (Mor Roig). — No, señor diputado. Correspondería proceder a votar el artículo 9º.

Sr. Catalán. — Hago indicación, señor presidente, de que se continúe llamando hasta conseguir quórum.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Tarulli.

Sr. Tarulli. — Adhiero al pedido de que se continúe llamando, porque si logramos número, además de sancionar el Estatuto de los Partidos Políticos, que es sumamente necesario para la República, podríamos tratar, sobre la base de los proyectos que se encuentran en comisión, un pedido al Poder Ejecutivo para que incluya en las sesiones extraordinarias la ley del azúcar, que está esperando con ansiedad el pueblo de la provincia que represento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ghioldi.

Sr. Ghioldi. — Participo de la preocupación de los oradores que han hablado hasta este momento, en el sentido de que la Honorable Cámara debe realizar un esfuerzo para sancionar, a la brevedad posible, el Estatuto de los Partidos Políticos, terminar definitivamente el debate sobre petróleo y dar, antes de Navidad, si es factible —y creo que lo es—, las leyes de presupuesto y de impuestos.

Pero, mirando con realismo de números la situación de este instante, me parece que la única indicación viable y conveniente es la de pasar a cuarto intermedio hasta las 15. No hay número en la Honorable Cámara y el cuerpo debe pasar a un período de votaciones sucesivas. Un poco más tarde llegará la hora del mediodía, en que necesidades fisiológicas o psicológicas obligan a abandonar el recinto para nutrirse. Entonces no habrá quórum para votar, con lo que daremos un espectáculo poco recomendable.

No se me oculta que para las 15 también tendremos dificultades para sesionar porque hay no pocos diputados que viajarán; pero de cualquier manera creo que la indicación que formulo es la única viable en este momento. Sugeriría, además, que momentos antes de las 15 se reúna la Comisión de Labor Parlamentaria, por gestión del señor presidente de la Cámara, a fin de tratar de lograr un compromiso de bloques para cumplir un plan de labor.

Creo que hay que votar en una sola reunión el Estatuto de los Partidos Políticos y en un solo día terminar la discusión sobre petróleo y pasar de inmediato a la parte constructiva, porque nadie podrá creer que se limite el uso de la palabra después de haberse dedicado más de quince días al tratamiento del despacho de la comisión investigadora.

Hago, pues, indicación de pasar a cuarto intermedio, aunque la mantendría en suspenso hasta que hagan uso de la palabra otros oradores, hasta las 15; además, sugiero al señor presidente que convoque a la Comisión de Labor Parlamentaria para la oportunidad que he señalado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Agradezco al señor diputado Sago el buen espíritu y la buena voluntad con que ha recogido mi pedido...

Sr. Sago. — No formulé ninguna moción, señor diputado.

Sr. Muñiz. — ...y me adhiero a la proposición de que se difiera la reunión hasta las 15, a la par que reitero mi solicitud para que se agoten, por la vía de los presidentes de bloque, todas las medidas necesarias para que nuestros colegas se hagan presentes en el recinto a la hora indicada y podamos terminar hoy mismo el tratamiento del Estatuto de los Partidos Políticos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Héctor Bravo.

Sr. Bravo (H. F.). — En nombre del bloque demócrata progresista apoyo la proposición formulada por el señor diputado Ghioldi y destaco especialmente que comparto las manifestaciones que hizo acerca de la forma de trabajo que deberá adoptar la Honorable Cámara en sesiones sucesivas, en particular en lo referente al tratamiento del asunto vinculado

con el petróleo, que, como bien ha dicho el señor diputado preopinante, en un solo día puede terminarse sin que se afecte de ninguna manera la libertad de expresión que corresponde a los señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — Señor presidente: nuestro bloque adhiere a cualquier proposición encaminada a que la Honorable Cámara funcione y pueda sesionar en la fecha.

Quiero dejar expresa constancia de que la presencia del bloque que represento en el recinto desmiente aquella imputación que con ligereza le hizo el sector justicialista hace algunos días, en el sentido de que quería perturbar la sanción del Estatuto de los Partidos Políticos porque quería beneficiarse con eventuales proscripciones. Nuestra censura a los artículos 39, inciso c); 21, 22 y 63, inciso c) del dictamen está diciendo de nuestra lucha contra toda posibilidad de proscripciones.

Con relación a un plan de labor para el tratamiento de las cuestiones pendientes —en el caso, la del petróleo— y para los asuntos que debe examinar la Honorable Cámara, como los relativos a leyes impositivas, presupuesto y otras iniciativas importantes, como arrendamientos rurales y locaciones urbanas, nuestro sector aportará toda su colaboración a fin de que merezcan el tratamiento adecuado; pero adelante que de ninguna manera esa colaboración podrá entenderse como dispuesta a admitir limitación alguna en los debates que se generen.

Creo que la discusión amplia de estos importantes asuntos es indispensable. Lo que ocurre es que la Honorable Cámara se encuentra demorada en su actividad por los incidentes de anoche suscitados con motivo de las imprudentes manifestaciones de sus miembros del sector oficialista, que, lógicamente, repercutieron en otros sectores y crearon los problemas que ahora el cuerpo está sufriendo con esta *impasse* que se advierte y que mantiene la incertidumbre sobre la posibilidad de seguir sesionando.

Con estas expresiones dejo fundada la posición de mi bloque que, como manifiesto, adhiere a toda proposición encaminada a seguir tratando el Estatuto de los Partidos Políticos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Simplemente deseo expresar, en nombre de mi sector, que adherimos a las propuestas formuladas por los señores diputados Sago y Ghioldi, en el sentido de pasar a cuarto intermedio hasta las 15, para poder, si fuera posible, terminar en la sesión de la fecha la discusión en particular del Estatuto de los Partidos Políticos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra la señora diputada Valente de Pérez Tort.

Sra. Valente de Pérez Tort. — Mi bloque quiere adherir a la sugestión del señor diputado

Ghioldi de pasar a cuarto intermedio hasta las 15; pero, sobre todo, quiere formularle al señor diputado Catalán, cuyas expresiones han llenado de satisfacción mi espíritu, la sugestión para que realice ante su bloque las gestiones necesarias a fin de que concurra a formar quórum.

Creo que ello es fundamental, porque a ese sector es a quien más interesa el Estatuto de los Partidos Políticos, estatuto que no es de mi preocupación porque no creo que sea una ley tan necesaria para el país. Estimo que mucho más necesarios son el presupuesto y las reformas impositivas.

Pero de todas maneras, como no podemos estancar la labor de la Honorable Cámara, sugiero que el señor diputado Catalán realice ante su bloque las gestiones que estime necesarias a fin de que el mismo integre el quórum para continuar con el tratamiento de esta ley.

Lo mismo digo a los bloques de la UCRI y del MID.

Sr. Pizarro. — Y al de UDELPA.

Sra. Valente de Pérez Tort. — Sí, señor diputado. El bloque de UDELPA está presente, están casi todos sus integrantes.

Sr. Pizarro. — Hay tres solamente. Tres, pero buenos. (*Risas.*)

Sra. Valente de Pérez Tort. — De todas maneras, lo que persigo no es hacer cargos a ningún bloque en especial, ni al suyo tampoco.

Sr. Pizarro. — Queremos trabajar, señora diputada. Estamos de acuerdo.

Sra. Valente de Pérez Tort. — Es necesario hacerlo, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Habiendo asentimiento, invito a los señores diputados a pasar a cuarto intermedio hasta la hora 15. Así mismo invito a reunirse a los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria a la hora 14 y 30.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 12 y 37.

—A la hora 17:

2

CONTINUACION DE LA SESION

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

3

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa a la Honorable Cámara que en estos momentos se encuentran 82 señores diputados en el recinto y 107 en la casa.

Prosigue la consideración en particular del dictamen de la mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, contenidos en el orden del día 417, sobre Estatuto de los Partidos Políticos.

Corresponde votar, de acuerdo al estado en que quedó el debate en la víspera, el artículo 9º, del capítulo I, del título II (1).

Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — En la sesión de ayer se planteó, por uno de los sectores políticos de la Honorable Cámara, la preocupación que podría derivarse de la posible meritución que hiciera la justicia electoral para resolver situaciones emergentes del cumplimiento de esta ley, fundado en la realización de hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la ley que está en discusión.

La Comisión de Asuntos Constitucionales desea destacar, y esto por vía de interpretación auténtica, respondiendo al interrogante formulado, que en su seno, y por unanimidad cuando este punto fue tratado, se consideró que hechos anteriores a la vigencia de esta ley no podrán en ningún caso fundamentar una resolución negativa de la justicia electoral nacional, referida a cualesquiera de los aspectos de la ley sometidos a su competencia, en especial modo el reconocimiento de los partidos.

Pluralidad de razones de orden jurídico explican este concepto con una claridad meridiana, a punto tal repito, que ha recibido la unánime interpretación, el unánime acuerdo que sobre el mismo se llegó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que desea en esta instancia dejarlo precisamente establecido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Deseo recordar al señor diputado García que un artículo casi exactamente igual al que se propuso en la sesión de ayer, lo presentó el diputado que habla en el seno de la comisión, porque justamente consideraba que era necesario establecer una cláusula que dijera eso a los efectos de evitar interpretaciones que pudieran, so pretexto de invocarse hechos anteriores a la vigencia de la ley, posibilitar proscripciones políticas.

De manera que quiero dejar aclarado que, en la interpretación del diputado que habla, miembro de la comisión, es menester incluir un artículo de igual o parecida redacción a la que ha propuesto, para evitar todo tipo de dudas sobre la interpretación judicial.

Por lo demás, señalo que no hubo unanimidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales para hacer esa interpretación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Suongo que la unanimidad a que se ha referido el señor diputado García, es la interpretación. De todos modos, como este texto que se ha debatido ayer con amplitud, no ha sido votado por la comisión por falta de tiempo, queda en claro que el re-

sultado está librado a la voluntad de cada uno de los señores diputados en la votación que realice el cuerpo, sin que la comisión emita opinión al respecto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Simplemente para reiterar en nombre de mi bloque que vamos a votar afirmativamente la inclusión de este inciso nuevo, como lo hemos solicitado, entendiendo que, aún superabundante desde el punto de vista jurídico, es aclaratorio de estas situaciones anteriores a que se han referido los miembros informantes. Entendemos que ese inciso es necesario.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Quiero dejar sentado que en oportunidad en que el señor diputado Musacchio propuso en la comisión el agregado de esta disposición, en el sentido de que no podrán invocarse hechos del pasado para adoptar disposiciones contra los partidos políticos que de hoy en más actúen en la vida cívica del país, yo adherí en nombre de mi bloque a esa proposición. De manera que estando salvado por el señor diputado Belgrano Rawson el sentido de la unanimidad a que aludía el señor diputado García, quiero dejar expresa constancia de que esa fue nuestra posición y será igual en el recinto. Votaremos por la afirmativa, por cuanto para nosotros este agregado garantiza efectivamente que no podrán invocarse hechos del pasado para la actuación futura de los partidos políticos.

Sr. Ferreira. — ¿Cuál sería el texto considerado como de la comisión? ¿El impreso en el orden del día?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Está en discusión el capítulo I del título II, artículos 9 a 15.

Sr. Ferreira. — Pero el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales ha expresado que el texto que anunció en la sesión de ayer no había sido aprobado por la comisión y, en consecuencia, no se mantenía como tal.

Sr. Belgrano Rawson. — ¿El señor diputado se refiere al propuesto inciso 3º del artículo 15?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Belgrano Rawson. — No es texto de la comisión. Es una propuesta del sector justicialista y la comisión no lo votó. De manera que la suerte de la incorporación o no de ese inciso queda librada al voto del cuerpo.

Sr. Ferreira. — Nuestro bloque va a apoyar el agregado propuesto por el bloque justicialista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se procederá a pasar lista.

—Se pasa lista.

—Mientras se pasa lista:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Hay número en el recinto. La Presidencia apela a la buena voluntad de todos los señores diputados para que se sirvan mantenerse en el recinto, puesto que deben realizarse sucesivas votaciones.

(1) Véanse Diarios de Sesiones del 30 de noviembre, y del 1º, 2 y 3 de diciembre de 1964, páginas 6608, 6719, 6754 y 6821, respectivamente.

Se va a votar el artículo 9º del despacho de la comisión.

—Resultado afirmativa de 81 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el artículo 10, que no tiene observaciones.

—Resultado afirmativa de 95 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el artículo 11, que no tiene observaciones, salvo aquellas motivadas por errores de impresión, y que en el caso particular de este artículo han sido enunciadas por el señor diputado González Bergez.

—Resultado afirmativa de 93 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— En consideración el artículo 12.

Por Secretaría se dará lectura de una modificación propuesta por la comisión.

Sr. Secretario (Oliver).— En este artículo la comisión ha propuesto suprimir algunas palabras, quedando redactado de la siguiente manera: «Los partidos confederados tienen el derecho de secesión y podrán denunciar el acuerdo que los confedera. Sus organismos centrales carecen del derecho de intervención.»

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 92 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— En el artículo 13 la comisión ha propuesto la supresión de la palabra «confederados».

Se va a votar el artículo 13 con la modificación propuesta por la comisión.

—Resultado afirmativa de 93 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— La comisión ha propuesto modificaciones al artículo 14.

Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario (Oliver).— Dice así: «Artículo 14-1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los partidos de distrito o nacionales y las confederaciones que hubiesen sido reconocidos podrán concertar alianzas transitorias con motivo de una determinada elección, siempre que sus respectivas cartas orgánicas lo autoricen.»

El apartado 2 queda igual que el despacho, pero hay una modificación del señor diputado Domínguez que dice así: «El reconocimiento de la alianza deberá ser solicitado por los partidos que la integren, al juez nacional electoral del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, por lo menos dos meses antes de la elección, cumpliendo los siguientes requisitos...» Luego seguiría el mismo texto del despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig).— ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor diputado Domínguez?

Sr. Belgrano Rawson.— Es cambiar el tiempo de un verbo, lo que mejora la redacción. La comisión acepta la modificación.

Sr. Secretario (Oliver).— El inciso a) del apartado 2 se propone redactar en la siguiente forma: «La constancia de que la alianza fue resuelta por los organismos deliberativos máximos partidarios, en reunión convocada especialmente al efecto y por el voto de las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio.»

Los incisos b) y c) del apartado 2, quedan igual que en el dictamen de la mayoría.

El inciso d) quedaría redactado así: «Constancia de la forma acordada...», y luego seguiría el mismo texto del despacho.

El inciso e) se iniciaría así: «La designación...», siguiendo luego el texto del despacho.

Sr. Martínez Raymonda.— Que se vote por partes este artículo, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el artículo 14, por partes, con las modificaciones leídas por Secretaría.

Se va a votar el apartado 1.

—Resultado afirmativa de 85 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el encabezamiento del apartado 2.

—Resultado afirmativa de 84 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el inciso a) del apartado 2.

—Resultado afirmativa de 66 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el inciso b).

—Resultado afirmativa de 80 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el apartado c).

—Resultado afirmativa de 80 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el apartado d).

—Resultado afirmativa de 81 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el apartado e).

—Resultado afirmativa de 84 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— En consideración el artículo 15.

Por Secretaría se va a dar lectura de una modificación propuesta por la comisión.

Sr. Secretario (Oliver).— La comisión propone suprimir en el apartado 1, las palabras

confederados o fusionados», reemplazándolas por «o confederaciones».

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el artículo 15, por partes.

Se va a votar el apartado 1, con la modificación leída por Secretaría.

—Resultado afirmativa de 80 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el apartado 2 del artículo 15.

—Resultado afirmativa de 84 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Por Secretaría se leerá un agregado propuesto por el señor diputado Serú García, que iría como apartado 3.

Sr. Secretario (Oliver).— Dice así: «3. En ningún caso se negará el reconocimiento por hechos anteriores a la vigencia de esta ley.»

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar.

—Resultado negativa de 66 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Ferreira.— Pido que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a rectificar la votación.

—Resultado negativa de 67 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— En consideración el capítulo II que comprende los artículos 16, 17 y 18.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson.— Señor presidente: dentro del capítulo II, relacionado con el nombre del partido, la comisión propone una ligera modificación en el inciso 3º del artículo 16, en la tercera línea, donde dice: «... así como también...» debe decir: «... como así también...»

Y se propone incorporar un nuevo artículo, a continuación del 18, cuyo texto hago llegar a la Secretaría.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el artículo 16.

—Resultado afirmativa de 89 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el artículo 17.

—Resultado afirmativa de 96 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el artículo 18.

—Resultado afirmativa de 93 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a dar lectura por Secretaría del texto del artículo nuevo que propone la comisión y que iría a continuación del 18.

Sr. Secretario (Oliver).— El artículo nuevo que se propone vaya a continuación del artículo 18, es el siguiente: «Se reconoce así mismo a los partidos el derecho al uso permanente de un número de identificación, el que será asignado por la justicia nacional electoral y registrado de acuerdo con lo establecido en el artículo 50. La primera vez la adjudicación se realizará por sorteo, y en los partidos que en el futuro se reconozcan, en el orden numérico correspondiente a la fecha de su reconocimiento.»

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 62 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Zarriello.— Que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a rectificar la votación.

—Resultado afirmativa de 53 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— En consideración el capítulo III, artículos 19 y 20.

Sr. Belgrano Rawson.— No tienen modificaciones.

Sr. Presidente (Mor Roig).— La Presidencia para tomar las votaciones enunciará el número que los artículos llevan en el despacho de la mayoría de la comisión. Oportunamente se ordenará la numeración.

Se va a votar el artículo 19.

—Resultado afirmativa de 97 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el artículo 20.

—Resultado afirmativa de 96 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— En consideración el capítulo I del título III, artículos 21 y 22.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson.— Señor presidente: con relación al título III, capítulo I, la comisión, después de considerar largamente su contenido, propone por el voto mayoritario las modificaciones que enunciaré.

Por de pronto, el título III debe denominarse «De la doctrina y organización», y el capítulo I, debe tener el siguiente epígrafe: «De la declaración de principios, programa o bases de acción política.»

El artículo 21 se propone sustituirlo por el siguiente texto: «La declaración de principios y el programa o bases de acción política deberán ajustarse de manera formal y real a las exigencias del artículo 3º, inciso b) y orientarán la acción del partido.»

El artículo 22 debe ser sustituido por el siguiente texto: «No cumplen con los requisitos del artículo anterior los partidos que por su doctrina o en su actuación —por la vía de sus organismos o candidatos— lleven a la práctica

en su organización y vida interna o en su acción exterior la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza y la concentración personal del poder.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena.

Sr. Domingorena. — Señor presidente: ni demasiadas ilusiones ni acentuado pesimismo tiene este bloque respecto a la elaboración del Estatuto de los Partidos Políticos. Afirmamos que los estatutos o las leyes no engendran a las fuerzas políticas, de la misma manera que advertimos que el derecho es hijo y no padre de la realidad.

Creemos firmemente que el deterioro de nuestra democracia ha ido en aumento en la medida en que hemos pretendido enjaular a las fuerzas cívicas, que tienen bases de sustentación en las formaciones sociales más que en las leyes, razón por la cual cualquier tipo de reglamentarismo o proscripciones atenta contra la democracia integral que nosotros queremos ver constituida en la República.

Gino Germani ha señalado a través de un tratado las etapas que ha vivido la República en materia de expresión democrática. Señala una primera etapa como la guerra de liberación y de emancipación; luego han sucedido aquí guerras civiles, anarquía y caudillismo, autocracias unificadoras; democracias representativas y con participación limitada, con el resultado propio de la oligarquía; democracias representativas con representación ampliada, y democracias representativas con participación total.

Es evidente que en la medida en que el mundo asoma a la etapa industrial, la movilización y la integración exigen que los poderes públicos sean comprensibles de esta presencia multitudinaria de masas y traten, por todos los medios, de canalizarlas legalmente.

El siglo XIX y los comienzos del siglo XX marcan la presencia de las fuerzas políticas. Pero a medida que hemos avanzado en esta fase evolutiva de la democracia, en la Argentina, desgraciadamente, nos hemos ido alejando de la presencia del pueblo, que debe ser canalizado por procedimientos legales que tengan como finalidad lógica las urnas. Creo que uno de los mayores males que padece el país es, precisamente, la marginación de fuerzas políticas, a las cuales, mediante el subterfugio de la ley, se las está desplazando.

Se ha hablado mucho de los grupos de presión en largos discursos. Estos grupos de presión, de distinta estructura morfológica a los partidos políticos, son la respuesta que está recibiendo esta democracia convulsionada, que en la Argentina ya asume caracteres alarmantes, pues en la medida en que no pueden ser representados por fuerzas políticas buscan distinto cauce.

Si es cierto que queremos partidos vigorosos y posibilidad de que la ciudadanía esté legítima-

mente representada con autenticidad por las fuerzas políticas, lo que tenemos que hacer es posibilitar que todos los sectores sociales puedan elegir el partido de su preferencia, y, mediante las disposiciones legales, dar la mano por medio del Estado para que las voluntades no se distorsionen en su expresión y para que no busquen cauces que no sean los que convienen a la democracia.

Decimos esto porque entendemos que el artículo, como está redactado por la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no hace otra cosa que introducir las proscripciones en la vida política del país. Lo decimos así, con franqueza, sin énfasis, y alertando al sector mayoritario, porque todavía estamos a tiempo de corregir tamaño error.

De nada valdrá que la ley margine a sectores políticos; nada lograremos nosotros con introducir artículos como el que se termina de leer, que mediante una literatura confusa va a cercenar expresiones populares, porque con ello no resolveremos con la ley un problema, sino que contribuiremos a agravarlo.

Hemos de decir que este Estatuto de los Partidos Políticos no va a resolver, por cierto, el acontecer democrático de la República. Pero sí, en la medida en que juguemos con limpieza, puede ayudar a corregir una serie de deficiencias que hasta el presente han distorsionado nuestra vida política y han hecho de nuestra democracia una caricatura. Sostenemos que es necesario jugar con honradez, dar posibilidades a todos para que concurren a votar por su programa y por su ideal a través de una fuerza representativa.

Es por eso que nosotros hemos redactado y sometido a la Comisión de Asuntos Constitucionales un artículo 21 que establece lo siguiente: «No se otorgará reconocimiento a ningún partido que en su doctrina, declaración de principios, programa o bases de acción política promueva la desobediencia a las leyes, la sustitución por la violencia de los poderes constituidos o la reforma de la Constitución por medios distintos a los que la misma establece.»

Vale decir que admitimos que se enmarque a los partidos políticos dentro de lo que llamamos preceptos fundamentales de la Constitución, pero de ninguna manera apartándonos de ellos trataremos de estimular, de aconsejar o de intervenir en la organización interna de los partidos, marcándoles la forma en que tendrán que actuar, las cosas que tendrán que decir y cómo tendrán que conducirse.

Es por eso que nosotros llamamos a la reflexión. No pensamos ingenuamente que la ley va a resolver los problemas acuciantes de la hora. Lacordaire señaló en una oportunidad que en la lucha entre el fuerte y el débil, la libertad es la que esclaviza y la ley es la que libera. Esto estaba dicho en base al conjunto de ilusio-

nes que vivía la democracia, que basaba todas sus posibilidades en las disposiciones normativas. Pero está visto que la norma y la ley no traen la felicidad del hombre y, muchas veces, inclusive, contribuyen a perturbarla.

Creo firmemente que en este Estatuto de los Partidos Políticos debe jugar con generosidad esta cláusula, que para mí es esencial. El resto podrá tener variantes o sufrir mayores o menores controversias, pero la esencia del Estatuto de los Partidos Políticos está dada a través del artículo que estamos considerando en este momento. Estimo que tenemos que jugar, como dije recién, limpiamente, buscando soluciones y no complicando las cosas. Es por eso que me voy a permitir en estos breves minutos de que dispongo para establecer la posición del bloque de la Unión Cívica Radical Intransigente, expresar con toda claridad nuestro fundado temor —casi diría nuestra seguridad— de que éstas son normas proscriptivas.

Voy a cerrar mi breve exposición con las palabras que Pellegrini pronunció en el año 1905 cuando se trataba la ley de amnistía. Dijo en aquel entonces: «Sólo habrá ley de olvido, sólo habrá ley de paz, el día que todos los argentinos tengamos iguales derechos; el día que no se los coloque en la dolorosa alternativa de renunciar a sus garantías de ciudadanos y apelar a las armas para reivindicar sus derechos.» Con vista a ello, y formulando mis votos para que nadie necesite alterar la ley ni salirse del cauce constitucional, solicito que la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ha sometido a consideración de este cuerpo los artículos evidentemente proscriptivos que acabamos de escuchar, cambie la redacción de los mismos, admita jugar con amplitud a todas las fuerzas políticas y busque a través de la ley la conciliación nacional, en la que todos estamos comprometidos y a la que todos debemos nuestro mayor esfuerzo si es que en verdad buscamos la preservación y afianzamiento del régimen democrático. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Almada.

Sr. Almada. — Voy a proponer al despacho modificado por la comisión, el siguiente agregado: «o la implantación de regímenes autocráticos o totalitarios».

Entendemos que este estatuto está destinado fundamentalmente a crear condiciones de evolución pacífica del régimen democrático argentino; que no está destinado a ser una transacción entre la democracia y la dictadura, sino a un restablecimiento pleno, a un fortalecimiento verdadero y permanente del régimen democrático y, por lo tanto, me parece que es absolutamente razonable que quienes aspiren a actuar en un régimen democrático, no puedan sostener al mismo tiempo la implantación de regímenes que no lo sean. Es decir, sostenemos la prohibición de implantar, exaltar o auspiciar regímenes

totalitarios. Con esto nosotros no auspiciamos de ninguna manera la marginación de sector alguno del pueblo argentino. Lo que queremos en definitiva, y esta es la aspiración del país y de los partidos políticos que están aquí representados y de los que en el futuro aspiren a obtener representaciones legítimas, es que la democracia quede restablecida con carácter definitivo. Lo que queremos es evitarle sobresaltos, y evitar que el país pase de un día para otro, de la democracia a la dictadura, por el voto ciudadano a través de partidos que en última instancia no se proponen sino restablecer un régimen autocrático.

Queremos evitar la presencia en la política argentina de esos grupos de presión a que hacía referencia muy claramente el señor diputado por Entre Ríos en un análisis objetivo de la realidad argentina. Queremos evitar que se tenga que llegar de nuevo, por ejemplo, a anular elecciones, porque resulta que después de los comicios nos damos cuenta de que uno de los contendores no era democrático y, en consecuencia, con el voto ciudadano habríamos abierto las perspectivas de una dictadura. Esto es lo que queremos evitar cuando deseamos incluir en este estatuto político cláusulas que sean verdaderamente preservatorias de la democracia. Creo que a ningún partido político democrático puede alarmarle lo que esta ley, este estatuto o los partidos políticos que funcionan acogidos a normas de orden, tenga o contenga estos resguardos que son consustanciales al sistema. Me alarma sobremanera que haya partidos políticos que puedan, acogiéndose a las garantías que la democracia da, llegar a los comicios y reimplantar a través de ellos el régimen dictatorial.

Esta es una cláusula esencial y guarda relación muy lógica y atendible con lo que hemos sostenido en la sesión de ayer, cuando propusimos incluir en el artículo 13 una cláusula que también fuera limitativa para los partidos políticos que reciban inspiración externa, ya sea de entidades, organizaciones, Estados o residentes argentinos o extranjeros en el exterior. Nosotros sostenemos que esta es una ley destinada a organizar la vida de los partidos, a auspiciar la creación de nuevas agrupaciones que actúen en función de las necesidades políticas argentinas y de ninguna manera para restablecer combinaciones políticas desdoradas para el régimen democrático y que son, precisamente, las que han restado a nuestra democracia la estabilidad deseada. Si en 1958 o a partir de 1955 los partidos hubieran actuado en un plano de responsabilidad pareja con respecto a la democracia y no se hubieran dedicado a adular lo que consideraban una especie de herencia vacante de la tiranía, el país hubiera alcanzado ya entonces la estabilidad que todavía nos falta, porque hay aún partidos políticos que se debaten en el péndulo de la democracia o la dictadura para establecer qué es lo que les conviene: si ser demócratas o dictatoriales.

La Argentina no puede de ninguna manera dar un salto en el vacío y mucho menos a través de una ley que como ésta será la expresión de la democracia, representada por todos sus partidos. Cuando hablo de esta manera me refiero con beneplácito a los partidos políticos que, organizados por quienes fueron en un momento sostenedores de aquel sistema dictatorial, hoy se confunden con nosotros y a quienes queremos ver definitivamente emancipados de estrategias en las que no se juegan los intereses, ni el futuro democrático de la Nación.

Por eso propugnamos que el Estatuto de los Partidos Políticos, limpiamente, sirva para la organización de la democracia y la vida interna de los partidos políticos, pero de ninguna manera de los partidos que puedan enmascarar sus designios totalitarios.

Sr. Luco. — Quiere disfrazarnos de gorilas.

Sr. Almada. — No; quiero emanciparlo a usted de la presión dictatorial.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Me voy a referir muy brevemente a las dos observaciones que se acaban de hacer a los nuevos textos propuestos por la mayoría de la comisión para los artículos 21 y 22 del estatuto.

Señalo con absoluta convicción que en ninguno de estos dos textos que propone la mayoría de la comisión hay encerrada, en forma directa o velada, ninguna actitud proscriptiva con relación a partidos democráticos. Señalo, señor presidente, que es una apreciación exagerada haber dicho en este recinto que por la vía de estos dos textos se desplazan o cercenan expresiones populares. Destaco que no hay falta de generosidad en la redacción de estos textos. Destaco también que la mayoría de la comisión, al sustituir el despacho originario por los textos propuestos, ha jugado limpio y no en forma distinta, como se ha insinuado.

Pueden tener la seguridad todos los partidos políticos representados en la Honorable Cámara, y también aquellos que no lo están, pero que adhieren a los principios democráticos, que en el pensamiento de ninguno de los miembros de la comisión que ha redactado este estatuto ha habido la intención de establecer proscripciones para el futuro. Estamos convencidos por formación democrática y porque creemos, todos los miembros de la comisión, que en este país hay que entrar en el auténtico juego limpio y sin veladas intenciones.

En cuanto a la propuesta de incorporación de los términos «autocrático» y «totalitario» del señor diputado Almada, señalo, en nombre de la comisión, que consideramos que la presencia de estos términos en el texto legal es excesiva e innecesaria porque los conceptos de autocracia

y totalitarismo están comprendidos en la antidemocracia.

El artículo 22, señor presidente, da cuatro notas características de la antidemocracia, que son bien concretas y claras. Incurren en ella todos los partidos que por la vía de sus organismos o candidatos —que en el momento de la elección están representando la opinión del partido mientras éste no los desmienta—, en la vida interna de la entidad o en su acción exterior, nieguen los derechos humanos, que tienen vigencia en nuestro país no solamente por haber sido incorporados en la Carta de las Naciones Unidas sino porque desde mucho antes que ella rigen en nuestra Constitución de 1853, en el capítulo de declaraciones, derechos y garantías. Incurren en la antidemocracia los partidos que propugnen la sustitución del sistema democrático. Incurren en antidemocracia los partidos que propugnen el empleo ilegal y sistemático de la fuerza. Incurren en antidemocracia los partidos que propugnen la concentración personal del poder.

Con un criterio ingenuo, señor presidente, de lo que es la democracia y la libertad, se podría sostener que en esta época del mundo no hacen falta normas de este tipo porque la vigencia de la libertad no debe ofrecer valla alguna a quienes proponen sustituir la libertad.

Dije en mi discurso durante el tratamiento en general del despacho, y también lo han señalado varios miembros de la comisión en esa misma oportunidad, que proponer la libertad en la democracia no significa llevar las instituciones al suicidio político. Todos los países democráticos modernos tienen normas que los preservan contra el avance de las mentalidades totalitarias. Este es el único y preciso sentido que tienen las dos cláusulas que propone la comisión.

Y agrego, para terminar, señor presidente, que se ha señalado en la discusión en general que el artículo 22 tal como estaba redactado en el despacho originario constituía una especie de catálogo de las lacras de la política argentina, de las cuales todos los partidos, sin excepción, son responsables, incurriendo en uno o en otro de esos enunciados.

Hemos creído que era mucho más elegante, mucho más castizo y mucho más preciso redactar este artículo 22 en la forma que lo propone ahora la comisión.

Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Casas.

Sr. Casas. — Señor presidente: oportunamente el señor diputado Luco ha de referirse, en representación de nuestro bloque, a la tesis que sustentamos en cuanto propugnamos la supresión total del artículo 22.

Pero muy brevemente, y en homenaje al clima de conciliación que existe en esta Honorable Cámara, voy a exhortar una vez más a los se-

ñores diputados a que rechacen en la misma forma que lo hicieron ayer, ésta proposición del señor diputado Almada y por las mismas razones que tuvo la Comisión de Asuntos Constitucionales, siguiendo el criterio que ha sintetizado tan bien el señor diputado Belgrano Rawson en las palabras que acaba de pronunciar, cuando dijo que este Estatuto de los Partidos Políticos se ha realizado sin veladas intenciones.

Esto quiere decir, en suma, que es absolutamente cierta la vocación que han tenido y que tienen todos los bloques parlamentarios de esta Honorable Cámara, en el sentido de aniquilar definitivamente las proscripciones y abrir las puertas a la libertad política.

Por otra parte, señor presidente, y para ser muy sintético, yo diría que todas estas vallas a la libertad política que propone el señor diputado Almada pueden funcionar nada menos que como detonantes y que pueden crear efectivamente, en el futuro, propensiones a los totalitarismos. O, dicho en otros términos, estas vallas que pretenden interpolar el señor diputado Almada funcionarían algo así como en los Estados Unidos, por ejemplo, ha funcionado la denominada «ley seca». El se propone impedir los regímenes totalitarios, pero interpola frases que están decididamente en contra del espíritu de esta ley, plenamente amplia en el sentido de garantizar definitivamente la libertad política ahora y hacia el futuro.

Es decir que, concretamente, está pretendiendo crear instituciones que van a ser nada menos que la fuente de propensiones futuras al totalitarismo.

Sr. Almada. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Casas. — Yo, señor presidente, le permito una aclaración al señor diputado con mucho gusto, pero con la condición de que sea una aclaración y no un discurso de tipo vehemente e irritativo como los que acostumbra a pronunciar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Almada.

Sr. Almada. — En verdad, si mis discursos y opiniones han resultado irritativos para el señor diputado, habrá sido por sus ideas y no por las mías.

Quiero decir simplemente que esta cláusula está destinada a que nadie tenga intenciones veladas y a que nos expresemos en un lenguaje claro, que sea comprensivo para el pueblo, a quien en definitiva están dirigidos esta cláusula y este estatuto. Este no es una ley destinada a ser el breviario de los dirigentes políticos que quieran realizar combinaciones a espaldas del país. Este es un estatuto para el pueblo, y el pueblo sabe muy bien lo que es un régimen autocrático y totalitario.

De manera que no creo —y respondo también a la comisión— que sea superfluo el agregado que propongo, si está dentro del espíritu y de la intención manifiesta y pública del estatuto, según el mensaje que le ha precedido y la opinión conocida de todos los señores diputados y de todos los partidos políticos.

Sr. Vedia. — Eso de que el pueblo sabe lo que es un régimen democrático está por verse.

Sr. Jofré. — Es responsabilidad de los dirigentes hacérselo saber.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Casas.

Sr. Casas. — Efectivamente, señor presidente, si el señor diputado Almada dice que hablamos lenguajes diferentes, yo me preguntaría cuál sería el lenguaje diferente si, precisamente, este bloque parlamentario ha resultado de elecciones en las cuales, prácticamente, una verdadera mayoría del pueblo argentino se ha volcado, apoyándonos.

En segundo lugar, con respecto a este problema de las veladas intenciones, yo creo, señor diputado, que acá, al sancionarse un estatuto de los partidos políticos, lo que debemos volcar como valor esencial de este estatuto político en el futuro es la plena fe que tenemos y que tienen todos y cada uno de nosotros para las grandes perspectivas del futuro.

No es posible, en modo alguno, que no se acepte este criterio, pues ello significaría aceptar la duda que puede tener el señor diputado Almada y que yo estoy seguro que no la comparten en modo alguno el resto de los señores diputados que integran esta Cámara. Ante la duda del señor diputado Almada destaco que nosotros somos plenamente optimistas de poder realizar la democracia a través de este estatuto que asegura la libertad política y de que todos los partidos van a poder encauzarse dentro de ella.

En cambio, mediante la propuesta del señor diputado Almada se pretende nada menos que echar la desconfianza —deliberadamente me lo imagino— dirigida especialmente a los partidos que integran este bloque justicialista.

Ya hemos hablado en largas e históricas sesiones de la vocación democrática y republicana del justicialismo y, en consecuencia, a la democracia le queda nada menos que uno de estos dos caminos: o se proscribiera definitivamente al justicialismo —y en tal caso no podrían realizar la democracia—, o, en su defecto, se tiene plena confianza y se le abren las puertas para el quehacer futuro, que es hacer la grandeza y la paz de la República.

Nosotros invitamos a los bloques parlamentarios a rechazar definitivamente la proposición del señor diputado Almada, como muy bien lo hizo ayer, con otra proposición parecida, bus-

cando en la confianza recíproca el porvenir grande, luminoso y venturoso de la democracia en la Argentina.

Al rechazar esta proposición del señor diputado Almada, la Cámara de Diputados está dando un paso hacia adelante y, permítaseme repetirlo, para calificar la moción del señor diputado Almada, yo reitero aquella frase, un poco dura quizá, pero absolutamente exacta y valedera para calificar dicha moción del señor diputado Almada, afirmando que ella constituye una barbaridad jurídica dentro de la democracia y de la República.

Esperamos confiados en la ecuanimidad de los señores diputados para rechazar absolutamente esta proposición y que con ello se cumplan los propósitos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ha querido estructurar un estatuto para la libertad y para la democracia, sin desconfianza, y con plena confianza por el porvenir del régimen democrático que vamos a instaurar a través de este estatuto político.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ghioldi.

Sr. Ghioldi. — Señor presidente: sobre la materia que tratamos los socialistas democráticos hemos expresado, por intermedio de los señores diputados Rozas y Solari, nuestros puntos de vista. Sobre el candente problema político que está presente en el curso de nuestras deliberaciones de un año a esta parte, creo que he tenido, a mi vez, oportunidad de expresarme con amplitud y claridad.

La Argentina vive en estos instantes momentos de fe, de afirmación y de confianza. Momentos de fe en Mayo y en la Constitución; momentos de afirmación en sus instituciones, y momentos de confianza de que aquella fe y aquellas afirmaciones sean robustecidas con aportes que todavía no habían podido jugar en los últimos años.

Este no es un estatuto proscriptivo, explícita o implícitamente. Y, en todo caso, no es más proscriptivo que la Constitución misma. La Constitución también es en esencia una «afirmación» y una «proscripción» de la anticonstitución. El estatuto es para regir, promover y amparar partidos políticos democráticos. Tal es la esencia del estatuto y sólo en cuanto haya agrupaciones no democráticas que quieran gozar de sus disposiciones, el estatuto es proscriptivo; como que la dictadura y la tiranía son objeto de proscripciones por la Constitución.

Sin este estatuto se ha impedido hace algunas horas el retorno de un régimen anticonstitucional por la razón fundamental que la realidad histórica nunca será contenida por un estatuto reglamentario. Las luchas de la historia, cuando llegan a su extremo, son resueltas por la fuerza del número y el número de la fuerza.

De modo, pues, que las cláusulas contenidas en el despacho no han servido —desde el momento en que han sido proyectadas por el Poder Ejecutivo, hasta la última formulación alcanzada en la redacción que acaba de leer el señor miembro informante— sino para demostrar hasta la saciedad que todos los que están dispuestos a votarlas demostraron espíritu plástico, comprensivo, cooperante y abierto.

Las primeras formulaciones del Poder Ejecutivo parecieron a cierto sector excesivamente rígidas; la comisión se allanó a las razones o suspicacias, dando entonces una formulación menos molesta o hiriente. Finalmente, en un último esfuerzo de tolerancia, de comprensión y de revelación de su propio espíritu, la comisión propone una condensación más generalizada de sus propios preceptos que, en definitiva, no son sino los propósitos de conservar y mantener algo fundamental que no pertenece a los partidos políticos sino a la Nación, a la historia y a los por nacer, que es muy importante.

¿Por qué la Constitución consta de tres partes esenciales? Primera, un preámbulo, invocación religiosa de los grandes principios de filosofía política; segunda, declaraciones, suma de preceptos normativos que hacen al hombre, a su integración y a la perfección del hombre en las instituciones; tercera, las cláusulas relativas a la organización institucional.

Estas tres gradaciones están indicando grados decrecientes de generalidad. La invocación tiene que ser amplia, formulada con unción religiosa, de esa religiosidad histórica, religiosidad cívica que todos estamos construyendo, unos al margen de la otra religión y otros complementando aquel tipo de religiosidad. Viene luego la afirmación de los principios que son la definición del concepto del hombre argentino. No queremos un hombre esclavo, no queremos un hombre de dictadura ni un servil ni un hombre torturado por las opresiones de un poder omnimodo que hace reír o llorar según sean las necesidades del Estado. Es la definición de un hombre que encuentra en la vida institucional la forma de su pleno desenvolvimiento. Finalmente, la parte institucional instrumenta la vocación y los propósitos de filosofía contenidos en las declaraciones, garantías y derechos de la Constitución.

Yo diría más, señor presidente. Así como la declaración de los derechos del hombre de 1789 no se entiende sino por los horrores que la humanidad había pasado antes de esa fecha, y la declaración de 1948 no se entiende sino por los horrores del facismo y del hitlerismo; así como la Constitución Argentina no se entiende si no se recuerdan los horrores y los dolores de las décadas anteriores, yo diría que este estatuto, en su formulación, no se entiende si no se recuerdan los padecimientos individuales y colectivos que esta Nación ha sufrido en un momento de extravío. Lo que se desea es que

ese momento de extravío no aparezca más. Reitero a mis estimados colegas que están sentados a mi derecha que yo tengo confianza en ellos; creo que está en ellos la posibilidad de desempeñar una gran función de asimilación de fuerzas que andan flotando. Confío en que tengan ese poder de asimilación. No es para ellos este reglamento, ni para nadie. Es para evitar el retorno de la tiranía que hace 48 horas, declarada o silenciosamente, en cada una de las conciencias tenían todos los señores diputados.

Señor presidente: con estos votos, con estos propósitos, con estas concepciones de la historia argentina, es que nosotros votaremos el despacho, así sea disminuido o condensado en su propósito inicial, formulado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el deseo de afirmar una fe: la fe de Mayo; de afirmar una filosofía: la filosofía de la Constitución; y de robustecer unas instituciones: las instituciones democráticas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Señor presidente: naturalmente, no voy a entrar —no estaría en mí la facultad de hacerlo— a juzgar intenciones, las rectas intenciones que creo ha tenido la Comisión de Asuntos Constitucionales al proponer, luego de sucesivos cambios, la actual redacción del artículo 22, a pesar de lo cual nuestro bloque va a mantener su pedido de supresión del artículo por entender que no hay fundamentación suficiente para su inclusión en el texto de este estatuto.

Haré muy breves consideraciones para fundar nuestra posición. He dicho ya que la posición teórica de este bloque ante la estructura legal que significa un estatuto para reglar la vida de los partidos políticos está dada en el debate de 1949 cuando, en ocasión de discutirse en esta Honorable Cámara, los sectores aquí representados expresaron su filosofía política y su concepción jurídica al respecto. También dije que nuestra tesis sigue siendo la misma, basada en las más puras esencias republicanas y democráticas; que aceptábamos, sin embargo, en general, la confección de un estatuto, al cual ponemos nuestra firma a pesar de que contradice esa creencia, por entender que era el vehículo para la armonía y la futura concordia nacional.

Pero este artículo 22 —no podemos silenciarlo— toca de verdad a la estructura de nuestro pensamiento y de nuestra filosofía. Por lo tanto, nuestra oposición no ha variado y vamos a insistir en ella.

La política es la síntesis de las apetencias individuales y de las exigencias comunitarias. En una palabra, es la síntesis de la vida humana, y detrás de ella se alinean las diferentes concepciones. Si esto es así —y lo creo irrefutable— no cabe ninguna duda que esas líneas políticas, que son parcializaciones del afán polí-

tico del hombre para lograr, por esa vía, su felicidad individual y la de su colectividad, son anteriores a la ley. Son sectores o parcializaciones sociales representativas que germinan en el seno de la sociedad, cambian, transmutan o desaparecen según la voluntad o las circunstancias históricas que a una colectividad la llevan por uno u otro rumbo. De ninguna manera, entonces, la ley puede dar nacimiento a esas fuerzas políticas. A lo sumo, puede reglar mínimamente estas actividades electorales y el ejercicio de tipo financiero y administrativo.

No puede la ley pretender —como lo hace este artículo 22— aun con la mejor de las buenas intenciones, hacer definiciones de algo que todavía los filósofos averiguan. Es vana pretensión definir en una ley, en un momento crucial para la vida de la República, por la vía de un instrumento que es sólo un acuerdo para ver cómo marchamos hacia adelante, conceptos como el de democracia. No puede este Congreso, por más sabiduría que crea poseer, decidir qué partidos son o no democráticos, porque ello implica una definición de la democracia y esta definición angustia —no se ha aquietado todavía esa angustia— a todos los hombres pensantes de la política.

Yo no me animaría, y ninguna filosofía política podría hacerlo, a decir que una determinada noción de la democracia es la única, que no tiene respuesta. Siendo así, resulta vana pretensión que en el marco de una ley pretenda definirse algo que es indefinible y quizá mutable, de acuerdo a las circunstancias históricas; y menos hacerlo de aquí para el futuro como una forma rígida de actuación de cualquiera de las fuerzas políticas que se mueven en nuestra sociedad. De ninguna manera, si alguna definición o descripción pudiera intentarse de la democracia, respondería que es la que ha hecho el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, caracterizando a la democracia fundamentalmente como el juego de la libertad.

La libertad es esencial en una democracia. Eso resulta evidente. Es uno de los elementos o ingredientes sustanciales para que la democracia exista. Pero, si no estoy equivocado, la democracia es, en una simplista definición, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo que de inmediato nos lleva a la conclusión asertiva de que la soberanía popular y su ejercicio sin discriminaciones son la base y el valor auténtico de una esencia democrática o de un gobierno democrático.

De tal manera, esta parcialización, más suave ahora, que ha hecho la comisión, frustra las aspiraciones quizá de grandes sectores argentinos futuros, tal vez inexistentes aún, de nuevas corrientes sociales y de nuevas expresiones políticas.

Es una vana pretensión y puede ser un dique antihistórico para la marcha de la Nación hacia adelante.

En aquel debate a que me he referido en oportunidades anteriores, en que nuestra banca —la de 1949— sostuvo que es de la esencia de la democracia y del sistema republicano el ejercicio de la soberanía popular y que, por lo tanto, el Estado, que es mandatario, con el gobierno de turno —por la vía de los poderes Ejecutivo y Legislativo—, mandatario y no mandante de la voluntad de su pueblo, muy pasajero, no puede atar la voluntad popular a algo que el pueblo no puede desear, o sea, la autolimitación del ejercicio de sus facultades, hubo algún diputado de aquel entonces, de la Unión Cívica Radical, unitaria en aquella época, el diputado José Pérez Martín, que dijo: «Yo participo de la opinión enunciada por el señor diputado por Córdoba —se refería al señor diputado Bustos Fierro, que había hablado en nombre de nuestro bloque—. Yo tampoco soy partidario de dictar estatutos para los partidos políticos. Basta solamente una ley sencilla y clara que les fije normas para conservar su eficacia en la vida pública. Los partidos políticos no se crean por ley. Nacen en el seno mismo del pueblo, como expresión de ideas que existen en una democracia en un momento. En una democracia las fuerzas opinan libremente y las opiniones son distintas. Tras esas opiniones se agrupan los distintos partidos políticos.»

Esto, dicho por un adversario político de entonces y de ahora, es también la síntesis de nuestro pensamiento y es la fundamentación real por la que nos oponemos a que este estatuto, cuyas demás cláusulas tampoco nos conforman del todo, porque lo encontramos exageradamente extenso, casuístico, farragoso y reglamentarista, contenga este artículo 22, ya que esta cláusula evidentemente crea —se diga o no se diga, sea ésta o no la intención de la comisión— la discriminación política en la República, y con discriminación política la paz no podrá restablecerse nunca en el país.

Por las mismas razones y con mayor ahínco, anticipo, para concluir, como lo hice antes, nuestra rotunda negativa a que las evidentes intenciones proscriptivas del diputado Almada, ya claramente expuestas, sean incorporadas aquí, porque de hacerlo habríamos borrado los seis o siete meses de trabajo de la comisión y la intención general de este cuerpo para que, superando enconos anteriores y el choque de las pasiones que nos llevaron a luchas que pueden conducir todavía a la República a días más negros, por vía de la ley que sancione este estatuto se integre efectivamente el auténtico cuerpo electoral de la Nación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — El artículo 22 que está considerando la Honorable Cámara, determina en qué casos no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo anterior, el que a su vez se refiere al artículo 3º, inciso b). En él

se intenta señalar —circunstancia con la cual se puede discrepar desde algún punto de vista, pero que tiene en cierta medida su fundamento— la necesidad de que la democracia sea lealmente servida por todos los hombres en el respeto a sus derechos y atributos, para asegurar a los habitantes del país las condiciones mínimas de libertad y de dignidad a que tiene derecho todo ser humano.

Pero yo advierto que tal vez, en la tarea afanosa con que la comisión trabajó en la búsqueda de un artículo que satisficiera y comprendiera las opiniones de todos los sectores de la Honorable Cámara, haciendo esfuerzos para mejorar lo que ya contenía el despacho o para mejorar lo que venía en el mensaje del Poder Ejecutivo, no se ha logrado el propósito —por lo menos en mi concepto— de quitarle subjetividad a este estatuto.

El Estatuto de los Partidos Políticos, o ley orgánica de los partidos políticos, como la hemos dado en llamar, tiene que ser necesariamente un instrumento de paz y de concordia en la República. En la medida en que ciertas susceptibilidades que, aun sin encontrar un fundamento y un fundamento lógicos, pueden mirar con recelo algunas de sus disposiciones, no habrá cumplido integralmente el servicio que todos buscamos al redactarlo y sancionarlo.

El artículo, aun restringiendo al mínimo las ejemplificaciones de lo que es violatorio de los principios democráticos, está mencionando supuestos, lo que es peligroso, porque en el terreno de las ejemplificaciones no hay límites. Podríamos incursionar largamente en este aspecto haciendo un capítulo con todos los vicios que se señalaron aquí como las lacras de nuestra democracia, de nuestra vida cívica y aun de la de otros países del mundo. El artículo concreta la ejemplificación al empleo ilegal y sistemático de la fuerza y a la concentración personal del poder.

Yo advierto que nadie legítimamente puede sentirse destinatario de estas expresiones; pero lo que en teoría puede ser cierto no suele serlo en la realidad política de un país, en donde las frases y las palabras van encasillando a los movimientos y a los hombres, y a través de esos encasillamientos parecen congelarse las posiciones y los sectores políticos nacionales. Todo aquello que directa o indirectamente, aun no intencionadamente, intente dirigirse hacia esos encasillamientos contruidos a lo largo de una práctica reiterada de usar determinados vocablos puede, sin tener un fundamento lógico, despertar susceptibilidades.

En el plan de hacer ejemplificaciones podríamos referirnos a muchas cosas, como otras que se señalaron. Así, podríamos decir que también se afectan los principios democráticos cuando no se respeta la soberanía del pueblo; cuando se hace uso abusivo y excluyente de los medios de difusión; cuando se manejan los re-

curso del Estado al servicio del partido oficial; cuando la empleomanía graciosa sirve a los intereses del oficialismo; cuando la demagogia desde la oposición intenta deformar los hechos de la realidad de un país para conseguir prosélitos en un proceso electoral. Todos esos son también actos violatorios de los principios democráticos y podríamos ponerlos con todo derecho dentro del texto del artículo 22.

Creo, por el contrario, que es fundamental que el artículo tenga la objetividad máxima que pueda lograrse.

No estoy en contra de que se diga en un estatuto legal y en todos los actos de nuestra vida que queremos una democracia que tenga fuerza para defender nuestros derechos, porque ellos son la base fundamental para convivir en una sociedad. Y quiero que, en este aspecto esencial de lo que intentamos por este estatuto como instrumento de la paz y la concordia nacional, nadie, ni aun equivocadamente, pueda sentirse destinatario de alguna de sus cláusulas. Por eso propongo la eliminación, en el artículo proyectado por la comisión, de las expresiones: «la sustitución del sistema democrático; el empleo ilegal y sistemático de la fuerza, y la concentración personal del poder», para reemplazarlas por «la negación de los derechos humanos» —que ya estaba— y, finalmente, «de los principios democráticos». Dejo estas dos afirmaciones, que considero genéricas, por las cuales nadie puede sentirse molesto, porque no admito que en el país haya algún sector —salvo aquellos de mentalidad desviada, que no constituyen sino una ínfima minoría del pueblo argentino— dispuesto a rechazar y negar los derechos humanos y los principios democráticos. De esta forma, sin ejemplificaciones, sin nada que, repitiendo el vocablo, pueda dar subjetividad, o tener presuntos destinatarios del artículo, habremos borrado en gran medida los recelos —legítimos o no— que puedan surgir en algún sector de la República.

Quiero decir finalmente algo que tengo sentido desde hace tiempo. Las proscripciones políticas no sólo hay que eliminarlas de la ley; hay que borrarlas de la mente; hay que aventarlas del espíritu. Nada lograríamos si eliminaráramos el artículo 22 y pusieráramos un artículo que dijera que nadie puede ser proscrito por ningún concepto si mental y espiritualmente tenemos intenciones proscripivas.

Las proscripciones estarán en nuestras mentes en la misma medida en que no seamos capaces de mirar hacia adelante, lealmente y todos, sin exclusiones, los que están en sectores contrapuestos, cualquiera que sea el color o la posición que han tenido en el país. Sólo así, mirando hacia adelante, superaremos los odios, los revanchismos y los abismos que nos separan. Esa es la auténtica conciliación argentina, y no la lograremos por un artículo de una ley, sino mediante un auténtico espíritu de paz y de concordia, mirando hacia el futuro.

Con estas palabras propongo la modificación en la forma que he enunciado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — En la discusión en general me ocupé en detalle de las objeciones que nuestro sector formulaba a los artículos 21 y 22 del dictamen que analizamos. Creí que en la discusión en particular —y ésa era mi esperanza— no se pronunciarían discursos engalanados por frases gratas al oído, sino que escrutaríamos la norma, que tipificaríamos concretamente las figuras restrictivas que esta Honorable Cámara se propone establecer en estos artículos para que sean claros y precisos y no den lugar a interpretaciones deformadas. Porque es muy probable que con la musicalidad de las frases impecables e impregnadas de un teorismo brillante no veamos la realidad contenida en el dictamen que se propicia.

Yo creo que en principio las leyes deben recoger la experiencia. A pesar de todas las leyes de olvido que se han dictado en el país se ha dicho que la que consideramos mira al pasado. Es exacto: la norma debe prevenir lo que conceptuamos inconveniente de ese pasado. Pero lo malo es que solamente se tiene en cuenta una parte del pasado y no todo el pasado. Porque si el pasado en algún momento estuvo impregnado de autoritarismo, también en otro momento estuvo impregnado de persecución a la causa popular y de proscripción política y hasta gremial de las auténticas corrientes del pueblo o de las mayorías sindicales. Entonces, si la ley mira al pasado, que mire a todo el pasado, porque si no, tendrá un destinatario preciso y esto, de ningún modo, es aceptable para nosotros.

Comprendo el esfuerzo que han hecho los hombres de la comisión, particularmente el señor presidente, por dar una nueva forma al primitivo artículo 22. Pero creo que aquí no se trata de dar nuevas formas al elemento sustantivo que contenía el dictamen que aconsejaba la mayoría. Y no sé si calificar esto de plasticidad, porque temo que por rara paradoja esta modificación, en vez de evidenciar plasticidad, demuestre una intención obstinada en sostener en la sustancia y en el espíritu la misma norma inerte en el primitivo proyecto.

Por eso sostengo que en esta parte de la discusión no tenemos que pronunciar grandes discursos; debemos analizar en lo profundo cada palabra, cada cláusula y cada concepto para eliminar de ellos la imprecisión y el vacío legal que podría derivarse para el texto de la ley.

No voy a repetir ahora la impugnación y el análisis detallado que formulé a los artículos 21 y 22. Pero quiero recordar dos episodios de que ha sido testigo esta propia Honorable Cámara, y lo hago sin pretender abrir polémica. Les voy a enunciar objetivamente. Ayer, un diputado de la bancada de la mayoría describió al peronismo como un régimen totalitario a par-

tir del año 1949. Hoy, por el voto mayoritario de este cuerpo se ha negado la introducción de una cláusula, auspiciada por el sector justicialista, para que de ningún modo este estatuto pudiera interpretarse con relación al pasado.

Estos dos elementos de juicio son muy importantes para valorar la mentalidad de la mayoría de este cuerpo y, sobre todo, para juzgar que la modificación que se auspicia de ningún modo cambia el sentido de fondo que tenían las normas auspiciadas en un primer momento. No sería muy trabajoso acudir al inciso c) del artículo 22, para advertir a mayor abundamiento cómo subsiste el extraordinario peligro de que por vía de su aplicación e interpretación por la justicia electoral se concreten proscripciones. Nótese que basta la mera pronunciacón de la frase o la enunciación de ideas, que a criterio de los juzgadores comportan adhesión o elogio a regímenes presentes o pasados...

Sr. Grau. — Eso ha sido suprimido, señor diputado.

Sr. Ferreira. — Si es así pido que la comisión aclare si lo que se ha suprimido es el encabezamiento del artículo 22 o todo el texto, incluido el apartado 2 con sus once incisos.

Sr. Belgrano Rawson. — Se ha reemplazado todo el texto del artículo 22, y así lo enuncié al comenzar la consideración de esta parte del proyecto.

Sr. Ferreira. — ¿Se ha suprimido también el apartado 2)?

Sr. Belgrano Rawson. — Se ha reemplazado totalmente el texto del artículo.

Sr. Ferreira. — Bien, señor presidente: indudablemente se ha rectificado el dictamen de la comisión que yo critiqué detalladamente en la discusión en general. De algún modo hemos conseguido mejorar la primitiva redacción, pero de todas maneras, mantengo mi disenso. Admito que la sustitución del texto primitivo mejora la cláusula, pero mi discrepancia se mantiene en mérito a la imprecisión terminológica que surge también de la nueva cláusula. Traigo a colación que cuando se quiere ser concreto y preciso tendremos, en algún modo, que inspirarnos en cómo lo hacen otros países democráticos cuando desean establecer prohibiciones concretas a determinadas agrupaciones o actividades políticas.

En los Estados Unidos, por ejemplo, varios Estados —Arkansas, California, Illinois, Kansas, Maryland, Oklahoma, Wisconsin, Wyoming— proscriben directamente al Partido Comunista y a sus organizaciones colaterales. Quiero señalar esta circunstancia como elemento de convicción para llegar a la conclusión de que todas estas normas que tienden a suprimir una actividad política deben tener la virtud de ser lo más precisas posibles. En suma, deben sancionarse «fórmulas específicas», y no generalizadas, como ser las atinentes al «bien público», «principios democráticos», que pueden dar para cualquier cosa en la interpretación posterior.

Es por esto que, para terminar, voy a reiterar la posición adversa a esta cláusula que fija nuestro bloque, y a repetir que aun con la modificación introducida al artículo 22 no se han suprimido la posibilidad ni el peligro de una proscripción en el futuro de la vida política argentina.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: nuestro bloque va a votar en contra del nuevo texto propuesto para el artículo 22, del mismo modo que se disponía a votar en contra de la versión originaria del artículo.

Voy a ser muy breve porque pienso que las posiciones deben estar tomadas y entonces esta intervención tiene apenas el sentido de ratificar una idea y salvar una responsabilidad para el futuro, porque afirmo que con este artículo 22 podrá proscribirse, no digo hoy, pero quizás mañana, a cualquier fuerza política del país y no sólo al peronismo.

Este artículo no tiene ninguna razón de ser, y el empeño en incluirlo permite hacer suponer que quiere guardarse aquí, en este instrumento que bastante se ha ido acercando a una cosa realmente limpia, que evidencia voluntad de conciliar puntos de vista destinados a integrar lealmente el cuerpo electoral de la Nación, armas de eventual proscripción, pero digo que este artículo no tiene razón de ser porque los recaudos que de alguna manera se quieren tomar, están ya previstos en el artículo 3º del estatuto, que requiere una serie de condiciones para la existencia de los partidos, entre las cuales está la doctrina que promueva el régimen democrático, y que vuelve a mencionarse en este artículo 22, los recaudos relativos a su organización democrática interna, que además están ratificados por el artículo 21 que impone que esas declaraciones deben complementarse de manera formal y real. De manera que yo no le encuentro razón alguna.

No voy a abundar en demasiadas consideraciones sobre nuestra posición frente a cualquier tipo de proscripciones y a favor de una participación sin exclusiones y en plena legalidad, porque es suficientemente sabida nuestra convicción democrática, que la practicamos en la vida interna de nuestra organización partidaria y en lo que llevamos de vida pública en el país, del mismo modo que hemos dado testimonio y fe de nuestro amor y respeto a lo que de fundamental tienen nuestras instituciones democráticas. Pero digo que la inclusión de este artículo deja en el estatuto la posibilidad de un instrumento proscriptivo.

Además, este artículo adolece, aparte de una deficiente redacción, de errores conceptuales graves. En primer lugar, la reiterada inclusión de la exigencia de la defensa del sistema democrático vuelve a abrir, como se ha visto, el

debate en torno de las distintas concepciones que de la organización democrática alientan cada una de las fuerzas que se sientan en este recinto. En segundo lugar, yo no veo razón para que la condena del empleo de la fuerza se haga cuando dicho empleo ilegal deba ser sistemático. Si el empleo de la fuerza es ilegal, pues se condena en primera instancia y no se tolera su reiteración. Esto no tiene sentido alguno. En tercer lugar, a mi juicio es un error incluir como un concepto de orden institucional o jurídico el relativo a la concentración personal del poder. En todo caso, debiera hablarse de reemplazo o sustitución del imperio de la ley por la voluntad de una persona, pero referirse a concentración personal del poder es un tremendo error. En nuestra organización institucional el Poder Ejecutivo es uno, es el presidente de la República, y bien pudiera cualquiera de estas fuerzas políticas propiciar mañana una suma mayor de facultades para el Poder Ejecutivo, inclusive facultades extraordinarias de las no condenadas por la Constitución, porque ésta condena a aquellas por las que la vida, fortuna y hacienda de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna, pero no otras. De manera que me parece, hasta por este aspecto, un tremendo error conceptual referirse a la concentración personal del poder.

Creo que este artículo deja en el estatuto la posibilidad de que pueda usarse de un instrumento de proscripción. Está redactado, aunque no esté en la intención abierta y ni siquiera oculta, para no hacer agravio de sus redactores, con un cierto espíritu que permite afirmar que artículos de esta naturaleza se refieren a una fuerza concreta, que es el peronismo, en la que muchos han creído ver una vocación totalitaria.

Sr. Belgrano Rawson. — Esa afirmación corre por su cuenta, señor diputado.

Sr. Vedia. — Cuando lo escuchaba hablar recién al señor diputado Ferreira venía a mi memoria el recuerdo de las declaraciones que el ministro Vítolo hacía en la noche del 18 de marzo, cuando en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre el resultado de la jornada electoral, decía textualmente: «Está salvada la democracia, porque los partidos democráticos, en su conjunto, suman más votos que los que ha obtenido el peronismo.» También en él había la suposición de una vocación totalitaria en esta fuerza que, por otra parte, está sentada hoy en nuestro recinto dando fe de su vocación democrática.

Pero lo cierto es que artículos de esta naturaleza mañana caen sobre cualquier fuerza política. Es un instrumento más de perturbación en la vida cívica del país, es una norma dictada de espaldas al futuro, en el que se temen los grandes interrogantes que tiene por delante el proceso político argentino. Es una norma dictada de frente al pasado, del cual todavía no conseguimos desligarnos.

Nosotros votamos una vez más en contra de este tipo de disposiciones, en acto de confianza en cada uno de nuestros adversarios políticos, como aspiramos a que ellos la tengan en nosotros, y en acto de confianza en la totalidad de la opinión pública argentina, en sus grandes fuerzas populares y los distintos sectores que integran la vida del país, que evidencian y han evidenciado a lo largo de los años de la historia argentina una vocación de libertad, de justicia y de democracia.

Nosotros somos consecuentes con ese sentir del pueblo. No queremos hacerle agravios pensando que en el pueblo anidan voluntades o vocaciones de implantar totalitarismos en el país. Podrá ser el desvarío de un grupo insignificante, pero, en su inmensa mayoría, este es un país con vocación de libertad, que tiene también, felizmente, vocación de justicia. Por eso, estamos contra esta norma, buscando aventar toda posibilidad de temor sobre el futuro proceso político del país, y asegurando que en los próximos procesos cívicos que el país viva se consagre la integración del cuerpo electoral y la participación de todos los argentinos, sin distinción alguna, en nuestra vida política.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Quiero señalar, señor presidente, que la posición anunciada por el señor diputado Almada no debe tomar de sorpresa a la Cámara. Justamente, cuando señalamos a través del dictamen en disidencia del señor diputado Belgrano Rawson nuestro punto de vista, dijimos expresamente tanto lo que ha propiciado hoy el señor diputado Almada como lo que dijimos en el día de ayer, vale decir, que debía establecerse que no cumplen las condiciones del estatuto en forma directa o indirecta los regímenes autocráticos o totalitarios. También sostuvimos en el despacho la no subordinación con respecto a entidades o partidos internacionales, estados, partidos o personas extranjeras o domiciliadas en el exterior.

Entendemos que estas disposiciones no son proscriptivas, como se ha querido señalar, sino que son más que todo una defensa de la democracia. Señalé en su oportunidad, cuando tuve ocasión de hablar, que era indispensable defender la democracia, porque nadie puede tener libertad para destruir la libertad.

Entendemos que la cláusula, tal como está redactada en estos momentos, si bien establece condiciones que permiten esa defensa, no es suficientemente explícita en cuanto a algunos conceptos fundamentales. Y creemos que pueden incorporarse al estatuto disposiciones de esa naturaleza, que son normas aceptadas en los países más democráticos del mundo a fin de impedir que algunos partidos puedan atentar contra la libertad y la democracia misma. En la Constitución de Alemania Occidental se prohíben los partidos que tiendan a desvirtuar o destruir

la democracia. Las Constituciones de Italia, Brasil, Panamá y Guatemala también contienen disposiciones similares, que tienden a preservar la democracia.

El concepto de democracia es de gran amplitud y la palabra democracia se utiliza en forma indiscriminada, lo que obliga a fijar su verdadero sentido. Así, se llaman democráticos los gobiernos y partidos que existen en nuestro país y también otros absolutamente totalitarios como en Yugoslavia, Checoslovaquia y Rusia, países absolutamente totalitarios que afirman tener una democracia popular.

En la conferencia de Yalta se estableció que en Polonia se iba a hacer elecciones democráticas. Las elecciones que se realizaron como consecuencia de ese convenio fueron democráticas para Stalin, mientras que Churchill y Roosevelt señalaron que constituyeron un atentado contra todo principio democrático.

Es necesario, pues, que se incluyan los términos que propiciamos, que no son proscriptivos sino definitivos, y que establecen un concepto pues ya en el mundo hay valor entendido de lo que son los partidos totalitarios y los partidos antidemocráticos. Por eso tanto los partidos totalitarios o autocráticos, como los de tipo nazi, o los de tipo Stalin o Khrushchev, o los de tipo Perón, en la forma en que éste gobernó al país, deben comprender —si se pretende retornar a ese estilo de gobierno— que no pueden actuar en la vida política democrática.

Si todos los partidos actúan con absoluta buena fe y sostienen que van a cumplir los principios democráticos y a hacer efectivos los derechos humanos, podrán actuar sin restricción de ninguna índole; pero si luego, llegado el momento, lo hacen en otra forma, es la ley, la justicia electoral, la que debe resolver el problema.

Puede incluso ocurrir que partidos que se llaman democráticos y que no lo son actúen y triunfen. Entonces va a repetirse lo que pasó en abril de 1962 cuando el partido del señor diputado Ferreira, que ahora se opone a cláusulas de esta naturaleza, tuvo que dictar decretos anulando elecciones porque consideraba que se habían violado principios democráticos.

Sr. Ferreira. — No se anularon elecciones. . .

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Jofré. — Nosotros queremos evitar este tipo de anulaciones, así como también todos los inconvenientes y las violaciones flagrantes del derecho del pueblo de elegir sus representantes. Queremos evitar que luego de ocurridos los hechos tengan que ir muchos —que no vamos a ser nosotros— a golpear las puertas de los cuarteles para solucionar problemas que ahora no se quiere contemplar.

Debemos ser leales y decir con absoluta sinceridad que anhelamos que el país no vuelva a los regímenes antidemocráticos ni totalitarios y que impere el derecho, que es a lo que aspiran todos los argentinos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena, en segunda intervención.

Sr. Domingorena. — Las palabras pronunciadas con toda claridad por los representantes de la Federación de Partidos de Centro ilustran debidamente sobre el alcance y el destino del artículo que estamos considerando.

Algún discurso trajo el recuerdo del pasado régimen peronista y señaló que lo que se buscaba con este articulado era terminar con las posibilidades electorales del Partido Peronista en la medida en que éste podía ser solidario con la labor de gobierno realizada por su partido.

Señalé que nada íbamos a resolver por imperio de las leyes y que este articulado tiene ya un destinatario, en cuyo caso era preferible que se lo mencionara con claridad, como en algunas exposiciones se ha hecho.

Las leyes no sirven para contener los arrebatos despóticos si no hay fuerzas sociales para servir el orden legal. Esto hay que aprenderlo de memoria. Será el peronismo u otra fuerza política que en este momento no la tenemos en consideración, que hará irrupción en la medida en que se ponga un dique de contención a las expresiones del pueblo que tiene deseo y vocación para institucionalizarse y servir los preceptos democráticos.

La ley, por más que esté orientada a reglar en forma equilibrada a la colectividad, aunque no busque destinatario, tiene que tener también un sentido; hay que mirar en profundidad para saber lo que ella persigue. Esto ya lo había señalado el gran Anatole, cuando decía que era posible que esa indiferencia con que la ley prohíbe por igual a pobres y a ricos pedir limosna en las esquinas sea una consecuencia del abstraccionismo con que es concebido el individuo como valor cualitativo, y no de la maliciosa sonrisa de los poderosos que saben de antemano que ellos no van a infringir la ley.

Esta ley con destinatario para algunos de los integrantes del cuerpo, amenazante para los más si no se portan bien y hacen buena letra, no hace más que confundir a la opinión pública y demostrar que ya estamos buscando el destinatario de la misma.

El articulado que tenemos a consideración, insisto, es proscriptivo. Lo han dicho ya algunos oradores y se desprende de su texto. ¿Qué quiere decir el artículo 21 ó el 22 cuando señala la necesidad de que el Estado se inmiscuya en la vida interna de las fuerzas políticas? ¿Qué significa decir que podrá ser proscrita la fuerza política cuando sus organismos o sus candidatos sean solidarios con un determinado tipo de política? Formulo la siguiente pregunta: ¿bastaría que un candidato, perteneciente al peronismo —vamos a hablar con todas las letras— manifieste su solidaridad plena con el régimen peronista, sin beneficio de inventario, para que la justicia tenga forzosamente que

proscribir, no al candidato, sino al partido político que representa?

La pregunta que formulo abre otro interrogante, que quiero que lo conteste la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si un candidato del peronismo, en las próximas elecciones, sostiene, inclusive, la necesidad de transformar el régimen interno de su partido y se muestra solidario con la acción de gobierno desarrollada por Perón, y el partido en el que ese candidato milita es el Justicialismo o Tres Banderas o cualquier otra fuerza política, la justicia deberá, en virtud de este articulado, proscribir a la fuerza política que representa el candidato o simplemente tendrá que vetar al candidato que ha tenido la osadía de expresar esta solidaridad. Dejo planteada la pregunta y espero la respuesta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

Sr. Domingorena. — Yo espero la respuesta para terminar mi pensamiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia le señala al señor diputado que han pasado con exceso los cinco minutos que le correspondían.

Sr. Domingorena. — La sustancia de estos cinco minutos iba dirigida a dirimir ese conflicto, que para mí va a tener la justicia si no somos capaces de aclarar las posiciones en el recinto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado Belgrano Rawson está anotado para hablar en nombre de la comisión al término de la ronda de oradores, a fin de contestar las distintas preguntas que se han formulado.

Sr. Lejarraga. — No pensaba volver a intervenir en la consideración de este Estatuto de los Partidos Políticos, pero algunas expresiones que he escuchado, más que una invitación, me fuerzan a intervenir para completar un concepto, que en lo fundamental, ya tengo expresado con toda claridad, porque estos artículos 21 y 22 que estamos considerando se vinculan estrechamente con el inciso b) del artículo 3º, en torno del cual días pasados fundé mi concepto sobre la materia en debate.

Desde ya debo salir al encuentro de algunas de las manifestaciones que aquí se han formulado, entre ellas las del señor diputado Almada que, en verdad, ha monopolizado las expresiones y proposiciones de tipo restrictivo, exclusionistas o proscriptivo y que no pueden quedar en el ambiente como compartidas por la Cámara. Porque no es esa la interpretación y el pensamiento de la comisión. El alcance y los propósitos del Estatuto de los Partidos Políticos no pueden estar dados por algunas voces aisladas, por legítimas que sean. Están dados en el caso por los miembros de la comisión, que han dicho con toda claridad que este estatuto en manera alguna excluye a nadie de la lucha cívica y que no es proscriptivo, ni tiene dedicatorias.

En este sentido, creo que con este estatuto vamos a dar un nuevo paso, muy importante, en este camino por el que debemos llegar a la meta de la legalidad democrática y de la conciliación nacional. No podemos olvidar que ya hemos dado otro paso, que fue el de la derogación de la legislación represiva, destinado a terminar con un conjunto de disposiciones, estatutos y decretos leyes que proscribían organizaciones políticas y perseguían como delito la expresión del pensamiento, que especialmente alcanzaban al justicialismo y al comunismo.

Entonces, ¿cómo podríamos decir ahora que vamos a dictar un estatuto sin exclusiones, sin procripciones, que mira hacia el porvenir, un estatuto que quiere ser una prenda de conciliación nacional, de paz, un estatuto, diríamos, que en algún sentido puede ser de transacción pero que es un estatuto democrático, si en él se comenzara anticipadamente por excluir al comunismo o al justicialismo? Me refiero al juicio de algunos diputados, que desde ya no es el de la comisión ni el de la Cámara.

Al respecto ésta es la pregunta que yo haría al señor presidente de la comisión, ante manifestaciones, como digo, de algún señor diputado, es decir, si en este estatuto hay alguna disposición que proscriba a estas fuerzas de la política argentina, sobre las cuales ha recaído, en cierto modo, un pronunciamiento unánime de esta Cámara cuando derogó la legislación represiva. Me gustaría escuchar la respuesta del señor presidente.

Sr. Belgrano Rawson. — Voy a contestar todas las preguntas al final, señor diputado, para ordenar el debate.

Sr. Lejarraga. — Bien, señor presidente.

Considero que la nueva redacción mejora el primer texto del artículo 22, que era un repertorio de delitos antidemocráticos, algunos conceptualmente discutibles, otros de redacción no muy feliz. Ahora en la nueva redacción se hace una síntesis más expresiva, más certera, pero siempre con un sentido de ejemplificación, de particularización, en la que cabe la posibilidad de omisiones, y que no creo sea la solución más adecuada.

Efectivamente, yo diría que hay actuación antidemocrática en los casos que enuncia la comisión, pero hay también situaciones que no están contempladas. Por eso, más valdría la norma general, sin esas ejemplificaciones que pueden favorecer errores y equívocos. Hay un problema: en esta materia no basta esta buena voluntad, esta sana intención, esta limpieza democrática que todos ponemos en la elaboración del estatuto, sino que debemos hacer un esfuerzo para darle la mayor claridad posible, despejando equívocos, aun incurriendo en algún momento en redundancia. Tenemos que defender el estatuto de interesadas interpretaciones y aplicaciones.

En la sesión anterior el señor diputado Serú García hizo una propuesta. La réplica, muy acertada, fue que se consideraba innecesario decir que no se podía excluir a partidos políticos de la vida democrática en razón de hechos del pasado. Es evidente que todo el texto del estatuto rechaza esa posibilidad, y entonces se respondía por razones de técnica o de elegancia jurídica, e, incluso, de simetría, no se consideraba conveniente la inclusión de esa propuesta. Para mí, quizás hubiera valido más en este caso una redundancia en beneficio de la claridad, porque en la ocasión lo que abunda no daña.

Pero no se trata solamente de lo que nosotros estamos elaborando, sino como digo, de la interpretación que puede dársele. A propósito de esto voy a hacer una referencia. Cuando al considerarse ayer el inciso b) del artículo 2, al examinar la fórmula de los fines y principios de la Constitución Nacional tuve especial empeño en expresar que no me parecía prudente ni conveniente esa mención, porque daba un sentido de inmutabilidad, de cosa intangible a la Constitución Nacional, que desde ya no podía pensar estuviera en la inteligencia de nadie. No es que dejara de pensar que la comisión se refería al sentido más íntimo, fundamental, esencial y perdurable de la Constitución, a la que yo rendí también mi justo y emocionado homenaje. Pero la fórmula, por lo que expresé, no correspondía fuera incluida en el estatuto. Se trataba también de evitar cualquiera errónea o equívoca interpretación. Y aquí viene mi referencia, con la que termino mi exposición.

En Bahía Blanca, la Cámara Federal en el año 1961 —en virtud de no recuerdo qué prescripción de un reglamento o estatuto de aquel entonces, que no puedo precisar ahora— creo que del estatuto de los partidos políticos del gobierno provisional, canceló la personería política al Partido Comunista, al que no me interesa defender, porque no soy abogado de ningún partido, a no ser del Partido Socialista Argentino; pero la cita es oportuna, por el concepto en juego que interesa precisar.

Y los fundamentos que daba la Cámara eran que este partido propugnaba la abolición de la propiedad privada, que sería inconstitucional, y, si mal no recuerdo, porque también era una organización de tipo internacional. Hay muchas organizaciones políticas que mantienen vinculaciones de carácter internacional e integran entidades de este carácter. Hasta la democracia cristiana creo que ya está confederada en América.

Sr. Vedia. — No, señor diputado.

Sr. Lejarraga. — ¿Todavía no?

Sr. Vedia. — Pido la palabra para aclarar.

Sr. Lejarraga. — Ya está aclarado, señor diputado.

Sr. Vedia. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Lejarraga. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: me interesa aclarar este punto a fin de que no quede una imagen errónea.

La democracia cristiana —y voy a ser muy breve— es un pensamiento político de validez universal, de ideas que son universales; y en este sentido, las mismas alientan a la democracia cristiana de Alemania, de Italia o de Latinoamérica.

Los partidos demócratas cristianos tienen sus peculiaridades propias; responden a las particularidades nacionales; no tienen vínculos de unión ni superestructuras a las cuales deban sumisión u obediencia en manera alguna. Se desenvuelven libremente, y cuando se reúnen lo hacen para debatir esas ideas de validez universal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Lejarraga: ha expirado el término reglamentario de que disponía para hacer uso de la palabra. La Presidencia lo exhorta amablemente a cerrar su pensamiento.

Sr. Lejarraga. — Bien, señor presidente.

Yo lo entendí así desde ya, señor diputado Vedia. Cada partido que actúa en una nación hace una adecuación a la realidad nacional. Tiene un expresión nacional. Pero yo pensé que los demócratas cristianos tenían algún vínculo americano o internacional, como es el caso de los partidos socialistas, que son partidos nacionales, pero que forman la internacional socialista. Los socialistas son partidos nacionales, han surgido en la evolución de la historia de cada país donde actúan, tienen propósitos nacionales y están realmente enraizados en lo hondo de la vida de cada nación, pero sin perjuicio de ello, y afirmándolo, mantienen una vinculación internacional.

Y termino, señor presidente. En esta materia tenemos una posición resumida, diría yo, en dos principios fundamentales que queremos afirmar. Uno es el de la libertad de pensamiento, que nunca, señor presidente, es un delito. Y cuando se trata de un pensamiento político, que aspira a realizarse, consideramos que debe encontrar su cauce, su organicidad y su expresión en los partidos políticos, en una contribución a la vida y al perfeccionamiento de la democracia.

Y el otro principio que fija nuestra posición e inspira nuestra conducta en esta materia, es el de la soberanía popular, a la cual no debemos ponerle valla, porque sería como pretender —diríamos— sancionar al propio pueblo y obstruir el proceso mismo de la historia.

La soberanía popular es uno de los fundamentos de la democracia, y la democracia tiene su raíz en el sufragio. En cuanto limitemos

o desnaturalicemos el sufragio, creando limitaciones, exclusiones o proscripciones en razón de las ideas o de los credos políticos, renegamos de la democracia, porque no forjaremos gobiernos representativos del pueblo, sino parodias de gobierno democrático, endebles por su falta de sustento popular. Esto debe quedar bien claro desde ya en la sanción de este estatuto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señores diputados: la Presidencia se ve obligada a señalar su preocupación —que es coincidente con la preocupación exteriorizada por los señores presidentes de bloque— sobre el éxito final de la sesión de la Honorable Cámara.

Hasta ahora se han considerado 19 artículos del dictamen sobre estatuto de los partidos políticos, restando aún la consideración en particular de 68 artículos.

Estamos llegando a la hora crítica de los días viernes y la Presidencia lo recuerda amablemente a todos los señores diputados a fin de prevenir posibles consecuencias.

Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — Mi intervención va a ser muy breve y de tono constructivo, señor presidente, porque el pensamiento de nuestro bloque en cuanto a proponer la supresión del artículo 22 ha sido expuesta en una tesis muy profunda por el señor presidente de nuestro grupo parlamentario y por el señor diputado Casas. Pero yo quiero llamar la atención de la comisión en un asunto que, a mi modo de ver, es de una calidad inusitada y una enormidad.

Dice el artículo nuevo propuesto: « No cumplen con los requisitos del artículo anterior los partidos que por su doctrina o en su actuación, por vía de sus organismos o candidatos... », y siguen las determinaciones.

Yo pienso, señor presidente, que los candidatos representan a los partidos en la medida que interpretan sus plataformas, sus principios y sus postulados. Pero no es posible pensar que la emisión de ideas o la actuación de un candidato —que en un momento dado puede desviarse de esos principios fundamentales de la representatividad— puedan poner en peligro la estabilidad jurídica y la permanencia de un partido político.

Por otra parte, no sé si fue Napoleón quien dijo que todo hombre tiene su precio, y puede ocurrir que la presión económica deliberada y ejercida con el propósito de crear una situación difícil a una institución política, pueda valerse de un candidato, como vehículo de introducción de conceptos diferentes de los que tiene el partido.

Formulo esta advertencia porque puede haber perjuicios inmediatos pues este artículo constituye un serio y extraordinario peligro para las instituciones políticas. Y entiendo que también esa prescripción va en contra de una pureza de la democracia, que está en las enti-

dades políticas y no en el pensamiento independiente que puede emitir un candidato.

En tal sentido, mi intervención es simplemente para llamar la atención de la comisión sobre este particular, pues lo encuentro totalmente alejado de la que debe ser una legislación ajustada en la materia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

Sr. Fernández (R.). — Señor presidente: el señor diputado Domingorena ha expresado sus dudas con respecto a la disposición que estamos discutiendo y al estatuto en general. Con la opinión del señor diputado Domingorena han coincidido otros señores diputados.

Yo creo que nosotros los radicales no actuamos con un sentido episódico, que puede llevar a improvisaciones confusas; actuamos con profunda coherencia, que la hemos mantenido de manera permanente al servicio de la verdad y del afianzamiento de las instituciones democráticas.

Este estatuto proyectado por el Poder Ejecutivo engarza en nuestra doctrina, que es bien conocida por todos. Es el cumplimiento, por otra parte, de un mandato de nuestra plataforma. Ya dije en otra oportunidad que este partido está cumpliendo, paso a paso, con todos los compromisos contraídos con el pueblo. Cualesquiera que sean las consecuencias del cumplimiento de estos compromisos, este partido las afronta con toda valentía, conciencia y decisión.

Este estatuto, por otra parte, interpreta el pensamiento político del excelentísimo señor presidente de la República. No me refiero al pensamiento protocolizado en el mensaje con que se acompaña el proyecto. Me refiero a ideas enunciadas con mucha anterioridad por el doctor Arturo U. Illia. Así, existe un documento que redactó el doctor Illia el 20 de marzo de 1961, cuando ya era gobernador electo de la provincia de Córdoba y luego de la anulación de las elecciones en cinco provincias, en donde legítimamente había ganado el Partido Justicialista.

Yo me voy a permitir leer algunos de los párrafos de ese documento, porque proviene, precisamente, del mismo ciudadano que hoy ocupa la primera magistratura de la República.

Dice así: «Respetuosos de la Constitución y de la ley, con sentido argentino de nuestra responsabilidad, hacemos llegar en representación de las más nobles aspiraciones del radicalismo de Córdoba nuestra firme requisitoria al gobierno nacional para que demuestre de una vez por todas grandeza e inteligencia en sus procedimientos, y rectifique los errores de conducción política y económica que contribuyeran a dicha desintegración; a las fuerzas armadas, para decirles que su actitud debe ser de máxima reflexión y limitada a sus funciones específicas; a las fuerzas del trabajo, para que encaucen su accionar dentro de la esfera gremial sin inter-

ferencias y sin permitir que esas interferencias desvirtúen la esencia de su función y de los objetivos de las asociaciones gremiales; a nuestros adversarios políticos, para que comprendan definitivamente que debemos actuar sin resentimientos ni sectarismos al servicio franco y leal de la patria. Invocación que importa un llamado a los partidos políticos, para que desde la oposición o desde el gobierno se desenvuelvan en el marco de la democracia efectiva, requisito indispensable para el mutuo respeto, y a la ciudadanía toda de la provincia y del país, para que actúe con serenidad y mesura en los momentos tan difíciles que vive la Nación.

»Frente a este panorama consideramos que debe ser respetado en su integridad el pronunciamiento popular y, consecuentemente, que debe derogarse de inmediato el decreto que, sin fundamento legal alguno, vulneró y avasalló, además, las autonomías provinciales y comunales, atentando contra la conquista del orden jurídico.»

Sr. Musacchio. — ¿Me permite una breve interrupción, señor diputado?

Sr. Fernández (R.). — No; tengo muy poco tiempo, señor diputado.

Este es el pensamiento que nos guía. Es el pensamiento de la Unión Cívica Radical; es el pensamiento de Yrigoyen y de Alem. Dentro de esta conducta estamos actuando, y por eso puede tener la seguridad absoluta el país de que este estatuto no es un estatuto trampa; es un estatuto honrado. Con este estatuto se terminan definitivamente las proscripciones en la República. En este estatuto no se ha volcado el odio. Es el estatuto de la reconciliación nacional; es el estatuto que va a hermanar a todos los argentinos y que va a hacer practicable la democracia que ya presintieran y anunciaran magistralmente Mariano Moreno, Esteban Echeverría e Hipólito Yrigoyen.

Tenga confianza el país —como he dicho en otras oportunidades— en este partido que está cumpliendo su deber con el pueblo argentino. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Señor presidente: he solicitado la palabra para referirme al artículo 22, que la Cámara está considerando en este momento.

Debo señalar que la oposición que formulamos a la sanción de este artículo se funda en dos órdenes de argumentos de distinto origen, pero coincidentes, desde luego, en la conclusión. Creemos que el artículo 22, tal cual estaba proyectado en el mensaje del Poder Ejecutivo, como en el despacho de la comisión, es violatorio de principios de técnica jurídica.

Pienso, como bien lo señalara el señor diputado Martínez Raymonda, que se violan tales principios cuando existiendo una norma de tipo general, que por ser tal es comprensiva de to-

dos los casos posibles, es confuso que se incluya, además, a manera de ejemplos, casos particulares que deben considerarse como contenidos en tal norma. Esto es, precisamente, lo que se ha hecho en el artículo 22 del despacho de la comisión y en el artículo 19 del mensaje original. Este defecto de técnica sólo servirá para desorientar a quienes mañana tengan la obligación de aplicar las disposiciones del estatuto.

Pero además de esta observación, el artículo 22 tal cual está proyectado adolece de otros defectos que no son ya de técnica jurídica. Bien dijo el señor diputado Martínez Raymonda que el quehacer político de los últimos años ha acuñado y ha dado sentido particular en nuestro país a determinados vocablos. Yo sostengo que algunos de los vocablos que se usan en el artículo 22 proyectado por la Comisión de Asuntos Constitucionales tienen destinatario: el destinatario es, indudablemente, el movimiento peronista.

Es por esto que sostengo que poca o ninguna es la importancia jurídica del uso de tales palabras en la norma proyectada; la importancia reside en que constituyen una rémora a esta altura del proceso argentino. Son una especie de trofeos conquistados en una lucha que ya es del pasado. Constituyen un testimonio vivo de lo que en un momento dado de nuestra historia fue la división de los argentinos, porque esos vocablos constituyeron las banderolas que se enarbolaron el 16 de septiembre de 1955, para derrotar al gobierno constitucional y que hoy se reviven a través del articulado de esta ley.

Es por eso que la redacción del artículo 22 propuesta por la comisión conspira contra los principios de conciliación y de paz que tanto se expresan verbalmente pero que pareciera ser que en los hechos no hay mayor intención de practicarlos. Nosotros actuamos en el campo político argentino con la más absoluta seguridad de nuestra vocación democrática, con la más absoluta seguridad de que representamos la vocación de paz y de conciliación de los más importantes sectores de la población argentina. Pero no podemos menos de señalar que nuestra lucha se hace cada día más dura, porque advertimos que el resentimiento no ha sido aún vencido y que todavía, a lo largo del tiempo y de los años, persiste la intención de revivir antiguas heridas y de provocar sistemáticamente la división de la familia argentina.

Nadie tiene derecho a exigirnos que renegemos de un pasado que nos enorgullece, y para que de ello no quede duda alguna a través de este debate y de la consideración de este artículo, quiero en lo personal ratificar mi más absoluta solidaridad con los diez años del gobierno del general Perón.

Sr. Bo. — Tiene vocación de esclavo.

Sr. Serú García. — Tengo vocación de libertad, de soberanía, de justicia social, señor diputado. No tengo vocación de entreguismo.

Quiero, para terminar, señor presidente, referirme muy brevemente a una alusión formulada por nuestro compañero de bancada el señor diputado Catalán, al que me permito aclararle, que la palabra o la acción de algún candidato no podría poner en peligro la personería del partido político al que pertenece, aun cuando violaran normas del estatuto.

Tuvimos en ese sentido algún cuidado en la comisión, y recuerdo que en uno de los artículos que habremos de tratar posteriormente —si mal no recuerdo, el 63— se ha establecido con claridad, y quiero que quede de esto expresa constancia, que en el caso en que algún candidato, a juicio de alguna autoridad, pudiese haber incurrido en alguna de las violaciones previstas en el estatuto, el partido político al que pertenece tendrá la oportunidad legal de hacer las rectificaciones del caso para que esa supuesta infracción no pueda servir de pretexto para la caducidad de la personería política del mismo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Quiero, en pocos minutos, decir que hasta ahora —y esperamos la palabra del miembro informante de la comisión— seguimos de un pasado que nos enorgullece, y para de este artículo. Y si el debate es prolonga es, precisamente, porque no están aclaradas las ideas con respecto a la interpretación.

En el día de ayer el señor diputado Llaver, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, emitió un concepto del que yo quiero dar lectura a los efectos de ponerlo a consideración de la Honorable Cámara. Dijo esto: «Si el señor diputado no lo acepta, me va a obligar a tener que puntualizar que no sólo en lo institucional sino también en lo ético la actuación del Partido Peronista a partir del año 1949 ha constituido la expresión más típica y más cruda del totalitarismo, porque se configuró como una organización política vertical». Posteriormente dijo el señor diputado Llaver que hablaba a título personal y en nombre de su partido.

Sr. Llaver. — No; en nombre de mi bloque. Lea la versión taquigráfica.

Sr. Musacchio. — La acabo de leer.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Musacchio. — Hace pocos minutos, el presidente del bloque del radicalismo del pueblo ha emitido conceptos que no concuerdan con los emitidos por el señor diputado Llaver, lo que significa que es absolutamente necesario, antes de la votación de este artículo, que quede aclarado todo esto para que de ninguna manera podamos delegar en los jueces la interpretación de semejante problema.

Si discrepa en la interpretación cada partido, mucho peor será cuando discrepan miembros

pertencientes a un mismo partido político respecto a la interpretación.

Sr. Llaver. — No hay discrepancia entre los miembros de mi partido y mi bloque.

Sr. Bobillo. — Es retorcer los argumentos.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Señor presidente: fundado en las mismas expresiones que vertiera el diputado que habla durante su intervención en el debate en general, debo expresar en este momento el más categórico rechazo conceptual a manifestaciones que se han vertido y en cuanto apuntan a señalar la posibilidad de que éste sea un instrumento de legislación política que en alguna medida configura de nuevo el problema de las proscripciones en el país.

Yo había expresado durante la discusión en general que este artículo 22 iba a ser —como efectivamente lo es en este instante— uno de los dispositivos de la ley que motivaría las más arduas y extensas deliberaciones. Dije, a pesar de ello, que para los que querían comprender —porque entre otras divisiones que puede haber en la Honorable Cámara está la de aquellos que comprenden y los que también comprenden pero hacen que no comprenden o no quieren comprender—, este artículo 22, en su redacción originaria o en la actual, que es nada más que una síntesis de la anterior, recoge principios de filosofía política que están incorporados al espíritu de nuestra Constitución Nacional. Decía que, en contra de lo que pudiera creerse, este tipo de principios no es la creación obligada a que se dio el constitucionalismo europeo después de la segunda gran guerra para prevenir o reprimir manifestaciones o estructuras políticas de tipo totalitario. Decía que estos principios, de una u otra manera, se acunían en el perfil tradicional e histórico de nuestra génesis constitucional. Es decir, que recogen principios de filosofía política de nuestra Constitución que ya habían sido debatidos en el ámbito de la vida pública argentina hace más de cien años y, en consecuencia, entroncan su filiación con la génesis de nuestro constitucionalismo.

En la Convención de la provincia de Buenos Aires de 1860, refiriéndose a principios de este jaez, como los que tenemos en este momento consagrados en el artículo 22, tanto con una u otra redacción, Sarmiento decía: «Puesto que se le da a esta parte el título de derechos y garantías de los pueblos —se estaba refiriendo al capítulo de la Constitución de 1853 que trata de derechos, declaraciones y garantías—, se supone que es la negación de los derechos primitivos del hombre y los que ha conquistado la humanidad que, naturalmente, han ido creciendo de siglo en siglo.»

En 1860 añadía Sarmiento: «Se entiende también que esos principios ahí establecidos son superiores a la Constitución misma, son superiores incluso a la soberanía popular.»

Refiriéndome siempre al artículo 22, que, reitero, consagra principios que son variantes de otros incluidos en la parte dogmática de nuestra Constitución, señalo que Vélez Sársfield en el mismo recinto afirmaba «que eran superiores a toda ley y a todo cuerpo legislativo, y que son tan extensos que no pueden estar escritos en la Constitución».

Avanzando aún más en la evolución de nuestro pensamiento político, Mitre en la convención de Buenos Aires de 1870 sostuvo: «que hay derechos superiores y anteriores a toda constitución escrita, que no se escriben y no se borran jamás».

Estos conceptos ya los había anticipado durante mi intervención en el debate en general del despacho y señalé que cuando se discutiese en particular los iba a desarrollar.

El artículo 22, con su redacción actual, entra en las más puras manifestaciones primigenias de nuestro constitucionalismo, y no necesitamos recurrir ni a las declaraciones, desde luego muy valiosas, de los Derechos Humanos consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, ni a los cuerpos modernos de legislación constitucional europea que, después de la segunda guerra mundial, consagran cláusulas que defienden y preservan el ordenamiento institucional de los pueblos en que rigen.

Se trata de principios que hacen a una suerte de derecho natural del ciudadano de esta tierra y que encuentran su fundamentación, como se ha dicho esta tarde con todo acierto por un señor diputado, en la filosofía política que inspira nuestra Constitución. Su violación, en consecuencia, importa una lesión a las bases mismas de nuestra Carta Constitucional, de la carta política que rige al país.

Estas cosas no son nuevas en la República. Reconocen, repito, una pura filiación y no tienen destinatario especial, pues esto va para todos y no va para nadie. Quien vulnere los cimientos y el espíritu de nuestro constitucionalismo recibirá la sanción que la ley establece; quien no lo haga, podrá actuar con absoluta tranquilidad en el terreno de nuestra vida pública y de nuestra evolución política.

Esta referencia circunstanciada ha procurado establecer, a nuestro juicio, la filiación en el derecho argentino de las proposiciones que trae el artículo 22 del despacho.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Señor presidente: confieso que cuando se comenzó el estudio de este estatuto no tuve en ningún momento la idea del esfuerzo tremendo que tendríamos que realizar los miembros de la comisión para producir un despacho satisfactorio a la mayoría del cuerpo.

Confieso también que me resulta un poco difícil entender algunas expresiones de algunos

señores diputados, que son contradictorias con opiniones vertidas durante el estudio de este proyecto. Y confieso, por último, que también me alarma ver un juego de palabras o de intenciones que se vienen reiterando en este debate, por medio del cual, desde distintos sectores se tiende a atribuir a la comisión intenciones ocultas, intenciones no confesadas, que hacen pensar que esa actitud encierra la intención oculta de hacer esa imputación con otras finalidades.

Colocándome en los límites de miembro informante de una comisión en la que están representados tan diversos partidos políticos, he tratado de evitar toda referencia al pasado y toda expresión que pudiera tener un sentido polémico, estimando que quien informa un proyecto debe defenderlo en su tesis y en sus intenciones, y limitarse a contestar las observaciones que se le formulen.

Normalmente, por temperamento, por formación, miro hacia adelante y no hacia atrás. El pasado, que nunca lo olvido, lo tengo como una referencia rectora hacia lo que queda por venir. Las veces que he tenido que referirme al pasado han sido exclusivamente aquellas en que, acuciado por otros señores diputados, he debido aclarar posiciones.

Digo esto porque me veo obligado a hacer algunas referencias al pasado argentino al tener que contestar distintos tipos de exposiciones, algunas de las cuales asignan intenciones y otras formulan preguntas concretas.

Desearía tener una gran claridad en mis palabras, por la responsabilidad de saber que en ellas va la respuesta de una comisión que redacta un proyecto. ¡Ojalá pudiera tener esa claridad! Y señalo, señor presidente, que lo que voy a decir lleva la más elevada inspiración y, al mismo tiempo, la actitud más cordial para todos los miembros de la Honorable Cámara.

Pero ocurre, señor presidente, que debo referirme a expresiones de los señores diputados Casas y Luco, el segundo, amigo de la infancia, entrañable amigo siempre, pese a las diferencias de ideas, y el primero amigo en este quehacer de la Honorable Cámara, a lo largo de este año.

Cada vez que alguien en este cuerpo, en este o en otros debates, ha hablado de democracia, de totalitarismo, de dictadura, de autocracia, de antidemocracia, algún diputado, desde el sector justicialista, se ha sentido aludido, aunque ni remotamente la expresión se haya referido a ellos. Ahora se ha reiterado el hecho, dándome la impresión de que a veces traiciona un poco el subconsciente o, quizá porque, teniendo esa herencia tan tremenda de un periodo que quisiéramos olvidar todos...

Sr. Lozano. — Nosotros no.

Sr. Belgrano Rawson. — ... se sienten depositarios hoy de los errores de aquel proceso. Y en este cuerpo se ha dicho ya muchas veces, y

hoy lo ha marcado con claridad de mediodía el señor diputado Ghioldi, que todos creemos que en ese sector se sientan ciudadanos argentinos que quieren vivir en democracia y servirla.

Pero tengo que recoger algunas expresiones que, dichas suavemente y al pasar por mi distinguido amigo el diputado Luco, darían la sensación de que este dictamen sobre estatuto de los partidos políticos que estamos considerando está lleno de normas que atacan a las más firmes creencias republicanas, y que otros estatutos del pasado han sido de la máxima pureza republicana. Expresamente señaló: nosotros en 1949 dictamos un estatuto inspirado en firmes creencias republicanas.

He pedido ese estatuto y lo tengo sobre mi banca. Y voy a recordar algunas cosas que contradicen posiciones de hoy y que, en alguna medida —vaya dicha esta expresión sin ningún ánimo hiriente— marcarán alguna inautenticidad.

En 1949, en esta Cámara de Diputados, los legisladores Bagnasco, Cámpora, Miel Asquía y Visca presentaron un proyecto de ley de partidos políticos. Entró el día 28 de septiembre de 1949. A moción del diputado Visca el día 28 de septiembre, el mismo día en que había entrado, la Cámara se constituyó en comisión, trató y aprobó el estatuto de los partidos políticos, en las sesiones de los días 28 y 29 de septiembre de aquel año, con la protesta de la minoría de entonces, y a pesar de ella. El día 30 lo sancionó el Senado de la Nación. Meses después se reprodujo como a mimeógrafo en todas las provincias argentinas, sin quitarle ni agregarle una coma, cambiando simplemente «Nación» por «provincia».

Tengo que recordar algunas cláusulas de ese estatuto, que «estaba inspirado en los más puros principios republicanos», que marcan alguna contradicción con posiciones señaladas hoy, ayer y antes de ayer en este recinto, con las que se hacen solidarios al decir que en 1949 tenían un pensamiento similar al de ahora.

Aquel estatuto, en su artículo 1º, definía lo que era una asociación política, y tenía esta curiosa cláusula: «Será reconocido como partido político a los tres años del registro del nombre, doctrina política, plataforma electoral, carta orgánica y autoridades constituidas.»

Alguna vez, refiriéndome a este cuerpo legal, en la época de ese gobierno que yo he calificado de dictadura, como tantos otros, pero que no se quiere reconocer como tal, dije que esto era una especie de servicio militar obligatorio que se imponía a los partidos. Tres años en «barbecho» para poder actuar en política, tres años «contemplando el quehacer político» para poder intervenir como miembros de la democracia, bajo un gobierno que se decía inspirado por la democracia.

A continuación, aquel estatuto señalaba cosas que están en este artículo 22, y mucho más graves que las de este artículo. Se decían cosas como éstas: «Los requisitos exigidos para el reconocimiento no se tendrán por cumplidos si los elementos que los acrediten importan desconocer la Constitución, las leyes de la Nación o las autoridades que de ellas emanan, contienen principios ideológicos susceptibles de alterar la paz social —¡que precisión!— «inciten a la violencia o a la alteración del orden como forma de propaganda política, admitan vinculación con entidades internacionales o permitan el apoyo de las mismas en las contiendas políticas.»

El artículo 4º de ese estatuto decía: «Los partidos deberán integrar las listas de sus autoridades y de sus candidatos a cualquier cargo electivo con los propios afiliados. La autoridad judicial competente rechazará el registro de las listas integradas por personas no afiliadas —y ¡advuértase esto, señor presidente, advuértase qué profundo sentido republicano y democrático!— o que pertenezcan pública o notoriamente a otro partido, o que hayan actuado en los cargos directivos o como candidatos de otros partidos en los tres años anteriores inmediatos.»

Seguía ese estatuto, en el inciso b) del artículo 5º, cuando establece las causas de disolución de los partidos: «Si no se presentan candidatos en una elección nacional, o no concurren al acto electoral en sostenimiento de los mismos; c) por violación de las disposiciones que se consagran en los artículos 1º y 2º —formación del partido; d) por disponer medidas o realizar maniobras contrarias al cumplimiento de la obligación de votar; e) por la fusión, alianza, unión o coalición con otro partido político». Y sigue ese estatuto diciendo en su artículo 6º: «La entidad resultante de la fusión, alianza, unión o coalición de dos o más partidos políticos deberá ser registrada como asociación en las condiciones establecidas en el artículo 1º, es decir, servicio militar obligatorio de tres años.

Y el artículo 7º: «El partido político disuelto podrá ser nuevamente reconocido, previo cumplimiento de todos los requisitos de los artículos 1º y 2º». Y más adelante daba vigencia autónoma a las asociaciones femeninas de carácter político, a las que no les aplicaba los tres años de permanencia en «barbecho», porque en el país no había más que una organización de ese «tipo». Y luego decía esto: «Toda asociación femenina que haya actuado bajo el amparo de la personería de un partido político, podrá solicitar su reconocimiento como tal sin necesidad de la antigüedad requerida por el artículo 1º y sin las restricciones del artículo 3º.»

He traído este recuerdo al recinto, pese a que nunca lo he querido hacer después de 1955. He querido traerlo —lo digo con absoluta cordialidad— no para remover la herida del pueblo argentino, sino para destacar que en política

y en la función que cumplimos en esta Honorable Cámara de Diputados tenemos que guardar congruencia con nuestras actitudes de ayer; tenemos que ser auténticos, para poder así decir que representamos a la opinión pública del país.

Sr. Luco. — ¿Me permite una brevísima interrupción, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson. — Con todo gusto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — El señor miembro informante ha marcado algunas aparentes incongruencias de fondo entre el pensamiento de nuestra bancada, que yo he expuesto, y la esencia de la ley 13.645, que acaba de leer y que fue el Estatuto de los Partidos Políticos de entonces. Simplemente quiero hacer dos o tres aclaraciones para que se vea que, en lo substancial, tal incongruencia no existe.

En primer lugar, el trámite breve —llámémosle así— de la discusión de esa ley se explica en alguna medida por la circunstancia, que no ha anotado el señor diputado, de que el articulado de ese estatuto era muy breve, ya que comprendía sólo nueve artículos. En segundo lugar, las protestas de la minoría —así se las ha llamado— fueron la exposición completa de las ideas de la minoría en ese debate, por medio de los diputados que nombré los otros días, por ejemplo, Vítolo, Pastor, Pérez Martín y Balbín.

Fundamentalmente quiero destacar que lo esencial de lo que he sostenido en nombre de esta bancada era verdad en 1949 y sigue siéndolo ahora. Nosotros no creemos que sea posible la definición por vía legal, o sea, la cristalización, de algo que es dinámico y materia predominante de carácter filosófico, como es esencia de la democracia y la naturaleza de las fuerzas políticas. Esa cristalización o definición no se encuentra en el estatuto que acaba de leer el señor diputado, puesto que las tres o cuatro notas que en los incisos del artículo pertinente se señalan como requisitos indispensables para que un partido actúe son muy diferentes de la enumeración que adoptó el Poder Ejecutivo primero y luego la comisión, por vía de definición.

Observen los señores diputados que los requisitos de aquel estatuto se refieren, por ejemplo, a aquellas agrupaciones que desconozcan la Constitución o su validez, en lo que estamos todos de acuerdo y nadie lo ha discutido aquí. Luego se habla de los que propicien métodos de alteración de la paz social, y en esto también hay coincidencia.

Podrá discreparse con ese tipo de limitaciones que para el reconocimiento imponía el estatuto de 1949; pero eso no cambia la esencia de la posición que he expuesto —que no deseo ahora repetir— en el sentido de afirmar que lo que no puede contener un estatuto de los partidos políticos es la cristalización o la fijación para el futuro y para siempre de algo que es dinámico,

cambiante, y que pertenece, no a la ley, sino al campo de la filosofía política.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Señor presidente: yo he traído este recuerdo por lo que he dicho, y ahora voy a traer otro.

He señalado varias veces —lo han dicho también otros miembros de la comisión y lo han reconocido señores diputados que no han trabajado en ella— lo difícil que nos ha resultado llegar a conformar un despacho como el que estamos considerando, que tratara de ser satisfactorio, al menos, para la mayoría de los integrantes de esta Honorable Cámara.

Particularizándome con los artículos 21 y 22 —fundamentalmente con el último—, destaco, señor presidente, que el texto de los artículos 18 y 19 del proyecto del Poder Ejecutivo —cuya lectura no voy a hacer para no ocupar por más tiempo la atención de la Honorable Cámara— lo consideramos equivalente al de los artículos 21 y 22 del dictamen.

Pero también destaco que el proyecto del Ejecutivo en los artículos que he mencionado lo consideramos demasiado oscuro en la tremenda enumeración de actos que implicaban la negación de la democracia. En esa tremenda amplitud cabía de todo, y aunque la intención la hemos entendido, pensamos que era necesario condensar esas normas en un texto distinto.

Nos hemos devanado los sesos —valga la expresión— durante muchos días y muchas noches hombres de distintos sectores, con la colaboración permanente de un distinguidísimo diputado del sector justicialista, el señor diputado Serú García, que puso un empeño en la redacción de este estatuto muy superior al de los que teníamos la responsabilidad de la tarea y que ha sido un incansable trabajador en esta labor.

Fuimos tratando de acercar las ideas de los distintos grupos y fuimos tratando de condensar, de hacer una norma que fuera lo más objetiva posible, sabiendo de antemano que en este orden de leyes la objetividad absoluta es imposible. Y así, señor presidente, un día dimos a conocimiento del país un anteproyecto, que lo presentamos para que fuera analizado por los distintos partidos; y en ese anteproyecto redactamos un artículo 18 y 19 —el equivalente al 21 y 22 de hoy— donde habíamos tratado de sacar lo que creíamos que era hojarasca en la redacción del proyecto original.

Contemplamos cosas como éstas del inciso c): «la adhesión o elogio a regímenes presentes o pasados que se apoyen en la violencia, sin perjuicio de la crítica histórica y de los niveles impuestos por la convivencia». Y lo redactamos los tres miembros redactores de la comisión, señores diputados Serú García, Grau y el que habla, en un esfuerzo en que cedimos mucho de nosotros mismos para lograr el entendimiento general.

Recogimos las críticas y volcamos una redacción distinta en el despacho impreso que ahora está considerando la Honorable Cámara, donde en ese inciso c) —y me particularizo con él porque es el origen del actual artículo 22— ya no se dijo como antes sino de la siguiente manera: «la adhesión o elogio —ya no a regímenes pasados o presentes— a actos violatorios de los principios republicanos producidos por regímenes presentes o pasados», lo que es mucho más concreto.

Nosotros entendimos y recogimos la crítica que se ha hecho a este artículo 22, el que se ha exhibido como el catálogo de los defectos políticos argentinos de los últimos años y del que un día el señor diputado Serú García dijera con mucho sentido del humor, en un comentario al margen de la tarea: cuando se le esto, cada uno tendrá que ir cargando con «su sayo». Por eso, reemplazamos ese texto y lo condensamos en este artículo 22, que ya no enumera lacras del pasado, que dice lo más concreta y objetivamente posible lo que ha de hacerse, como actos de futuro, para caer en las sanciones del estatuto.

¿Por qué ha de querer verse en este texto una violación a la democracia que todos exaltamos con auténtica honradez? ¿Por qué ha de querer verse en él un principio proscriptivo? ¿A quién que actúa en la democracia con honradez de democrata puede alcanzar este artículo por su hacer futuro, en función de partido o en función de gobierno?

Las palabras con que se ha atacado el texto del artículo van mucho más allá de lo que él dice. Adviértase —y voy a ir leyendo con detenimiento— que él dice: «Los partidos que por su doctrina o en su actuación...» Esto equivale a decir en la efectividad del quehacer político, que nada tiene que ver con cantarle loas a recuerdos del pasado, con cargar un bombo en una manifestación política, con elogiar a alguien que en algún momento de la vida política argentina haya hecho fraude en cualquiera de sus formas; que nada tiene que ver con lo subjetivo, porque se refiere a actos o acciones.

«Los partidos que por su doctrina o en su actuación lleven a la práctica en su organización y vida interna...» He aquí algo fundamental, como lo hemos señalado en la discusión en general: primero la democracia adentro, para hablar luego de la democracia afuera; el gobierno del partido por los afiliados, para poder exigir que las mayorías sean respetadas en el orden general.

Y continúa el artículo: «... o en su accionar exterior...» Enumera entonces actos, no ideas o pensamientos, violatorios: «... la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza y la concentración personal del poder».

Se nos ha dicho a este respecto —y esto va marginalmente— que está mal hablar del empleo ilegal y sistemático de la fuerza. Creo que fue el señor diputado Vedia el que impugnó que

usáramos el término sistemático, porque decía que bastaba el solo empleo por una vez de la fuerza para que el acto fuera violatorio. No se ha alcanzado el sentido profundo de esta norma. No se trata del empleo ilegal de la fuerza una vez, ocasionalmente. Esto sí sería proscriptivo, tremendamente proscriptivo, porque bastaría que en una manifestación política de cualquier partido un exaltado arrojara una piedra contra el escaparate de un negocio para que un gobierno que quisiera castigar a ese partido considerara que en tal acto hay un empleo ilegal de la fuerza.

No, señor presidente; aquí no estamos entre ingenuos escolares; aquí no estamos entre niños chicos a los que hay que explicar el alcance de cada palabra. Aquí estamos entre hombres políticos que vivimos en una democracia llena de errores, pero que la queremos grande y perfectible. Aquí sabemos bien que cuando estamos refiriéndonos al empleo ilegal y sistemático de la fuerza estamos hablando de la sistematización de la ilegalidad, de la reiteración en la violación del respeto a los demás. Esto sí configura una violación de los principios democráticos.

Sr. Vedia. — ¿Me permite una interrupción brevísima?

Sr. Belgrano Rawson. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Es para señalar al señor diputado —y al mismo tiempo para que advierta que no he caído en los textos escolares—...

Sr. Belgrano Rawson. — No he dicho eso.

Sr. Vedia. — ...que él ha aludido al ejemplo de un exaltado que arroja piedras contra un escaparate durante una manifestación, pero este artículo se refiere a actos producidos por organismos o por candidatos y no por sujetos exaltados en una manifestación.

Sr. Belgrano Rawson. — El señor diputado va a lo pequeño. Le voy a cambiar, si es necesario, el ejemplo: ya no sería el exaltado de la manifestación sino el miembro de un comité de ese partido o el candidato que va en la manifestación el que ejecuta el hecho. Para el caso, es lo mismo.

Se nos ha dicho —y creo que fue el distinguido colega de comisión, señor diputado Vedia— que lo de concentración personal del poder era demasiado vago, incompresivo y peligroso, así como está redactado el artículo, porque si mañana por medio de una ley se resolviera acordar mayores facultades al Poder Ejecutivo, podría incurrirse en la concentración personal del poder. No, señor presidente: si una ley del Congreso dictada conforme a las normas de la Constitución atribuye al ciudadano que constitucionalmente ejerce el Poder Ejecutivo, sin violar las normas del artículo 29 de la Constitución, mayores funciones en determinados aspectos de

la vida política, social o económica, y si, además, funcionan los organismos constitucionales de control —el Poder Judicial—, y es también posible poner en movimiento el juicio político, no se cae entonces en la norma proscriptiva de la concentración personal del poder. A lo que se refiere esta parte del artículo es a cuando la vida, la dignidad y las haciendas de los habitantes se concentran en la autoridad omnímoda de un hombre o de una oligarquía.

Se nos ha dicho que es muy difícil definir qué es el sistema democrático. Pero la democracia no es un código, como el Código Penal, que tiene que contener normas precisas. La democracia es un estilo de vida que está integrado por una multiplicidad de normas, por una serie de notas características que están condensadas en textos de derecho constitucional y también de instrucción cívica elemental. Es algo que viene siendo objeto de desarrollo desde que el mundo civilizado existe, es algo que ya fue definido por Aristóteles. Ahora, en el siglo en que vivimos, cuando el hombre encuentra chico el espacio de su planeta y se lanza a la aventura o a la conquista de otros, cómo vamos a decir nosotros que no podemos definir la democracia. Es de una facilidad extraordinaria definirla, y podemos hacerlo por dos rumbos distintos: señalando las notas que la caracterizan en un larguísimo e inacabable catálogo, o señalando las notas que la violan.

¿Cómo se puede decir con autenticidad que hay vaguedad en la expresión que alude a la sustitución del sistema democrático! Si esto no tiene nada que ver con la existencia de una o de dos cámaras, con que la justicia tenga dos o tres instancias, con que el presidente de la Nación pueda realizar tales o cuales actos. Esto es un todo; un estilo de vida; es el respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad, que no es la única nota característica, como se nos dijo recién. La libertad, en su más amplia expresión, no es sólo la libertad física de vivir como uno desea, mientras no dañe al vecino; no sólo la libertad es física, es desplazarse sin pedir permiso a la autoridad, es elegir el mejor medio de transporte o la mejor vivienda o el sitio donde vivir, sino también la libertad ideológica, la libertad moral, la libertad de elegir la educación de los hijos, el mejor modo de vida, las formas económicas y sociales, el militar en cualquier partido, el pertenecer a cualquier sindicato o elegir una actividad en la vida.

Señor presidente: muchísimas horas podríamos tomarle a la Honorable Cámara tratando de definir qué es la democracia. A mí me alarma cuando se dice que esta relación frustra las aspiraciones de grandes sectores argentinos. ¿Qué sector argentino que se sienta viviendo en la democracia puede sentirse alcanzado por esta amenaza de futuro? ¿A qué grandes masas populares se está refiriendo el orador cuando dice

que de esta manera se frustran las aspiraciones de grandes sectores argentinos?

Yo creo en mi país con una fe casi religiosa y considero honradamente que, aun con tremendos errores a veces, hay en él un porcentaje muy elevado —que quizás sea muy cercano a la totalidad— conformado por hombres y mujeres que sienten la democracia, a veces intuitivamente, aunque no sepan definirla o explicarla. Entonces, ¿a qué grandes sectores argentinos va dirigida la amenaza del artículo?

Señor presidente: cuando el drama del mundo concluyó con la aventura de aquel loco que se llamó Hitler, al que le sirvió de socio vergonzante el jefe del fascismo italiano, Mussolini, aquellas naciones tuvieron que defenderse para el futuro de desviaciones similares, e incorporaron a los textos de sus constituciones la proscripción de todo aquello que ensombreció a sus países, no obstante lo cual siguieron viviendo en democracia.

Yo estoy seguro que en el partido demócrata cristiano que en este momento gobierna Italia deben militar muchos hombres y mujeres que siguieron a Mussolini, se redimieron después, y que sirven a la democracia a través de ese partido que es democrático.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Belgrano Rawson. — Aquí se ha dicho que este artículo toca las estructuras y el pensamiento de la filosofía del sector a que pertenece un señor diputado. ¿Pero por qué, señor presidente, en este momento en que todos estamos demostrando, gobierno y oposición —yo diría en mi doble papel de oficialista en mi provincia y opositor aquí—, que queremos vivir en democracia, que nos respetamos y respetamos las ideas de todo el mundo, cada vez que se pone una norma de este tipo se ha de sentir destinatario un determinado sector del pueblo argentino? Y por qué, lo que es más grave, no solamente hombres de ese sector se dan por aludidos como si fueran traicionados por el subconsciente, sino que «hombres de otros sectores» se dan a la tarea de poner el dedo en la llaga y de seguir resolviendo en el pasado argentino, olvidándose que si esta democracia nuestra no la defendemos con todas las fuerzas, mañana puede ocurrir en nuestro país que tengamos que llorar frente a alguna bota afortunada que salga a defender eso que hoy no sabemos defender los hombres de la democracia? (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Señor presidente: aquí se ha dicho que esta norma es subjetiva y que habría que hacer una norma objetiva. Y se nos ha dicho que la subjetividad reside en estas cuatro notas características del artículo. Lo ha hecho un hombre de ideas muy claras y de pensamiento muy rápido; lo ha hecho este diputado que tanto ha

trabajado este año en la cámara: Martínez Raymonda. Y después de hacer la crítica de la subjetividad que hay en todas estas definiciones, de lo que es violatorio de la democracia, nos ha dicho que habría que dejar de todo eso solamente la negación de los derechos humanos y de los principios democráticos. Y con ello ha querido encontrar la fórmula que hace objetivo lo que él califica de subjetivo.

Pero, señor presidente, si estamos dando vueltas alrededor de la noria desde hace muchos meses; si estamos tratando de buscar la fórmula mejor sin poder lograrla, porque no se puede hacer objetivo lo que no tiene objetividad. La democracia se vive, se piensa; eso es democracia. Eso no es objetivo; no podemos definirlo como se define el derecho o un contrato en el Código Civil. No podemos encerrarlo en fórmulas. ¿Y qué más da decir violación de los principios democráticos o decir la sustitución del sistema democrático? Eso es más grave porque es sustituir, sacar, cambiar, transformar lo que hicieran nuestros padres y nuestros abuelos a lo largo de un historial cruento e incruento, de un historial lleno de idealismo como es el de nuestro país.

Este concepto de violación de los principios democráticos también está comprendido aquí en el artículo. Cuando decimos «negación de los derechos humanos», estamos diciendo negación de los principios democráticos, porque todos los principios humanos contenidos en nuestra Carta Fundamental se relacionan con el sentimiento de la forma de vida que es la democracia.

Sr. Martínez Raymonda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson. — Con mucho gusto.

Sr. Martínez Raymonda. — Agradezco la interrupción que me concede el señor diputado Belgrano Rawson. He estado escuchando sus inflamadas palabras, casi le diría que con emoción.

Nadie, por lo menos en lo que a mí comporta, puede dejar de suscribir prácticamente todo lo que ha dicho el señor diputado Belgrano Rawson. Lo que yo señalé es una cosa que tiene características circunstanciales, y no las teóricas y filosóficas que en gran medida impregnan las palabras que está pronunciando el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El país vive prevenciones que son producto de nuestras luchas. Si nosotros queremos emprender sin problemas el camino hacia la pacificación auténtica de nuestro país, tenemos que cuidar hasta en las sutilezas, de no dejar ningún margen o resquicio para que las prevenciones subsistan.

Sr. Belgrano Rawson. — Lo que tenemos que cuidar es no ser sutiles.

Sr. Martínez Raymonda. — No es un problema de argucias, sino un problema de llegar, incluso, hasta la sutileza —voy a caer en la palabra— para salvar la pacificación argentina.

Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Belgrano Rawson. — No ser sutiles, no ser suspicaces; ahí está el problema, la actitud que tendríamos que tener en nuestra democracia. Y sobre todo, algo que es muy importante y que no tiene un destinatario personificado.

Desearía, porque no quiero herir a nadie, que nadie se sintiera destinatario de esta expresión y, sobre todo, no tratar de traer agua a su propio molino adjudicando intenciones que otros no tienen, que eso sí es caer en suspicacia.

Sr. Luco. — Si el señor diputado me permite, quisiera expresarle mi feliz coincidencia con parte de sus palabras, cuando con toda emoción ha dicho, que la democracia se vive, se siente, se practica, etcétera, así como con otras notas que ha marcado. Desgraciadamente, no es muy fácil, ni es posible —creo que son sus palabras— enmarcarla en una ley mezquina que hacen los hombres en un momento determinado.

Sr. Belgrano Rawson. — Supongo que al señor diputado se le escapa el término; la ley no es mezquina. La ley es un esfuerzo de los hombres para tratar de reglar la vida de un país. No es un esfuerzo mezquino ni es un esfuerzo pequeño, sino que, por el contrario, es un gran esfuerzo.

Es exacto lo que manifiesta el señor diputado Luco de que es difícil la tarea. Entonces hagamos el esfuerzo necesario; dejemos de estar machacando sobre el pasado como si fuera un bombo —no hay alusión—. Pero resulta que quienes más deben olvidar el pasado, lo malo que tiene ese pasado, son los que vuelven una y otra vez a él y los que nos hacen volver a quienes ni siquiera queremos recordar esa sombra oscura de la vida argentina.

Sr. Ruiz (A. D.). — Pregúntele al pueblo.

Sr. Belgrano Rawson. — Pregúnteselo usted, señor diputado, si tiene interés en saber lo que el pueblo piensa. Lo importante en este momento sería ir a preguntarle al pueblo si lo que quiere de los hombres que dirigen los partidos políticos es que sigan revolviendo lo que es miseria de ayer, o si, por el contrario, lo que el pueblo quiere es que nos demos a la tarea de sacar a este país del farrago a que lo ha llevado la demagogia de tantos años.

Criticando la mentalidad de la comisión, se ha dicho que sólo ve una parte del pasado argentino y no todo. Este estatuto, señor presidente, tiende a reglar la vida de los partidos políticos. No es una fórmula mágica de alquimista que ha encontrado la forma de mantener la eterna juventud; es simplemente la ley que quiere reglar los partidos políticos y, como lo recordaba el señor diputado Ghioldi hace un momento, como toda ley, se nutre en el pasado.

¿Qué sentido tendría en nuestro país dictar una ley como la que debatimos e incorporar una norma para la del artículo 22, si en el país no hubieran ocurrido hechos concretos, ciertos, que no tienen como destinatario un solo sector, el sector justicialista —y me adelanto a la alar-

ma de algún colega de ese sector—, sino a todo el país, porque esta disposición condensa experiencias?

La ley no se refiere a una parte del pasado rechazando el resto. Acá no hablamos de economía, ni de gremialismo, ni de educación pública, sino de partidos políticos.

Algunos señores diputados sostienen que el texto ofrecido no cambia al primitivo. ¿Por qué no se nos da un texto que condense concretamente cuáles son las notas características de la antidemocracia? En esto ocurre como en tantas cosas de la vida: cada uno tiene su verdad, según él la ve, y yo tengo que creer —y lo creo— que cada uno es honesto al exponerla.

No sé si he dejado alguna objeción sin contestar. Creo que es exagerado el temor del señor diputado Vedia cuando cree que hay alguna nota —él no atribuye intenciones— proscriptiva o algún elemento proscriptivo. Por enésima vez declaro, en mi nombre y en el de los miembros de la comisión, que en ninguno de ellos, ni en los sectores a que pertenecen, se ha podido advertir en momento alguno, a lo largo de meses de labor conjunta, una intención proscriptiva. Si estas palabras sirvieran como interpretación de la ley, sean válidas con ese sentido.

El señor diputado Domingorena preguntó si un candidato a la próxima elección sostiene la transformación democrática de su partido y al mismo tiempo aplaude al gobierno peronista o al Partido Peronista, incurriría en la violación de esta norma.

Creo que fue ése el sentido de su pregunta.

Sr. Domingorena. — Sí, señor diputado.

Sr. Belgrano Rawson. — Creo haberle contestado, pero de todos modos lo voy a hacer nuevamente. Lo que la norma castiga no son las ideas, que no podrían castigarse sin violar la Constitución. Yo sentiría pena escuchando a alguien que exaltase a aquello, pero no podría castigarlo con esta norma, si fuera juez.

Sr. Lozano. — Mientras no lo voten a usted y a su partido.

Sr. Belgrano Rawson. — Quédese tranquilo el señor diputado, que a lo mejor no lo votan a usted. Sobre el problema de quién vota a quién, ya ha dicho algo en agosto y no quedó aclarado. El señor diputado debe venir a trabajar y no a despertarse alternativamente para decir cosas sin sentido.

Sr. Lozano. — Acuérdesse de eso...

Sr. Belgrano Rawson. — Desearía que a mi colega de provincia y de Cámara le entraran las ideas que hay en su partido y no las emociones del recuerdo de su partido.

El señor diputado Catalán ha dicho...

Sr. Lozano. — Lloraron muchas veces por el votito, acuérdesse.

Sr. Belgrano Rawson. — Si el señor diputado tiene dignidad, no me puede decir eso a mí.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Lozano. — Yo no he atacado al señor diputado ni le he dicho que no tenía dignidad.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ha quedado aclarado que el señor diputado Lozano no ha tenido un propósito agravante.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — El señor diputado Catalán ha dicho que es una enormidad que se sancione la acción de los candidatos. Yo le respondo que su inquietud, que, desde luego, puede ser muy legítima, es exagerada. Aquí no se castigan las ideas de ningún candidato, sino que aquí se da como nota para incurrir en la violación de este estatuto el quehacer de un candidato.

Si el candidato de un partido que lleva su bandera y que como tal debe traducir o poner en movimiento las ideas del partido que interpreta y si se colocara en la violación de esta norma porque negara los derechos humanos o porque hiciera la prédica sistemática de la sustitución del sistema democrático o deseara la concentración del poder en manos de un dictador. Si así lo propugnara sistemáticamente y así actuara en el quehacer político, sin ser desautorizado por su partido, entonces sí, pero no antes.

Sr. Domingorena. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson. — Sí, señor diputado.

Sr. Domingorena. — Evidentemente, la última parte de su exposición aclara perfectamente que no he estado mal en la interpretación que he dado al artículo, que es la de que estamos hablando de las orientaciones del partido y de la expresión de sus ideas. No quiero interrumpir más la magnífica exposición del señor diputado, pero creo firmemente que si elimináramos la disposición a la que hice alusión en mis palabras anteriores, el estatuto ganaría en claridad y aventaríamos suspicacias e intenciones que han quedado traducidas no a través del pensamiento del señor diputado Belgrano Rawson pero sí de otras exposiciones. Eso lo hemos escuchado y lamento que otros oradores tengan un criterio tan distinto al del señor diputado.

Sr. Belgrano Rawson. — Lo que yo expongo —tomo la responsabilidad de haberlo interpretado— es el pensamiento de la mayoría de la comisión, de tal manera que si las palabras han de servir para interpretar la norma, éstas son las válidas y no los discursos que se han pronunciado desde distintos sectores.

Ha dicho el señor diputado Serú García, y no reitero su mención con ánimo de molestarlo, que este artículo 22 tiene un destinatario: el movimiento peronista. Terminó mis palabras reiterando que en el pensamiento de quienes hemos redactado esta norma no está comprendido ese destinatario. Sí está comprendido todo aquello que en el país, venga de donde viniere —y

le contesto al señor diputado Lejarraga—, ni ningún otro partido, pueda significar la violación de la democracia, porque anhelamos poder seguir viviendo en ella y que los partidos estén auténticamente al servicio de esa democracia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 21 del despacho de la mayoría de la comisión.

Sr. Ferreira. — Nuestro bloque votará por la negativa.

— Resulta afirmativa de 71 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 22 del despacho de la mayoría de la comisión.

— Resulta afirmativa de 65 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde votar el agregado propuesto por el señor diputado Almada, que la comisión no acepta.

— Resulta negativa de 78 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo II del título III, artículos 23 a 27.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — El señor diputado González Bergez, que ha debido retirarse, ha hecho llegar una observación solicitando una ligera enmienda que la comisión entiende debe aceptarse porque es de forma. En el artículo 26, donde dice: «se cumplimentará», decir «se hará».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ortiz Hernández.

Sr. Ortiz Hernández. — Voy a solicitar una pequeña modificación, también de tipo formal, al artículo 23, inciso c), y es que se agregue la palabra «hábles» después de la expresión «mínimo de 40 días» y luego de «anunciado con un mes de anticipación», agregar «en los diarios de mayor circulación u otro medio idóneo». En este inciso no se dice en qué forma se anunciará. Un anuncio puede decirse que se va a hacer y luego no se hace.

Sr. Martínez Raymonda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ortiz Hernández. — Sí, señor diputado.

Sr. Martínez Raymonda. — Quiero sugerir que en lugar de hablar de días hábiles, lo que siempre se presta a confusión para contarlos, el señor diputado modifique su propuesta y acepte que se diga «60 días», en lugar de «40 días», con lo cual se logra el propósito sin crear esa confusión.

Sr. Ortiz Hernández. — Acepto, señor presidente.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión acepta. **Sr. Presidente (Mor Roig).** — ¿Acepta los dos agregados?

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión acepta la propuesta de 60 días, porque el señor diputado ha retirado la suya.

Sr. Ortiz Hernández. — Solicito también un agregado al final del inciso d), luego de los términos «cargos públicos electivos», consistente en las palabras «con reconocimiento de las minorías».

He podido observar que el Estatuto de los Partidos Políticos, que regla efectivamente su futura vida, aunque podría pensarse que puede haber en esto una pequeña intromisión de la ley en la vida interna de los partidos, debe resguardar también la vida democrática, y una forma de hacerlo es dar garantías a las minorías.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión no acepta este agregado, sin abundar en mayores razones porque ya se discutió en la comisión y fue rechazado en la votación realizada con la presencia de la mayoría de sus miembros.

Sr. Bobillo. — Que se vote.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — No quiero demorar la sanción de este estatuto, y porque no quiero demorarla no deseo hacer consideraciones sobre algunas disidencias nuestras, voy a pedir que este artículo 23 se vote, si no por partes, por lo menos por separado el inciso d), donde nosotros tenemos una disidencia. Pretendemos garantizar la representación de una minoría dentro de los partidos, siempre que ésta alcance al 25 por ciento de los votos emitidos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hubiere conformidad de la Honorable Cámara, se votará el artículo 23, con excepción del inciso d).

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 23, con excepción del inciso d)

— Resulta afirmativa de 85 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el inciso d) del artículo 23 tal como figura en el despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa de 79 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 24.

— Resulta afirmativa de 88 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 25.

— Resulta afirmativa de 84 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Del Pero. — Señor presidente: que los artículos no observados se den por aprobados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si se adopta el procedimiento de dar por aprobados los artículos que no sean observados.

— Resulta afirmativa de 84 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 26 con las modificaciones propuestas por la comisión.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 27.

Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Señor presidente: nuestro bloque sugiere que en este artículo — donde tiene una disidencia escrita sobre el particular — se agregue al final la expresión «... la que comporta mandato del partido para los electos».

La razón de la modificación que se sugiere es obvia. En nuestra inteligencia, la plataforma con que concurre al comicio el partido político, como también el programa, son compromisos morales que el partido adquiere con la ciudadanía, y en función de tales deben los candidatos, luego en los cargos para los que resultan nominados, dar estricto y fiel cumplimiento a esos compromisos previos, que no lo son solamente para con el partido, sino con la ciudadanía a cuya consideración se sometió la plataforma, y el programa del partido.

Estas son, en la mayor síntesis, las razones que informan el pedido de agregado al artículo 27.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión consideró esta proposición y por mayoría quedó rechazada. De manera que la comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 27 tal como está redactado en el dictamen impreso.

— Resulta afirmativa de 79 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado García.

— Resulta negativa de 67 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el Capítulo I del Título IV, que comprende los artículos 28 a 33 inclusive.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Hace un rato se ha hecho llegar a la comisión, por el señor diputado González Bergez, modificaciones de forma al artículo 28, que desde luego mejoran su redacción. Al comienzo del artículo, en vez de «para ser afiliado a un partido se requiere», se diría: «para afiliarse a un partido se requiere».

En el inciso a), en vez de expresarse: «estar domiciliado en el distrito en que se afilie, de acuerdo a las normas del artículo 20», la redacción diría: «estar domiciliado en el distrito en que se solicite afiliación». En el inciso c) del mismo artículo 28, donde se dice: «... y la firma auténtica o impresión digital», se propone suprimir la palabra «auténtica», de modo que simplemente se establezca: «... y la firma o impresión digital».

La comisión propone, además, una cláusula nueva, que iría como inciso 29 del artículo 30, y que dice así: «No podrá haber doble afiliación. La afiliación a un partido implicará la renuncia automática a toda afiliación anterior y su extinción. También se extinguirá por renuncia, expulsión o violación de lo dispuesto en los artículos 28 y 29, debiendo cursarse la comunicación correspondiente al juez electoral nacional.» El actual artículo 30 quedaría como inciso 19.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ortiz Hernández.

Sr. Ortiz Hernández. — El inciso d) del artículo 29 dispone que no pueden ser afiliados «los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial». Propongo que a continuación se agregue la frase siguiente: «... nacional, provincial y tribunal de faltas municipal».

Este agregado tiene por objeto correlacionar ese artículo con el 38, que es una reiteración, y como más adelante he de proponer la supresión de los incisos a), b), c) y d) del artículo 38, solicito a la Honorable Cámara el agregado de la frase mencionada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto?

Sr. Belgrano Rawson. — Sí, señor presidente; la comisión acepta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Voy a proponer tres supresiones, que he de enunciar en la forma más sucinta posible.

Los artículos 30, 31, 32 y 33 se refieren al registro de afiliados de los partidos y determinan que serán llevados por ellos y paralelamente por la justicia electoral, salvo aquellos casos a que se refiere el artículo 33 en que serán llevados exclusivamente por el partido. Determina también que el padrón partidario será público solamente para los afiliados.

Quiero señalar, señor presidente, que estas disposiciones se vinculan con una cuestión fundamental, como es la relativa a la pureza de los padrones partidarios. Sin una correcta afiliación, sin padrones partidarios correctos, no puede hablarse de vida interna democrática en los partidos. Y esto es fundamental, según se acaba de señalar desde todos los sectores, para que la democracia rija en el ámbito general.

Concretamente, señor presidente: no puede hablarse de restringir y controlar la doble afi-

liación, como se hace en el texto que acaba de proponer la comisión, si no hay padrones públicos y si no hay en los juzgados nacionales electorales un fichero de afiliados de todos los partidos que permita, por confrontación o co-tejo, determinar las dobles afiliaciones. No es posible que la doble afiliación requiera una investigación o pesquisa para poder averiguar si en cada caso particular existe.

Cuando se discutió el proyecto en general hice referencia a algunas organizaciones, que existen y son vergüenza de la política partidaria, que preparan elecciones internas en los partidos manejando el sistema de la doble afiliación. Hay que terminar con esto, que es una lacra de la organización de los partidos políticos argentinos, y no hay manera de hacerlo sin registros partidarios de afiliación de carácter público o sin un registro central llevado por la justicia electoral.

Por estas razones fundamentales de moral política, propongo que se elimine el artículo 33, que en el artículo 30 se supriman las palabras con que termina («salvo lo dispuesto en el artículo 33»), y que en el artículo 32, primer párrafo, se eliminen las palabras «solamente para los afiliados». De este modo, el último párrafo mencionado quedaria redactado así: «El padrón partidario será público.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión no acepta las modificaciones propuestas y señala que este asunto ha sido debatido extensamente en la comisión, donde, por el voto de la mayoría —no de la totalidad— se adoptó el texto del artículo 33. Esto en cuanto a la supresión de este artículo; las demás modificaciones solamente tendrían sentido si se aceptara tal supresión.

Sr. González Bergez. — No advierto cómo se va a controlar, entonces, la doble afiliación que tanto se ataca.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Garófalo.

Sr. Garófalo. — Rogaría a la comisión que aceptara incluir como inciso e) del artículo 29 el texto que voy a proponer.

La intención de los legisladores al prohibir la afiliación a pandoneros magistrados, militares y funcionarios de jerarquía reside en la influencia que en su esfera de acción pueden tener esas personas, que en razón de ello pueden inclinar la voluntad de algunos ciudadanos hacia uno u otro partido.

Me pregunto, entonces, si no sería conveniente agregar un inciso e) a fin de que no puedan ser afiliados los dirigentes máximos de los sindicatos y de la CGT, que forman hoy un partido político voluminoso, más importante quizás que los partidos políticos tradicionales.

Sr. Vedia. — Volvemos a lo mismo.

Sr. Garófalo. — Esos dirigentes manejan los dineros de los afiliados que no tienen la mis-

ma ideología política que ellos. Por todo esto, considero lógico y justo que si se excluye a un juez de la Corte Suprema se excluya también, por ejemplo, al secretario de la CGT.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Eso fue debatido en la comisión y fue rechazado por la mayoría de los votos, de manera que la comisión no acepta el agregado que propone el señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: como se ha estado hablando de varios artículos sin haberse votado aún el primero de este capítulo que es el 28, y a fin de no interrumpir luego el curso de las votaciones, voy a insistir en proponer la inclusión de un artículo nuevo, que sería el 28 bis, que dice así: «No podrá prohibirse la afiliación ni el consiguiente ejercicio de los derechos correspondientes bajo ningún concepto a los funcionarios o empleados públicos en general o de las reparticiones autárquicas, empresas estatales o mixtas, docentes, funcionarios o empleados u obreros de las empresas privadas, ni a ningún ciudadano no comprendido en las prohibiciones expresamente determinadas en la presente ley.»

Las razones de esta inclusión son obvias, pero para reforzarlas me voy a permitir leer el decreto 2578, serie A, originado en el ministerio de gobierno de Córdoba, dictado el 14 de noviembre de 1964, según el texto publicado en el diario «Los Principios», de esa provincia, que hace que el empleado o el funcionario público sea como una clase inferior en la sociedad argentina.

En su parte resolutive dice así: «1º Queda absolutamente prohibido a los empleados o funcionarios de la provincia toda forma de intervención activa y pública en los procesos electorales u organizativos, ya sean internos de los partidos o generales de cualquier carácter nacional, provincial o municipal. 2º Se excluye de la prohibición anterior —el acto de la afiliación— a las actividades de orden cultural y/o conmemorativo y la concurrencia al acto de emitir el voto en las elecciones, con prescindencia de toda manifestación ostensible de embaudoamiento tendencioso. 3º Cualquier designación partidaria recaída en la persona de un funcionario o empleado de la administración obliga a éste a optar dentro de los tres días de notificado o de los ocho de publicado entre el cargo que desempeña y la designación de que hubiere sido objeto.»

No necesito agregar muchas consideraciones más para demostrar la razón de ser de esta inclusión en la que insisto en este momento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Grau.

Sr. Grau. — Señor presidente: en la comisión se trató el problema que reitera el señor diputado Vedia. La necesidad de darle un sentido afirmativo a las disposiciones de este estatuto ha llevado a los miembros de la comisión a no incluir en la ley la totalidad de los casos que tendrían que ser contemplados, aun con sus aspectos negativos, como es el que campea en esta disposición.

Sr. Vedia. — ¿Y qué me dice de este decreto?

Sr. Grau. — Un hecho particular, desde un punto de vista inobjetable y que podemos compartir o no, ha tenido tal vez por finalidad el deseo de mantener a la administración pública al margen de las actividades políticas del partido oficial. Hemos visto a empleados públicos al servicio de agrupaciones que están en el gobierno, y la aspiración de que esa acción no vaya a crear parcialidades en el ejercicio de la función pública lleva a los gobiernos en una actitud prescindente a restringir el derecho que pueden tener los empleados y funcionarios de actuar en política.

De todas maneras, la comisión entiende que sería necesario, en todo caso, establecer un límite entre lo que puede considerarse como la afiliación o actividad cívica que en términos prudentes podría ser aceptada y aquello que signifique la desembozada intervención de los funcionarios que en épocas electorales actúan al servicio del partido gobernante.

Considero —sin compartirla totalmente— que la medida del gobierno de Córdoba ha tenido una finalidad moralizadora, es decir, de moral política, y se me ocurre pensar que la ha adoptado frente a acusaciones de quienes pueden haber imputado esa intromisión.

Respondiendo en nombre de la comisión y por los mismos argumentos que ya se dieron en su oportunidad, manifiesto que no aceptamos el agregado que propone el señor diputado Vedia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Solamente para decir que el bloque de la UCRI votará a favor del agregado propuesto por el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: ¿se va a someter a votación este agregado?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por supuesto, señor diputado.

Se va a votar, en primer término, el artículo 28 del despacho de comisión, con las modificaciones indicadas.

—Resulta afirmativa de 84 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Vedia.

—Resulta negativa de 67 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 29.

—Resulta afirmativa de 83 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 30 con la nueva redacción propuesta por la comisión, es decir, con el agregado del inciso 2º.

—Resulta afirmativa de 89 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se hacen observaciones, de acuerdo con lo oportunamente resuelto, se darán por aprobados los artículos que a continuación se mencionen.

—Sin observación se aprueban los artículos 31, 32 y 33.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo II, que comprende los artículos 34 a 40 inclusive.

Tiene la palabra el señor diputado Fiol.

Sr. Fiol. — Sin mayores consideraciones, voy a pedir el agregado de dos apartados al artículo 34, que irían como tercero y cuarto y que dicen así: «Las elecciones internas se realizarán teniendo como base el padrón oficial confeccionado por la Junta Electoral Nacional». El segundo apartado diría: «En el mes de enero de cada año la Junta Nacional Electoral tendrá actualizado el padrón que servirá para todas las elecciones que se realizaren en el curso de ese período.»

No necesito hacer sobre este problema, que seguramente ha de haber sido discutido y valorado en la comisión, mayores argumentos. Es de todos conocido el problema que se plantea en las elecciones internas y los conflictos que tienen por origen, precisamente, la confección del padrón. Ya se señaló el problema de la doble afiliación, y por ello, con el padrón de la Junta Electoral Nacional se impediría automáticamente esta circunstancia. Por otra parte, se darían mayores garantías a los procesos electorales internos de cualquier partido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión ha considerado esta proposición que ahora formula el señor diputado Fiol y ha entendido que el problema es de carácter reglamentario, por lo que no acepta su inclusión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Garófalo.

Sr. Garófalo. — Por las razones dadas cuando se consideró el artículo 29, propongo en el artículo 38, y solicito que la comisión los acepte, dos nuevos incisos.

El primero diría: «No podrán ser candidatos los directivos máximos de sindicatos y de la CGT.»

Sr. Vedia. — En el artículo 42 lo puede volver a proponer.

Sr. Garófalo. — Lo voy a proponer a ver si tengo éxito alguna vez.

El otro inciso diría: «No pueden ser candidatos aquéllos que ocupan una función pública como ministro, gobernador o algo parecido.» Muchas veces se presentan como candidatos y usan del cargo que desempeñan para hacer política.

Solicito de la comisión que si lo ha estudiado acepte la inclusión de estos dos incisos. Si me lo aceptan, yo los redacto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Por las razones que hemos dado ya en este recinto y porque es un problema que ya ha sido discutido y resuelto por la comisión, ésta no acepta el primer agregado. En cuanto al segundo, no pudiendo la comisión consultar a la totalidad de sus miembros, lo deja librado al voto del cuerpo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Llaver. — En nombre de mi sector voy a proponer que se agregue un nuevo artículo a continuación del 37. El mismo figura incluido en el texto de las disidencias al despacho de la mayoría. Dice así: «Los candidatos a cargos electivos deberán ser afiliados al partido con la antigüedad mínima de un año, salvo el partido que tenga una existencia menor.»

Las razones que motivan esta inclusión son varias. El artículo 29 ya aprobado del estatuto señala que los partidos son instrumentos necesarios para la formulación de la política nacional. El artículo 39, entre las condiciones sustanciales que exige para la existencia de los partidos políticos, establece que estén constituidos por grupos de ciudadanos unidos por un vínculo permanente. Es decir, se exigen condiciones de permanencia y de vinculación ideológica sustancial alrededor de todo el conjunto de atributos doctrinarios que deben reunir los partidos.

La filosofía del estatuto se alimenta esencialmente en la necesidad de crear partidos políticos fuertes, vigorosos, individualizados.

Entre las causales que pueden determinar la caducidad de un partido político, de acuerdo con los artículos 21 y 22, está la actuación práctica de los candidatos, lo que supone que por acción de un candidato extrapartidario se puede someter a un partido a la contingencia de verse privado de su personería, si el mismo no cumple con las postulaciones del partido. El estatuto ha querido que haya un nexo entre su programa y sus voceros, o sea, sus candidatos.

Si entrar en otras consideraciones de carácter ético, el artículo propuesto mantiene la congruencia general de las disposiciones sustanciales del estatuto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — El artículo propuesto ya fue considerado y rechazado por la comisión.

La comisión no acepta, pues, el agregado. Pediría a los colegas que han solicitado la palabra para referirse a este punto, que ahорremos argumentaciones, en razón del tiempo y de la posibilidad de quedar sin quórum.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Prácticamente voy a acatar el pedido del señor diputado Belgrano Rawson, pero quiero señalar que si esta iniciativa no partiera del señor diputado Llaver, quien me merece el mayor respeto y por cuyas convicciones tengo también el mayor concepto, diría que esta proposición es totalitaria, pues el Estado nada tiene que hacer, hasta ese extremo, en la vida interna de los partidos políticos.

Esta es una pretensión del Estado de subrogarse en la responsabilidad política y moral de los partidos políticos, quienes por otra parte pueden elegir a quienes se les ocurra para nominarlos en sus listas, en la medida en que respondan al programa partidario.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Seré sumamente breve. Exigir la afiliación para poder ser candidato es un temperamento que podría considerarse como posibilidad en algún instante de la vida argentina. Pero en el actual momento, creo que esto no ayudaría a solucionar los graves problemas que nos afligen.

Sin ánimo de polémica, señalo que hombres que se titulan democráticos y que hace menos de una hora han calificado de totalitario o de antirrepublicano o de antidemocrático al estatuto sancionado durante el régimen del general Perón, solicitan ahora la inclusión de cláusulas que en él figuraban, como la que exige la afiliación para ser candidatos.

Con respecto a la preocupación del señor diputado Llaver, señalo que hay un artículo que establece claramente que frente a las violaciones del estatuto por parte de algún candidato la autoridad partidaria tiene la oportunidad de ratificar o de rectificar la conducta del mismo, con lo que se salva totalmente el peligro de verse privado de la personería.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ritacco.

Sr. Ritacco. — Había decidido no hacer uso de la palabra, pero como otros sectores se han expedido sobre este asunto, debo dar la opinión de nuestro bloque.

Si se acepta la proposición del señor diputado Llaver el 92 por ciento de la ciudadanía, que no está afiliada a partidos políticos, queda fuera de las listas, lo cual evidentemente no conviene a la democracia argentina.

Sr. Damiani. — Se soluciona afiliándose al partido.

Sr. Ritacco. — Pero con la exigencia del año de antigüedad no podrían ser candidatos.

Y en el sector independiente, que no actúa activamente en política, figuran muchas veces los ciudadanos más capaces y progresistas del país.

Por eso nos oponemos terminantemente a la proposición del señor diputado Llaver.

Sr. Llaver. — ¿Me permite una breve interrupción?

Sr. Ritacco. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Llaver. — Es para señalar —ya que no se me permitió una interrupción que solicité anteriormente— que este artículo venía en el proyecto originario del Poder Ejecutivo y que, entre las observaciones formuladas por los diversos partidos políticos, no recuerdo haber encontrado ninguna a esta disposición.

Sr. Ritacco. — Además, señor presidente, parece un contrasentido que sea justamente un diputado radical del pueblo el que haga este pedido de que el ciudadano debe ser afiliado para poder ser candidato, porque tengo entendido que don Hipólito Yrigoyen, para ser candidato a presidente de la República no necesitó ser afiliado al Partido Radical.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Elena. — Fue afiliado a la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Torreiro.

Sr. Torreiro. — Con toda consideración, y porque resulta de mucho interés para nuestro bloque, voy a solicitar al señor diputado Llaver se sirva aclarar si el agregado que propuso es fruto de su opinión personal o si es compartido por su bloque.

Sr. Llaver. — Voy a contestarle al señor diputado.

El agregado que propuse, que hice presente al iniciar mi exposición, pertenece a nuestro bloque y está comprendido entre las proposiciones formuladas en las disidencias expuestas en la comisión por los señores diputados Horacio García, Adolfo Rouzaut, Santiago Felipe Llaver y Angel Ortiz Hernández, y está inserto en la página 2343 del despacho.

Sr. Vedia. — Nosotros, con absoluta lealtad, declaramos que esta pretensión de inmiscuirse en la vida de nuestro partido no la toleraremos y no lo vamos a votar. Nos retiraremos momentáneamente, pero esto no lo votamos.

Sr. Torreiro. — Después de las palabras del señor diputado Llaver, no podemos contribuir con nuestro voto a una medida antidemocrática, excluyente y de intromisión en la vida interna de los partidos políticos.

Por lo tanto, nuestro bloque, si se insiste en esta proposición, se retirará del recinto.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Torreiro. — Somos dueños de nuestros actos. Si el bloque radical del pueblo hace suya la opinión del señor diputado Llaver, no podemos contribuir con nuestro voto y con nuestra presencia a concretar tremenda arbitrariedad.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena.

Sr. Domingorena. — Evidentemente, hemos llegado a un artículo que también resulta clave en la organicidad que queremos dar a las fuerzas políticas argentinas.

No se alcanza a comprender por qué el sector mayoritario, recogiendo el pensamiento del Poder Ejecutivo, traducido a través de su mensaje, se empeña en avanzar, por medio de esta ley, sobre la vida interna de las agrupaciones políticas.

¿Qué es lo que perseguimos con esta ley? Vigorizar a las fuerzas políticas, dar algunas normas, no todas; tratar de encauzarlas y de hacerles servir en debida forma los preceptos constitucionales. ¿Por qué vamos a avanzar en este terreno, que está erizado de dificultades, si estamos viendo además que distintos sectores políticos lo resisten en forma calurosa, porque entienden —me parece que entienden bien y nuestro bloque está en la misma tesitura— que a través de este artículo se avanza sobre la vida interna de las agrupaciones, cuando ellas en realidad tienen en sus manos la forma de decidir quiénes pueden ser sus representantes?

¿Qué perseguimos con este artículo? ¿Por qué empeñarnos en imponer el número de una bancada mayoritaria y no en coordinar esfuerzos para que esta ley sea la expresión de la convivencia democrática, que se está salvando pese a los encontronazos que estamos soportando hombres de distintas bancadas? Yo pido encarecidamente al sector mayoritario que retire esta ponencia porque, evidentemente, si insiste en ella corremos el riesgo de hacer fracasar esta sesión, que tiene que ser la definitiva para dar la media sanción a este estatuto de los partidos políticos.

No avanzo sobre la postura del bloque, no he señalado que nos retiraremos, ni estamos entorpeciendo la labor de la Honorable Cámara. Llevamos aquí largas horas escuchando discursos controvertidos y buscando afanosamente acortar distancias para que este dispositivo legal sea la expresión del cuerpo y no la resultante caprichosa de un sector que en este momento pueda contar con un mayor número de votos ante una decisión de esta naturaleza.

Creo que tenemos sobrados motivos para pedirle al sector mayoritario que deje sin efecto esta proposición. La mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales ha desechado esta propuesta. Sectores numerosos de la Honorable Cá-

mara han expresado su desagrado con la letra, con el espíritu y alcance de esta disposición.

Insisto, exhortando una vez más a que salvemos estos esfuerzos de lograr la sanción que tanta falta hace para que el Senado comience a trabajar sobre esto que, si bien es cierto no constituye una panacea, al menos está con'ormando aun a los más exigentes, porque importa un paso positivo hacia la vigorización de las fuerzas políticas.

Dejemos que ellas actúen libremente, lo más libremente posible. Pongámosles pocas trabas. De ellas y solamente de ellas depende que hombres que no militan en sus filas partidarias puedan representar con autenticidad a esas fuerzas políticas; de ellas depende que sean celosos defensores de sus ideales y que, en definitiva, presenten un servicio señalado a la República. No pongamos la afiliación obligatoria. Busquemos la posibilidad de que los partidos políticos lleven a sus distintos cargos a los hombres más representativos y capaces que, sin estar transitando por los comités y sin haber llenado una ficha partidaria, quieran hacer su aporte al servicio de la alta política.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ghioldi. — ¿Me permite, señor diputado, para una sugerencia?

Sr. Ferreira. — ¿Cómo no, señor diputado.

Sr. Ghioldi. — Muchas gracias, señor diputado Ferreira.

Creo, señor presidente, que podríamos evitar la discusión y proceder a votar. Hay consentimiento de todos los bloques, menos del sector oficial o grupo mayoritario, en una posición contraria a la cláusula que se propone. Evitemos discursos, y votemos. Ya se dieron todos los argumentos.

Sr. Ferreira. — Estoy de acuerdo con la proposición del señor diputado Ghioldi y quiero decir que nuestro partido votará en contra de la propuesta del señor diputado Llaver, por considerar que es retrógrada...

Sr. Llaver. — No se lo puedo aceptar...

Sr. Ferreira. — El término no es ofensivo, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Ferreira. — Nos lleva a las viejas prácticas comiteriles que precisamente son las que desprestigian a los partidos políticos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar en primer término el artículo 34 conforme al despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa de 86 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Fiol, no aceptado por la comisión.

— Resulta negativa de 67 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Señor presidente: me tomó inadvertido la votación. Quiero decir que en el artículo 34 la comisión aceptó, y propone como agregado lo siguiente: «Los partidos que adoptaren el sistema de convenciones deberán realizar la elección primaria por el voto directo de los afiliados.»

Y el artículo 39, cuya consideración se hará inmediatamente la comisión propone sustituirlo por el siguiente texto: «La residencia exigida por la Constitución o la ley como requisito para el desempeño de los cargos para los que se postulen los candidatos podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba, excepto la testimonial, siempre que figuren inscritos en el registro de electores del distrito que corresponda.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura del agregado propuesto por la comisión al artículo 34.

Sr. Secretario (González). — Dice así: «Los partidos que adoptaren el sistema de convenciones deberán realizar la elección primaria por el voto directo de los afiliados.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por la comisión al artículo 34.

— Resulta afirmativa de 79 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 35.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Propongo que se agregue en el artículo 35, después de la palabra «internas», la frase «podrán ser directa o indirectas, y...».

O sea que el artículo 35 quedaría redactado de la siguiente forma: «Las elecciones partidarias internas podrán ser directas o indirectas, y se regirán por la carta orgánica, subsidiariamente por esta ley, y en lo que sea aplicable, por la legislación electoral.»

Es evidente, señor presidente, que ha estado en el ánimo de los autores del despacho de la mayoría de la comisión admitir la posibilidad de que ciertas autoridades partidarias y candidatos puedan ser elegidos por el sistema indirecto, es decir, por los organismos deliberativos de los partidos, según las prescripciones de las respectivas cartas orgánicas. En esta forma quedaría perfectamente clarificado el concepto de la ley.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto?

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión no acepta el agregado, y aclara que se acaba de votar afirmativamente una norma agregada al artículo 34 que conduce exactamente a lo mismo que quiere el señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿El señor diputado Balestra mantiene su proposición?

Sr. Balestra. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 35 tal como figura en el despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa de 83 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 36.

— Se aprueban los artículos 36 y 37.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a dar lectura de un agregado propuesto al artículo 37.

Sr. Secretario (González). — Dice así: «Los candidatos a cargos electivos deberán ser afiliados del partido por la antigüedad mínima de un año, salvo el partido que tenga una existencia menor.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto al artículo 37.

— Resulta negativa de 68 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 38.

Tiene la palabra el señor diputado Almada.

Sr. Almada. — Es para proponer la sustitución del artículo 38 del despacho de la comisión por el siguiente: «No podrán ser candidatos a cargos públicos electivos ni ser designados para ejercer cargos partidarios los que según el artículo 29 no pueden ser afiliados ni los que sean miembros de la comisión directiva de un sindicato con personería gremial otorgada de acuerdo con la ley 14.455.»

Este artículo 38 está contenido en la disidencia del señor diputado González Bergez, y tiene varias razones que lo fundamentan.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Amablemente, la Presidencia recuerda al señor diputado que los distintos sectores habían convenido en hacer la fundamentación de las distintas modificaciones de una sola vez y por capítulos. Si reabrimos la discusión artículo por artículo, mucho teme la Presidencia que no pueda llegarse hoy al final de este proyecto.

Sr. Almada. — Pero se ha estado hablando y formulando observaciones artículo por artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — No, señor diputado.

Sr. Almada. — Quiero formular una breve fundamentación.

Esto significa la eliminación del inciso e), que en definitiva no guarda relación con la realidad actual del país, porque habla de los apoderados de empresas concesionarias de servicios públicos, y ya no hay apoderados de grandes empresas de servicios públicos cuya influencia en la vida del país pueda determinar una incidencia desdorosa o contraria a los intereses del país, o a los intereses políticos, electorales o democráticos que se quieren preservar.

Esto significa en definitiva una injusticia con respecto a los dirigentes o afiliados de partidos políticos que pueden desempeñarse como apoderados de empresas de servicios públicos que en este momento son pequeñas, como pueden ser las empresas concesionarias de transportes colectivos, y estos afiliados tendrían una restricción inconciliable con el espíritu democrático de que se ha querido dotar a este estatuto.

En lo que atañe a la incompatibilidad con el desempeño de cargos gremiales, tiene también un gran sentido democrático. Nosotros creemos que la gestión o la misión de los sindicatos debe estar absolutamente separada de la gestión política, para evitar las interferencias gremiales y políticas y para evitar, al mismo tiempo, que la influencia de los grandes sindicatos origine distorsiones en el orden de los partidos políticos. Queremos evitar el trasvasamiento de influencia de los sindicatos hacia los partidos políticos, porque la tendencia de los sindicatos —sobre todo a través de la ley 14.455—, tal como están organizados, es una tendencia totalitaria hacia el partido único, de la que estamos en el deber de defender a los partidos políticos.

La norma que proponemos está destinada a recrear el espíritu democrático inclusive en los sindicatos y a preservarlos de lo que puede ser la influencia perniciosa del Estado o de la política en la dirección o en la conducción de los sindicatos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la sustitución propuesta por el señor diputado Almada?

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión ha considerado ya la sustitución propuesta por el señor diputado Almada, y por mayoría la rechazó; en consecuencia, no acepta la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 38 con la redacción propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa de 76 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura del agregado propuesto por el señor diputado Garófalo.

Sr. Secretario (González). — El agregado propuesto iría como inciso f) y diría así: «Los miembros de las comisiones directivas de los sindicatos, federaciones y confederaciones.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado leído por Secretaría.

— Resulta negativa de 60 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a leer por Secretaría el segundo apartado propuesto por el señor diputado Garófalo, que iría como artículo nuevo a continuación del 38.

Sr. Secretario (González). — «Ningún ciudadano podrá ser candidato en una misma elección a dos o más postulaciones.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta negativa de 57 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 39 con el texto que en sustitución del que figura en el despacho ha propuesto la comisión.

— Resulta afirmativa de 70 votos; votan 98 señores diputados.

— Sin observaciones se aprueba el artículo 40.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo III, que comprende los artículos 41 y 42.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Según lo que ya se aprobó con anterioridad, hay que agregar en el artículo 42 la palabra «número» entre «emblemas» y «libros». El artículo quedaría así: «La titularidad de los derechos y poderes partidarios reglada en el artículo anterior, determina la de los bienes, símbolos, emblemas, número, libros y documentación del partido.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se formulan observaciones al artículo 41 se lo dará por aprobado.

— Sin observaciones, se aprueba el artículo 41.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 42 con el agregado propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo IV, que consta del artículo 43.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — En el primer párrafo del artículo, la comisión propone suprimir las palabras «y documentos» y también el inciso a) que dice «Registro de afiliados». El inciso b) pasaría entonces a ser a); el c), b); y el d), c).

También propone agregar, como apartado segundo, lo siguiente: «Además, los comités centrales de distritos llevarán el fichero de afiliados.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 43 con las modificaciones propuestas por la comisión.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo V, que comprende los artículos 44 a 46.

Si no se formulan observaciones, se dará por aprobado el artículo 44.

— Sin observaciones, se aprueban los artículos 44, 45 y 46.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo VI, que comprende los artículos 47 y 48.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — En el artículo 47 también tiene que agregarse el término «número». Quedaría así: «Se garantiza a los partidos reconocidos el derecho al registro y al uso exclusivo de sus símbolos, emblemas y número, los cuales no podrán ser usados por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 47 con el agregado propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa de 92 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — En el artículo 48 también hay que agregar la palabra «número», a fin de que diga: «...símbolos, emblemas y número.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 48 en la forma propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa de 94 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo VII, que consta del artículo 49.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — En el inciso d) del artículo hay que agregar la palabra «número». Quedaría así: «Los símbolos, emblemas y número partidarios que se registren.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 49 con el agregado propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa de 94 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el título V, capítulo I. Comprende este capítulo los artículos 50 a 56.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Hay una sola modificación en el artículo 56, apartado 1). A continuación de «mejoras», debe agregarse «nacionales, a partir del 1º de enero de 1964». Que-

daría así: «1) Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos, estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras nacionales, a partir del 1º de enero de 1964.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ghioldi.

Sr. Ghioldi. — Si yo hubiera participado en el debate en general, habría dedicado un capítulo especial de mi exposición al estudio de las finanzas partidarias que es la materia del título que ahora tratamos. No habiéndolo hecho, y no proponiéndome hablar en las presentes circunstancias, quisiera pedir a la Honorable Cámara la inserción de un trabajo de apenas veinte páginas, que contiene útiles y frescas referencias a la legislación y a la historia comparada de las finanzas de los partidos modernos. Creo que es altamente valioso; ha sido realizado por un profesor de la Universidad de Florida, después de haber asistido a un seminario. Trae información de partidos europeos, americanos y asiáticos que acaso ilustrará e interesará a los estudiosos sobre esta materia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Oportunamente se votará la inserción solicitada.

Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a pasar lista.

—Se pasa lista.

—Mientras se pasa lista:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Hay quórum, señores diputados.

Si no hay observaciones, se aprobarán los artículos 51, 52, 53, 54 y 55.

—Se aprueban los artículos 51, 52, 53, 54 y 55.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El artículo 56 tiene un agregado propuesto por la comisión.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 92 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo II del título V, que comprende los artículos 57 y 58.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — En el artículo 58, inciso f), corresponde agregar entre las palabras «percepción» y «del» la palabra «anual».

Sr. Ortiz Hernández. — ¿Se ha dado participación a la Comisión de Presupuesto y Hacienda?

Sr. Belgrano Rawson. — En contestación a la pregunta del señor diputado señalo que la modi-

ficación la propone la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Ortiz Hernández. — Pero es un agregado que implica gastos, porque eleva la retribución que se va a dar a los partidos políticos de 20 pesos por voto computado, que en lugar de ser por cada elección será anual. Por eso quiero preguntar al miembro informante de la comisión si se ha dado participación a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el estudio de este asunto.

Sr. Belgrano Rawson. — El señor diputado ha participado de las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Repito: el agregado lo propone la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Serú García. — De acuerdo a las disposiciones reglamentarias, tratándose de gastos o aumento de gastos, basta que haya despacho de comisión sin que sea estrictamente necesario que ese despacho sea de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Esa es la interpretación de la Honorable Cámara.

Si no se hacen observaciones, se dará por aprobado el artículo 57.

—Sin observación se aprueba el artículo 57.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 58.

Se va a votar con el agregado propuesto por el señor diputado Belgrano Rawson.

—Resulta afirmativa de 95 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo III del título V que comprende los artículos 59 y 60.

Si no se hacen observaciones, se darán por aprobados.

—Sin observación se aprueban los artículos 59 y 60.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el título VI capítulo único, que comprende los artículos 61 a 66 inclusive.

Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — Quiero formular una pregunta. ¿La comisión mantiene el texto del inciso c) del artículo 63?

Sr. Belgrano Rawson. — Sí, señor diputado. Ya se aclaró con motivo de la discusión del artículo 22 que es el que da sentido a esta disposición.

Sr. Ferreira. — Nuestro sector va a votar en contra de este artículo, que tiene íntima conexión con el inciso c) del artículo 3º y con los artículos 21 y 22.

Por esta vía del inciso c) se vuelve a las enunciaciones de carácter general subjetivo y lo que había mejorado el artículo 22 con la redacción final que le dio la comisión, se desvirtúa si se mantiene este inciso.

Se habla nuevamente de principios democráticos y republicanos que son insusceptibles de una definición técnico-jurídica y que son conceptos polémicos y políticos. Con ello se llevan a la interpretación de la magistratura judicial cláusulas que en su aplicación van a determinar la caducidad o la extinción de un partido político.

Como ya me referí a estos aspectos en la discusión en general, voy a ser muy breve y fundamentaré mi exposición diciendo que el inciso c) del artículo 63 contiene lo que técnicamente se denomina una delegación indefinida o sea que significa tanto como transferir a un cuerpo dependiente del Ministerio del Interior la atribución de crear la restricción o la prohibición en cada caso concreto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se hacen observaciones, se darán por aprobados los artículos que se enuncien.

—Sin observación, se dan por aprobados los artículos 61 y 62.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El artículo 63 se votará por partes.

Primero se votará todo el artículo, con excepción del inciso observado, es decir el inciso c).

—Resulta afirmativa de 88 votos; votan 99 señores diputados.

Se va a votar el inciso c) conforme al despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa de 85 votos; votan 98 señores diputados.

—Sin observaciones, se aprueban los artículos 64, 65 y 66.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo I del título VII, que comprende los artículos 67 a 72 inclusive.

Si no se hacen observaciones, se darán por aprobados los artículos que se enuncien.

—Sin observaciones se aprueban los artículos 67 a 72.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo II del título VII, que comprende los artículos 73 al 76 inclusive.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — El texto que propone la comisión para el apartado 1) del artículo 74 es el siguiente: «Cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, y vencidos los términos de notificación y publicación dispuestos por el artículo 18, párrafo 2º, el juez nacional electoral convocará a una audiencia, dentro de los diez días hábiles siguientes, al procurador fiscal electoral y a los apoderados de los partidos reconocidos o en formación del distrito de su jurisdicción...», siguiendo igual el resto del artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se hacen observaciones, se darán por aprobados los artículos que se enuncien.

—Sin observación se aprueba el artículo 73.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 74 con la redacción propuesta por la comisión.

—Resulta afirmativa de 91 votos; votan 100 señores diputados.

—Sin observación se aprueban los artículos 75 y 76.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el capítulo III del título VII, que comprende los artículos 77 a 83 inclusive.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión propone sustituir el texto del artículo 83 por el siguiente: «En todo lo no previsto en los artículos anteriores se aplicarán por analogía los principios generales del derecho procesal en relación con la naturaleza de la materia.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se hacen observaciones se darán por aprobados los artículos que se enuncien.

—Sin observaciones se aprueban los artículos 77 a 82.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 83 con el texto propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa de 88 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el título VIII, que comprende los artículos 84 y 85.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — En el artículo 84 se ha deslizado un error que es necesario corregir. Donde dice: «...artículo 5º, apartados 1 y 10...», debe decir: «...de los artículos 5º y 10...».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Grau.

Sr. Grau. — Tengo la impresión que voy a proponer la misma modificación que quería hacer el señor diputado Muñiz, y que se refiere a las disposiciones sobre procedimiento que contiene este estatuto, muchas de las cuales están contempladas en la ley de creación de la Justicia Nacional Electoral.

Con el fin de evitar confusiones al respecto en cuanto a su interpretación, propongo en nombre de la comisión que luego de «12.530/62», se agregue «las disposiciones de los decretos leyes números 7.163/62, 8.163/62, 13.053/62 y 6.407/63», y luego seguiría «y todas las demás que se opongan a la presente ley».

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia le solicita al señor diputado Grau que haga llegar a la mesa la nueva redacción que propone, para mejor conocimiento de los señores diputados.

Mientras se pasa en limpio la proposición del señor diputado Grau, si hubiera asentimiento, se procedería a votar el pedido de inserción formulado por el señor diputado Ghioldi.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 98 señores diputados (1).

Sr. Presidente (Mor Roig). — Igualmente, si hay asentimiento de la Honorable Cámara, podría pasarse a considerar el título IX, capítulo único, mientras se redacta el artículo 84.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el título IX, capítulo único.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — En este título hay varias modificaciones y agregados.

En primer lugar, voy a leer el nuevo texto del artículo 86, que propone la comisión, que tiene tres o cuatro palabras cambiadas. Dice: «Los partidos nacionales y las confederaciones, existentes y reconocidos a la fecha del comienzo de la vigencia de esta ley, conservarán su personalidad jurídico-política, nombre y demás atributos, derechos y poderes inherentes a la misma en todos los distritos del país, hayan actuado o no en alguno de ellos, siempre que soliciten su inscripción ante la Justicia Nacional Electoral del domicilio de las autoridades centrales y acrediten que su organización y funcionamiento se ajustan a lo dispuesto en los títulos I, III, IV y V, dentro del plazo de un año. Igual derecho se reconoce a los partidos inscritos en sus respectivas jurisdicciones.»

Con respecto al artículo 87, la comisión propone sustituirlo por el siguiente: «Artículo 87. 1º. — A todos los fines de esta ley se consideran también partidos preexistentes: a) el que haya resultado de la fusión, registrada o no, de dos o más partidos que a la promulgación de esta ley tuviesen personalidad reconocida, a cuyo efecto estos últimos deberán acreditar su voluntad de fusionarse expresada por los órganos competentes; b) —esta propuesta fue formulada por el señor diputado Catalán y aceptada por la comisión— el que a la fecha de promulgación de la presente ley tenga su personería en trámite ante la Justicia Nacional Electoral y haya cumplido las exigencias del decreto ley 12.530/62, siempre que así se declare por sentencia.

(1) Véase el texto de la inserción en el Apéndice.

»2º. — El partido fusionado gozará de todos los derechos, franquicias y beneficios legales y patrimoniales que hubiesen correspondido a cada uno de los partidos originarios. Así mismo mantendrá las autoridades que hubiesen sido elegidas conforme a su carta orgánica.

»3º. — Los partidos a que se refiere este artículo deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior a los efectos de conservar su personalidad jurídico-política.»

Además, señor presidente, la comisión propone la incorporación de un nuevo artículo, a continuación del 87, que dice así: «La Justicia Nacional Electoral no oficializará listas de candidatos para los primeros comicios nacionales que se realicen, a partir de la vigencia de esta ley, pertenecientes a partidos que no hayan cumplido con lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 27. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 27, apartado 1º, la sanción o ratificación de la plataforma electoral podrá efectuarse para dicho comicio con posterioridad a la elección de candidatos y sancionarse por la vía del máximo organismo ejecutivo.»

Otro artículo nuevo que propone la comisión, siempre entre el que acabo de leer y el 88, dice: «Por esta única vez todos los trámites establecidos por la presente ley a los efectos del reconocimiento de partidos políticos o sus alianzas podrán cumplirse hasta cincuenta días antes de la fecha de realización de los primeros comicios nacionales.»

El artículo 88 es de forma.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Observo que en el artículo modificado proyectado por la comisión referente a la exigencia de ajustar, entre otras cosas, la plataforma electoral establecida en el artículo a que se ha referido el señor diputado Belgrano Rawson, se otorga competencia a los organismos máximos ejecutivos de cada partido para que por esta vez lo puedan hacer; pero se me ocurre que sería necesario aclarar que esa facultad que se otorga a los organismos máximos de los partidos la podrán ejercer aun cuando las cartas orgánicas estableciesen lo contrario, porque en principio no bastaría con la autorización de la ley, sino que tendría que aclararse que ello sería posible aun cuando las cartas orgánicas estableciesen otra cosa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Estas modificaciones y nuevos artículos que se han propuesto por la comisión fueron redactados ayer, poco antes de reanudarse la sesión, teniendo presentes los inconvenientes que se podían originar a los partidos políticos existentes para adecuar su funcionamiento a este estatuto.

Estas previsiones no se tuvieron en cuenta cuando se redactó el despacho, porque se pensó que, sancionado a fines de octubre o principios

de noviembre, los cuerpos directivos máximos de los partidos podrían cumplir estas normas. Precisamente, el haber incorporado esta autorización por la ley, por esta única vez, a los organismos máximos ejecutivos, ha tenido por finalidad salvar el inconveniente que anota el señor diputado Serú García. Con esto creo que queda aclarada la pregunta del señor diputado.

Desde luego que esto modifica las cartas orgánicas. Ese es el sentido, porque de otra manera quizás los partidos políticos no podrían cumplir estas normas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Catalán. — Había pedido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Perdóneme, señor diputado; la Presidencia entendió que la sesión había sido total. (*Risas.*)

Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — Se ha dicho que el Parlamento es una caja de resonancia, y yo pretendo en esta circunstancia que mis palabras trasciendan al país, con un propósito de esclarecimiento.

Comenzaré diciendo que, con verdad o sin ella —yo no lo creo—, el comentario ha girado en torno a que algunos sectores políticos especulaban con la proscripción del peronismo para canalizarlo a determinados frentes políticos. También el comentario ha girado en torno a que algunos sectores justicialistas con distintas siglas tendrían esas mismas pretensiones; esto tampoco lo creo, pero lo menciono con una finalidad de esclarecimiento.

En esta circunstancia yo digo, para que trascienda al país, que la permeabilidad de la comisión redactora del despacho sobre estatuto de los partidos políticos, que ha introducido mi iniciativa, va a permitir que el Partido Justicialista pueda ubicarse entre los partidos preexistentes, y desde ya anticipo que si esa situación no es burlada por ningún juez electoral, el Partido Justicialista va a concurrir a las elecciones de marzo con la única denominación de «Partido Justicialista», con candidatos propios y sin alianza de ninguna naturaleza. Nosotros vamos a librar la batalla también en el camino de las urnas, porque somos un movimiento revolucionario que no trepida ante nada con tal de que triunfen nuestros ideales y nuestros objetivos. Declaro, entonces, en esta circunstancia, que nuestro partido concurrirá a las urnas en marzo con la denominación de Partido Justicialista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Quiero hacer una indicación para que sea votada luego de aprobarse el último artículo de la ley, en el sentido de autorizar a la Presidencia para que realice la coordinación y ordenamiento necesarios de artículos, en razón de que si bien el despacho tenía la correlación bien hecha, al haberse incorporado algunos textos nuevos quizás alguna referencia no esté ajustada a la realidad. De ese modo se

salvaría cualquier inconveniente en la comunicación al Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Señor presidente: es nada más que para solicitar un criterio interpretativo a la comisión o, en caso contrario, proponer un agregado al artículo 87, en que se prevé la fusión de dos o más partidos en una nueva agrupación, con respecto a la personalidad jurídico-política de esa nueva entidad.

Las preguntas que quiero formular son las siguientes: en primer lugar, si la comisión interpreta que el solo hecho de la fusión o de la presentación ante la justicia electoral con la fusión implica la desaparición o caducidad de la personalidad jurídico-política de los partidos que han realizado la fusión; y en segundo término, si se considera que los partidos unificados pierden los derechos que tenían anteriormente en materia económica, es decir, el aporte de veinte pesos por voto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — A la primera pregunta, le contesto al señor diputado que la fusión implica la pérdida de las personalidades individuales. Con respecto a la segunda, la fusión implica el mantenimiento —y lo dice expresamente el texto propuesto— de todos los beneficios y franquicias legales y patrimoniales de que hubieran gozado los partidos fusionados, habiendo advertido en su oportunidad que esto no quiere decir —y di entonces un ejemplo muy menor, pero práctico— que el uso de dos teléfonos por cada partido se multiplique, sino que se mantiene el alcance de la franquicia.

Sr. Bobillo. — La franquicia de veinte pesos es sobre cada voto obtenido en la última elección, pero la fusión no implica siempre la fusión de los votos también, y entonces no es justo que se le siga abonando a un nuevo partido una contribución económica que puede no corresponder a la realidad electoral del partido, pues se pueden haber desgajado importantes sectores de cualquiera de las agrupaciones que se unieron.

Sr. Belgrano Rawson. — En todos los casos que se otorga a un partido esa suma de dinero por voto obtenido, en el régimen actual y en el que estamos considerando, se entrega sobre la base de los resultados de una elección anterior, y desde luego, eso no implica dar por sentado que aquella suma de voluntades de la elección última se mantiene alrededor del partido.

El sentido de la sanción es muy claro. Todas las franquicias y beneficios de orden económico se suman y, lógicamente, en este caso, si el partido A y el partido B, fusionados ahora, obtuvieron respectivamente 10.000 votos, el otorgamiento de la suma de dinero se hará

sobre la base de 20.000 votos. Este es el sentido de la propuesta de la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura del texto del artículo 84 tal como lo ha redactado la comisión.

Sr. Secretario (González). — «Artículo 84. Quedan derogados la ley 15.793 y los decretos leyes 2.390/63, 3.284/63 con excepción de los artículos 5º y 10; 12.530/62, las disposiciones de los decretos leyes 7.163/62, 8.163/62 y 13.053/62, que se opongan a esta ley, como así también todas las normas legales que se opongan a la misma.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — El agregado que propone la comisión me parece muy oportuno y conveniente. Por la ley que estamos considerando se crean disposiciones relacionadas con el procedimiento partidario, y contencioso ante la justicia electoral, sobre afiliaciones, sobre creación, dirección y fiscalización del fichero nacional y de distrito de los afiliados de los partidos políticos, etcétera.

La existencia de disposiciones sobre las cuestiones mencionadas en el decreto 7.163/62 y en las otras normas enumeradas en el agregado propuesto, podrían determinar serios conflictos, incluso un verdadero caos. El agregado es, por lo tanto, conveniente y necesario para evitar cualquier equívoco o malentendido, estableciendo de manera expresa que las únicas disposiciones válidas en este orden de cosas son las de la ley que en estos momentos estamos sancionando y no las del decreto ley sobre creación de la justicia nacional electoral, sus modificatorias y complementarias.

Sr. Grau. — Así es.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 84 propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa de 92 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se formulan observaciones al artículo 85 se dará por aprobado.

— Sin observaciones, se aprueba el artículo 85.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 86 con las variantes de forma propuestas por la comisión.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a leer por Secretaría el artículo 87 según el texto propuesto por la comisión, en sustitución del que figura en el despacho.

Sr. Secretario (González). — «Artículo 87. — 1) A todos los fines de esta ley se consideran también partidos preexistentes: a) el que haya resultado de la fusión, registrada o no de dos o más partidos que a la promulgación de esta ley

tuviesen personalidad reconocida, a cuyo efecto estos últimos deberán acreditar su voluntad de fusionarse expresada por los órganos competentes; b) el que a la fecha de la promulgación de la presente ley tenga su personería en trámite ante la Justicia Nacional Electoral y haya cumplido las exigencias del decreto ley 12.530/62, siempre que así se declare por sentencia.

»2) El partido fusionado gozará de todos los derechos, franquicias y beneficios legales y patrimoniales que hubiesen correspondido a cada uno de los partidos originarios. Así mismo tendrán las autoridades que hubiesen sido elegidas conforme a su carta orgánica.

»3) Los partidos a que se refiere este artículo deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior a los efectos de conservar su personalidad jurídico-política.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Propongo que después de la palabra «originarios», en el segundo apartado del artículo, se agregue el siguiente párrafo: «excepto la contribución prevista en el inciso f) del artículo 58, la que será otorgada en la forma prevista en el apartado 2) del artículo».

Sr. Belgrano Rawson. — Por las razones que he dado al contestar al pedido de aclaración, la comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado Bobillo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 87 conforme a la redacción leída por Secretaría.

— Resulta afirmativa de 95 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a leer un artículo nuevo propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (González). — Dice así: «La Justicia Nacional Electoral no oficializará listas de candidatos para los primeros comicios nacionales que se realicen, a partir de la vigencia de esta ley, pertenecientes a partidos que no hayan cumplido con los artículos 21, 22 y 27. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 27, apartado 1), la sanción o ratificación de la plataforma electoral podrá efectuarse para dicho comicio con posterioridad a la elección de candidatos y sancionarse por la vía del máximo organismo ejecutivo.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Rogaría a la comisión que aclarara si la facultad que se acuerda a los máximos organismos ejecutivos es solamente para cumplir las disposiciones del artículo 27 ó también del artículo 21, que habla de las bases de acción política de la declaración de principios.

Sr. Belgrano Rawson. — Esta norma no tiene por finalidad posibilitar que los partidos puedan cumplir con la disposición de dictar o ratificar la plataforma electoral en término. Y como

el estatuto establece que ello debe ser antes de la elección de candidatos, por esta única vez se dice que podrá ser con posterioridad a la elección de candidatos y de sancionarse la carta orgánica por el máximo organismo ejecutivo.

Los miembros de la comisión entendemos que el artículo nuevo comprende a todos los otros artículos, porque de lo contrario no tendría sentido, ya que habría que reunir la convención o el congreso para una cosa y para otra el órgano máximo ejecutivo.

De manera que la interpretación que damos es que comprende las tres normas: artículos 21, 22 y 27.

Sr. Martínez Raymonda. — Se podría decir más claro expresando, en lugar de «A los efectos de lo dispuesto en el artículo 27...», «A los efectos de lo dispuesto en dichos artículos».

Sr. Belgrano Rawson. — Sí, señor diputado, pero hay también que corregir a continuación, porque si no la modificación no guardaría concordancia con el resto del artículo. Tendría que decir: «A los efectos dispuestos en dichos artículos, la sanción o ratificación podrá efectuarse...» sin hablarse de «plataforma». Se suprimiría «de la plataforma electoral».

Sr. Martínez Raymonda. — De acuerdo, señor diputado.

Sr. Belgrano Rawson. — Con esa redacción la comisión sugiere que se apruebe el artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 87 bis en la forma propuesta y aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa de 96 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a dar lectura del segundo artículo nuevo propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (González). — Dice así: «Por esta única vez todos los trámites establecidos por la presente ley a los efectos del reconocimiento de partidos políticos o sus alianzas podrán cumplirse hasta cincuenta días antes de la fecha de realización de los primeros comicios nacionales a partir de su vigencia».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia aclara que estos dos artículos integrarían el título IX de disposiciones transitorias.

Sr. Belgrano Rawson. — Ese fue el sentido de la proposición que hice, y supongo que debe votarse después del artículo 88.

Pido rectificación de la votación sobre el artículo 87 (3), porque la última expresión «a partir de su vigencia», no es parte del artículo. Seguramente, al hacerse llegar el borrador a la Secretaría no se tachó esta expresión, que no concuerda con el resto del artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si se reconsidera el artículo 87 (3).

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 87 (3), con la indicación formulada por el señor diputado Belgrano Rawson.

— Resulta afirmativa de 91 votos; votan 97 señores diputados.

— El artículo 88 de la numeración original es de forma.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Corresponde votar la indicación del señor diputado Belgrano Rawson en el sentido de facultar a la Presidencia para el ordenamiento del proyecto que acaba de sancionarse.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Catalán. — Hago indicación de que el proyecto se gire inmediatamente al Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Entiendo que la indicación del señor diputado está referida a que se envíe el lunes próximo.

Sr. Catalán. — Que se gire una vez hecho el ordenamiento.

4

MOCION

Sr. Presidente (Mor Roig). — De acuerdo con lo resuelto por la Honorable Cámara corresponde continuar la consideración del dictamen de la comisión especial investigadora de contratos de petróleo.

Sr. Del Pero. — Hago moción de orden de que se levante la sesión.

Sr. Muñiz. — Hago indicación de que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las diez horas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Es previa la moción del señor diputado Del Pero.

La Presidencia recuerda que en la próxima semana, de acuerdo con lo oportunamente votado, no será convocada la Honorable Cámara. La próxima sesión se realizará el lunes 14 a las 16 horas.

Se va a votar la moción de orden del señor diputado Del Pero de que se levante la sesión.

— Resulta afirmativa de 85 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Queda levantada la sesión.

— Es la hora 22 y 50.

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

5

APENDICE:

I

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

LEY DE LOS PARTIDOS POLITICOS

TITULO I

Principios generales

CAPITULO UNICO

Artículo 1º—1. Se garantiza a los ciudadanos el derecho de asociación política, para agruparse en partidos políticos democráticos.

2. Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento, como partido político, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política, para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las disposiciones y los requisitos que establece esta ley.

Art. 2º—Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y la realización de la política nacional, y les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos.

Art. 3º—La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

- a) Grupo de ciudadanos, unidos por un vínculo político permanente;
- b) Doctrina que en la determinación de la política nacional promueva el bien público, a la vez que propugne expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo y republicano, y el de los principios y los fines de la Constitución Nacional;
- c) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma que establezca cada partido;
- d) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que comporta su inscripción en el registro público correspondiente.

Art. 4º—Los partidos reconocidos, además de su personalidad jurídico-política, son personas jurídicas de derecho privado, en cuyo carácter podrán adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con el Código Civil y las disposiciones de la ley.

Art. 5º—Esta ley es de orden público y se aplicará a los partidos que intervengan en la elección de autoridades nacionales y así mismo a los que concurren a elecciones municipales de la ciudad de Buenos Aires y territorio nacional de Tierra del Fuego. Antártida e islas del Atlántico Sur.

Art. 6º—Corresponde a la Justicia Nacional Electoral, además de la jurisdicción y competencia que le atribuye la ley orgánica respectiva, el contralor de la vigencia efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

TITULO II

De la fundación y constitución

CAPITULO I

Requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídico-política

1. Partidos de distrito

Art. 7º—Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personalidad jurídico-política como partido de distrito, deberá solicitarla ante el juez nacional electoral competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Acta de fundación y constitución, que acredite la adhesión de un número de electores no inferior al 4% del total de los inscritos en el registro electoral del distrito correspondiente, hasta un máximo de un millón y sin computar el excedente; este acuerdo de voluntades se complementará con un documento en el que consten nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;
- b) Nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución;
- c) Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la asamblea de fundación y constitución;
- d) Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución;
- e) Acta de designación de las autoridades promotoras, las que convocarán a elecciones para constituir las autoridades definitivas del partido, conforme con la carta orgánica y dentro de los seis meses a partir de la fecha del reconocimiento definitivo. El acta de la elección de las autoridades definitivas deberá remitirse al juez nacional electoral;
- f) Domicilio partidario y acta de designación de los apoderados;
- g) Libros a que se refiere el artículo 44, dentro de los dos meses de obtenido el reconocimiento, a los fines de su rubricación.

2. Partidos nacionales

Art. 8º—1. Los partidos de distrito reconocidos que resolvieren actuar en dos o más distritos con el

mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica, como partido nacional, deberán solicitar su reconocimiento en tal carácter ante el juez nacional electoral del distrito de su fundación.

2. Obtenido el reconocimiento, el partido recurrente deberá inscribirse en el registro correspondiente ante los jueces nacionales electorales de los distritos donde decidiera actuar, a cuyo efecto, además de lo preceptuado en el artículo 7º, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Testimonio de la resolución que le reconoce personalidad juridico-política;
- b) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica nacionales;
- c) Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las autoridades de distrito;
- d) Domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados.

Art. 9º — 1. A los efectos del artículo anterior se considera distrito de la fundación aquel donde se hubieren practicado los actos originarios y de la constitución del partido.

2. En el caso de los partidos que hayan obtenido cualquier reconocimiento anterior, el distrito de la fundación será el de esa sede judicial, mientras subsista la voluntad de mantenerlo y una sentencia definitiva no establezca otro distinto.

Art. 10. — En los partidos nacionales, los partidos de distrito carecen del derecho de secesión. En cambio, los organismos centrales competentes tendrán el derecho de intervención a los distritos.

3. Confederaciones nacionales o de distrito

Art. 11. — 1. Esta ley se aplicará a la constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de las confederaciones de partidos, sean nacionales, de distintos o de un mismo distrito, ya reconocidos.

2. El reconocimiento de las confederaciones deberá ser solicitado al juez nacional electoral del lugar del domicilio de la fundación, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Especificación de los partidos que se confederan y justificación de la voluntad de integrar la confederación con carácter permanente, expresada por medio de los órganos partidarios competentes;
- b) Testimonio de la resolución de la justicia nacional electoral que reconoció personalidad a cada uno de los partidos que se confederan;
- c) Nombre de la confederación;
- d) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica de la confederación;
- e) Nómina de autoridades de cada partido;
- f) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica de cada partido;
- g) Acta de elección de las autoridades y designación de apoderados de la confederación;
- h) Domicilio central de la confederación.

Art. 12. — Los partidos confederados tienen el derecho de secesión y podrán denunciar el acuerdo que los confedera. Sus organismos centrales carecen del derecho de intervención.

4 De la fusión de partidos

Art. 13. — Esta ley se aplica a los partidos que resulten de la fusión de dos o más partidos nacionales, o de distrito, ya reconocidos.

El reconocimiento del partido fusionado deberá solicitarse al juez nacional electoral del lugar del domicilio de cualquiera de los partidos que lo forman, cumpliendo con los requisitos establecidos en los incisos b) a g) del artículo séptimo, y acompañando testimonio de la resolución de los partidos que se fusionan.

5. De las alianzas transitorias

Art. 14. — 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los partidos de distrito o nacionales y las confederaciones que hubiesen sido reconocidos podrán concertar alianzas transitorias con motivo de una determinada elección, siempre que sus respectivas cartas orgánicas lo autoricen.

2. El reconocimiento de la alianza deberá ser solicitada por los partidos que lo integren, al juez nacional electoral del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, por lo menos dos meses antes de la elección cumpliendo los siguientes requisitos:

- a) La constancia de que la alianza fue resuelta por los organismos deliberativos máximos partidarios, en reunión convocada especialmente al efecto y por el voto de las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio;
- b) Nombre adoptado;
- c) Plataforma electoral común;
- d) Constancia de la forma acordada para la integración de las listas de candidatos, los que deberán ser elegidos de conformidad a las normas estatutarias de los partidos a los que pertenecan;
- e) La designación de apoderados comunes.

6. Reconocimiento

Art. 15. — 1. Los partidos de distritos nacionales, o confederaciones, deberán solicitar su reconocimiento hasta tres meses antes de la fecha de la elección al juez nacional electoral del distrito de la fundación, sin perjuicio de solicitarlo en los distritos en que resolvieren actuar, dentro del mismo término.

2. Los partidos, para tener derecho a obtener ese reconocimiento, y al pronunciamiento del juez nacional electoral sobre la oficialización de las candidaturas deberán justificar el cumplimiento de todas las condiciones y requisitos legales con anterioridad al día del vencimiento del plazo establecido por la legislación electoral.

CAPITULO II

Del nombre

Art. 16. — 1. Se garantiza a los partidos el derecho a un nombre, su registro y su uso.

2. El nombre deberá ser adoptado en el acto de la constitución del partido, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación.

3. La denominación «partido», únicamente podrá ser utilizada por los partidos en constitución o reconocidos, así como también por los partidos a los cuales les haya sido cancelada su personalidad política.

4. El nombre no deberá contener designaciones personales, ni derivadas de ellas, ni provocar confusión

material o ideológica, y deberá distinguirse razonablemente del nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

5. La denominación de los partidos no podrá formarse mediante aditamento o supresión de vocablos correspondientes a los nombres de partidos reconocidos, ni usarse los vocablos argentino, nacional o internacional, o sus derivados, o vocablos cuyos significados afecten o puedan afectar las relaciones internacionales de la Nación o implicar antagonismo de razas o religiones, ni que contravengan otras disposiciones de esta ley.

Art. 17. — 1. El nombre de un partido legalmente constituido es un atributo exclusivo y no podrá ser usado por ningún otro partido, asociación, agrupación o entidad de cualquier naturaleza en todo el territorio de la Nación.

2. Cuando una persona, un grupo de personas, un partido o una asociación o entidad de cualquier naturaleza usare indebidamente el nombre registrado de un partido reconocido, la justicia nacional electoral decidirá, a petición de parte, el cese inmediato del uso indebido disponiendo el empleo de la fuerza pública para su cumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes.

3. Cuando un partido fuere declarado extinguido, su nombre no podrá ser usado por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurrido seis años de la sentencia firme que declare la extinción del partido.

Art. 18. — 1. El nombre partidario, su cambio o modificación deberán ser aprobados por la justicia nacional electoral, previo cumplimiento de las disposiciones legales.

2. Solicitado el reconocimiento del derecho al nombre adoptado, el juez electoral dispondrá la notificación a los apoderados de los partidos y la publicación por tres días en el Boletín Oficial de la Nación de la denominación, así como la fecha en que fue adoptada, al efecto de la oposición que pudiere formular otro partido o el procurador fiscal.

3. Los partidos reconocidos o en constitución podrán controlar y oponerse al reconocimiento del derecho al nombre, con anterioridad a que el juez electoral resuelva en definitiva o en el acto de la audiencia establecida en esta ley, con cuya comparecencia tendrán el derecho de apelar, sin perjuicio del ejercicio ulterior de las acciones pertinentes.

4. La resolución definitiva deberá ser comunicada a la Cámara Nacional Electoral a los fines del artículo 50.

Art. 19. — Se reconoce así mismo a los partidos el derecho al uso permanente de un número de identificación, el que será asignado por la justicia nacional electoral registrado de acuerdo con lo establecido en el artículo 50. La primera vez la adjudicación se realizará por sorteo y en los partidos que en el futuro se reconozcan, en el orden numérico correspondiente a la fecha de su reconocimiento.

CAPITULO III

Del domicilio

Art. 20. — Los partidos deberán constituir domicilio legal en la ciudad capital correspondiente al distrito en el que solicitaron el reconocimiento de su personalidad jurídico-política. Así mismo deberán denunciar los domicilios partidarios central y local.

Art. 21. — A los fines de esta ley el domicilio electoral del ciudadano es el último anotado en la libreta de enrolamiento o cívica.

TITULO III

De la doctrina y organización

CAPITULO I

De la declaración de principios, programa o bases de acción política

Art. 22. — La declaración de principios y el programa o bases de acción política deberán ajustarse de manera formal y real a las exigencias del artículo 3º, inciso b), y orientarán la acción del partido.

Art. 23. — No cumplen con los requisitos del artículo anterior los partidos que por su doctrina o en su actuación —por la vía de sus organismos o candidatos— lleven a la práctica en su organización y vida interna o en su acción exterior la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza y la concentración personal del poder.

CAPITULO II

De la carta orgánica y de la plataforma electoral

Art. 24. — La carta orgánica reglará la organización y el funcionamiento del partido conforme con los siguientes principios:

- a) Gobierno y administración, distribuidos en órganos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios; las convenciones, congresos o asambleas generales serán los órganos de jerarquía superior del partido;
- b) Sanción por los órganos partidarios de la declaración de principios, el programa o bases de acción política;
- c) Apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año durante el término mínimo de sesenta días y anunciado con un mes de anticipación; la carta orgánica deberá asegurar el debido proceso partidario en toda cuestión vinculada con el derecho a la afiliación;
- d) Participación y control de los afiliados en el gobierno y administración del partido y en la elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos;
- e) Determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y control de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
- f) Determinación de las causas y la forma de extinción del partido.

Art. 25. — 1. La carta orgánica constituye la ley fundamental y suprema del partido, en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación.

2. Los organismos partidarios podrán regir la actividad interna del partido mediante la sanción de reglamentos, para su gobierno y administración.

Art. 26. — La carta orgánica y sus modificaciones deberán ser sancionadas por los órganos deliberativos del partido y aprobadas por la Justicia Nacional Electoral, en lo concerniente a las exigencias del artículo 24.

Art. 27. — La justificación de la documentación exigida en los títulos segundo y tercero de esta ley se hará mediante testimonio o copia autenticada por escribano público, sin perjuicio de que pueda ser requerida la documentación original.

Art. 28. — 1. Con anterioridad a la elección de candidatos los organismos partidarios competentes deberán sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior, de acuerdo con la declaración de principios, el programa o bases de acción política.

2. Copia de la plataforma, así como la constancia de la aceptación de las candidaturas por los candidatos, deberán ser remitidos al juez nacional electoral, en oportunidad de requerirse la oficialización de las listas.

TITULO IV

Del funcionamiento de los partidos

CAPITULO I

De la afiliación

Art. 29. — Para afiliarse a un partido se requiere:

- a) Estar domiciliado en el distrito en que se solicite afiliación;
- b) Comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento o cívica;
- c) Presentar por cuadruplicado una ficha solicitud que contenga: nombre y domicilio, matrícula, clase, sexo, estado civil, profesión u oficio, y la firma o impresión digital, cuya autenticidad deberá ser certificada en forma fehaciente por el funcionario público competente o por la autoridad partidaria que determinen los organismos ejecutivos, cuya nómina deberá ser remitida a la Justicia Nacional Electoral; la afiliación podrá también ser solicitada por intermedio de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe de la misma certificará la autenticidad de la firma o impresión digital. Las fichas solicitud serán suministradas sin cargo por la Justicia Nacional Electoral, a los partidos reconocidos o en formación.

Art. 30. — No pueden ser afiliados:

- a) Los excluidos del registro electoral, en consecuencia de disposiciones legales vigentes;
- b) El personal superior y subalterno de las fuerzas armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicio;
- c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias en actividad o jubilados llamados a prestar servicios;
- d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales.

Art. 31. — 1. La calidad de afiliados se adquirirá a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprobaren la solicitud respectiva. Una ficha de afiliación se entregará al interesado, otra será conservada por el partido y las dos restantes se remitirán a la Justicia Nacional Electoral, salvo lo dispuesto en el artículo 34.

2. No podrá haber doble afiliación. La afiliación a un partido implicará la renuncia automática a toda afiliación anterior y su extinción. También se extinguirá por renuncia, expulsión o violación de lo dispuesto en los artículos 29 y 30, debiendo cursarse la comunicación correspondiente al juez electoral nacional.

Art. 32. — El registro de afiliados estará constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliación a que se refieren los artículos anteriores, el cual será llevado por los partidos y por la Justicia Nacional Electoral.

Art. 33. — El padrón partidario será público solamente para los afiliados. Podrán confeccionarlo los partidos o el juzgado, a petición de aquéllos formulada dos meses antes del acto eleccionario. En el primer caso, actualizado y autenticado, deberá remitirse al juez antes de cada elección interna o cuando éste lo requiera. En el segundo se confeccionará en base al registro que llevará el juzgado y se entregará sin cargo a los partidos, con antelación suficiente a cada elección interna.

Art. 34. — Los partidos podrán, ajustándose a las disposiciones e instrucciones del juzgado, llevar bajo su responsabilidad el registro de afiliados y el padrón partidario, sin otra participación de la Justicia Nacional Electoral, que la relativa al derecho de inspección y fiscalización, que se ejercerá por el juez de oficio o a petición de parte interesada.

CAPITULO II

Elecciones partidarias internas

Art. 35. — 1. Los partidos practicarán en su vida interna el sistema democrático a través de elecciones periódicas para la nominación de autoridades y candidatos, mediante la participación de los afiliados de conformidad con las prescripciones de su carta orgánica. Los partidos que adoptaran el sistema de convenciones, deberán realizar la elección primaria por el voto directo de los afiliados.

2. En caso de oficializarse una sola lista de autoridades o candidatos, podrá prescindirse del acto eleccionario.

Art. 36. — Las elecciones partidarias internas se regirán por la carta orgánica, subsidiariamente por esta ley, y en lo que sea aplicable, por la legislación electoral.

Art. 37. — La Justicia Nacional Electoral podrá nombrar veedores de los actos electorales partidarios a pedido de parte interesada.

Art. 38. — El resultado de las elecciones partidarias internas será publicado y comunicado al juez nacional electoral.

Art. 39. — No podrán ser candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

- a) Los excluidos del Registro Electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;
- b) El personal superior y subalterno de las fuerzas armadas de la Nación en actividad, y en situación de retiro cuando hayan sido llamados a prestar servicio;
- c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias en actividad, o jubilados llamados a prestar servicio;
- d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional y de provincias y Tribunal de Faltas municipal;
- e) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.

Art. 40.—La residencia exigida por la Constitución o la ley como requisito para el desempeño de los cargos para los que se postulan los candidatos, podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba, excepto la testimonial, siempre que figuren inscritos en el registro de electores del distrito que corresponda.

Art. 41.—El ciudadano que en una elección partidaria interna suplantara a otro sufragante, o votare más de una vez en la misma elección, o de cualquier otra manera sufragase sin derecho y dolosamente, será inhabilitado por seis (6) años para elegir y ser elegido, inclusive en las elecciones partidarias internas y para el desempeño de cargos públicos.

CAPITULO III

De la titularidad de los derechos y poderes partidarios

Art. 42.—Se garantiza a las autoridades constituidas el uso del nombre partidario, el ejercicio de las funciones de gobierno y administración del partido, y en general el desempeño de todas las actividades inherentes al mismo, de conformidad con esta ley, demás disposiciones legales sobre la materia y la carta orgánica del partido.

Art. 43.—La titularidad de los derechos y poderes partidarios, reglada en el artículo anterior, determina la de los bienes, símbolos, emblemas, número, libros y documentación del partido.

CAPITULO IV

De los libros y documentos partidarios

Art. 44.—1. Sin perjuicio de los libros y documentos que prescriba la carta orgánica, los partidos, por intermedio de cada comité nacional y comité central de distrito, deberán llevar en forma regular los siguientes libros rubricados y sellados por el juez nacional electoral correspondiente:

- a) Libro de inventario;
- b) Libro de caja, debiendo conservarse la documentación complementaria correspondiente por el término de tres años;
- c) Libro de actas y resoluciones en hojas fijas o movibles.

2. Además los comités centrales de distritos llevarán el fichero de afiliados.

CAPITULO V

De la propaganda y proselitismo partidarios

Art. 45.—Se garantiza la libertad de propaganda y proselitismo partidarios, dentro de la letra y el espíritu de esta ley y demás disposiciones legales aplicables.

Art. 46.—Los carteles, avisos y en general todo medio de propaganda y proselitismo partidarios, no podrán ser destruidos, alterados o superpuestos por otros.

Art. 47.—La justicia nacional electoral, por conocimiento directo o por denuncia, ordenará la destrucción de los medios de propaganda y proselitismo utilizados en contravención con las disposiciones legales.

CAPITULO VI

De los símbolos y emblemas partidarios

Art. 48.—Se garantiza a los partidos reconocidos el derecho al registro y el uso exclusivo de sus símbolos, emblemas y número, los cuales no podrán ser usados por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

Art. 49.—El ejercicio del derecho al registro y al uso exclusivo de los símbolos, emblemas y número partidarios se regirá por las disposiciones contenidas en el título II, capítulo II de esta ley, en lo que sean aplicables.

CAPITULO VII

Del registro de los actos que hacen a la existencia partidaria

Art. 50.—1. La Cámara Nacional Electoral y los juzgados de distritos llevarán un registro público, a cargo de sus respectivos secretarios, donde deberán inscribirse:

- a) Los partidos reconocidos y la ratificación de los partidos preexistentes;
- b) El nombre partidario, sus cambios y modificaciones;
- c) El nombre y domicilio de los apoderados;
- d) Los símbolos, emblemas y número partidarios que se registren;
- e) La cancelación de la personalidad jurídico-política partidaria;
- f) La extinción y la disolución partidarias.

2. Todo movimiento en las inscripciones, cambios o modificaciones será comunicado inmediatamente por los juzgados de distrito a la Cámara Nacional Electoral para la actualización del registro a su cargo.

TITULO V

Del patrimonio del partido

CAPITULO I

De los bienes y recursos

Art. 51.—El patrimonio del partido se integrará con los bienes y recursos que autorice la carta orgánica y que no prohíba la ley.

Art. 52.—Los partidos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente:

- a) Contribuciones o donaciones anónimas, salvo las colectas populares. Los donantes podrán imponer cargo de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberán conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la donación por tres años;
- b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o provinciales, o de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas, o de empresas que exploten juegos de azar, o de gobiernos o entidades extranjeras;
- c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales;
- d) Contribuciones o donaciones de personas que se encontraren en situación de subordinación

administrativa o relación de dependencia, cuando hubieren sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o empleadores.

Art. 53.—1. Los partidos que contravinieren las prohibiciones establecidas en el artículo anterior incurrirán en multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución ilícitamente aceptada.

2. La persona de existencia ideal que efectúe las contribuciones o donaciones prohibidas en el artículo anterior incurrirá en multa equivalente al décuplo del monto de la donación o contribución ilegítimamente realizada, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren a sus directores, gerentes, representantes o agentes.

3. Las personas físicas que se enumeran a continuación, incurrirán en inhabilitación para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones públicas y partidarias internas, a la vez que inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, por el término de dos a seis años:

- a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones contempladas en el artículo 52 y, en general, todas las personas que contravinieren lo allí dispuesto;
- b) Los afiliados que por sí o por interpósita persona aceptaren o recibieren a sabiendas donaciones o aportes para el partido de las personas mencionadas en el inciso precedente, así como los afiliados que, por sí o por interpósita persona, solicitaren a sabiendas de aquéllos donaciones o aportes para el partido o aceptaren o recibieren donaciones anónimas, en contra de lo prescrito por el artículo 52;
- c) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervinieren directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus inferiores jerárquicos o empleados, para un partido; así como los afiliados que, a sabiendas, aceptaren o recibieren para el partido contribuciones o donaciones así obtenidas;
- d) Los que utilizaren, directa o indirectamente, fondos de un partido para influir en la nominación de cualquier persona en una elección partidaria interna.

Art. 54.—Todas las multas que se aplicaren en virtud de las disposiciones anteriores, ingresarán al «Fondo partidario permanente», creado por el artículo 58.

Art. 55.—Los fondos del partido deberán depositarse en bancos oficiales nacionales, provinciales o municipales, a nombre del partido y a la orden de las autoridades que determinaren la carta orgánica o los organismos directivos.

Art. 56.—Los bienes inmuebles adquiridos con fondos partidarios, o que provinieren de donaciones efectuadas con tal objeto, deberán inscribirse a nombre del partido.

Art. 57.—1. Los bienes muebles o inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras nacionales, a partir del 1º de enero de 1964.

2. Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato, siempre que se encontraren afectados en forma fehaciente, exclusiva y habitual, a las actividades específicas del partido y cuando las contribuciones fueren a su cargo.

3. La exención alcanzará a los bienes de renta del partido siempre que ésta fuere invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acrecentare, directa o indirectamente, el patrimonio de persona alguna; así como también a las donaciones en favor del partido y al papel destinado a uso exclusivo del mismo.

CAPITULO II

Del «Fondo partidario permanente, y de los subsidios y franquicias»

Art. 58.—Créase el «Fondo partidario permanente», con la finalidad de proveer a los partidos reconocidos de los medios económicos que contribuyan a facilitarles el cumplimiento de sus funciones institucionales.

La ley general de presupuesto determinará, con carácter permanente, la afectación de los recursos necesarios bajo el rubro «Fondo partidario permanente».

El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior, dispondrá de dicho fondo, a los efectos que determina esta ley y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Art. 59.—Los partidos con personería reconocida tendrán derecho a los siguientes beneficios y franquicias, los que regirán desde noventa días antes y hasta diez días después de cumplido cada proceso electoral, salvo los establecidos en los incisos a), b) y c), que serán permanentes:

- a) Exención del pago de tasas y derechos postales y telegráficos a la correspondencia que remitieren;
- b) La instalación y abono de hasta dos aparatos telefónicos en cada sede del organismo máximo nacional, confederal o de distrito y las comunicaciones telefónicas realizadas entre sedes partidarias o aparatos adscritos a las mismas, o entre éstas y los tribunales o juntas electorales, o bloques legislativos nacionales, provinciales o municipales, todos sin cargo;
- c) Concesión de cinco pases libres «impersonal especial» para todo el país válidos cuatro de ellos para todos los medios nacionales de transporte de pasajeros, con excepción de los aéreos, y el restante sin esta limitación;
- d) Concesión de diez pases libres «impersonal especial» para ser utilizados exclusivamente dentro de cada distrito, válidos para todos los medios nacionales de transporte de pasajeros, con excepción de los aéreos, salvo en los referentes a los distritos de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, de los cuales cinco no tendrán tal limitación;
- e) Concesión de espacios sin cargo en las estaciones de radiodifusión y televisión administradas por el Estado, que deberán acordarse consultando las necesidades de programación de las emisoras;
- f) Percepción anual del importe mínimo de veinte pesos que se establecerá separadamente para cada distrito electoral, por cada voto computado a su favor en la última elección, tomándose el total mayor en el caso que se hayan elegido distintas categorías de candidatos.

El Poder Ejecutivo podrá efectuar anticipos a partidos nuevos sobre la base de los votos que se presuma pueden obtener, con garantía

a satisfacción. Realizada la elección se efectuará el reajuste y liquidación definitivos.

Si una vez percibido el adelanto o el pago el beneficiario se abstuviere o aconsejare votar por otro partido, deberá reintegrar el importe dentro del tercer día de adoptada la resolución, con más el 1 % de interés mensual;

2. El Poder Ejecutivo adoptará las providencias necesarias para que los importes referidos en el inciso f) se hagan efectivos inmediatamente después de aprobadas las listas de candidatos o de realizada la elección, para el caso de los partidos nuevos.

CAPITULO III

Del control patrimonial

Art. 60. — Los partidos, por el órgano que determina la carta orgánica, deberán:

- a) Llevar contabilidad detallada de todo ingreso de fondos o especies, con indicación de la fecha de los mismos y de los nombres y domicilios de las personas que los hubieren ingresado o recibido; esta contabilidad deberá conservarse durante tres ejercicios con todos sus comprobantes;
- b) Dentro de los sesenta días de finalizado cada ejercicio, presentar al juez nacional electoral correspondiente, el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificados por contador público nacional o por los órganos de control del partido;
- c) Dentro de los sesenta días de celebrado el acto electoral nacional en que haya participado el partido, presentar al juez nacional electoral correspondiente cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral.

Art. 61. — 1. Las cuentas y documentos a que se refiere el artículo anterior, deberán estar en la secretaría del juez nacional electoral competente, para conocimiento de los interesados, y del ministerio fiscal, durante treinta días hábiles.

2. Si dentro de los cinco días hábiles de vencido dicho término no se hicieron observaciones, el juez ordenará su archivo.

Si se formularen observaciones por violación de las disposiciones legales o de la carta orgánica, el juez resolverá, y en su caso, aplicará las sanciones correspondientes.

3. Los estados anuales de las organizaciones partidarias en el distrito y en el orden nacional deberán publicarse por un día en el Boletín Oficial.

TITULO VI

De la caducidad y la extinción de los partidos

CAPITULO UNICO

Art. 62. — 1. La caducidad dará lugar a la cancelación de la inscripción del partido en el registro y la pérdida de la personalidad política, subsistiendo aquél como persona de derecho privado.

2. La extinción pondrá fin a la existencia legal del partido y dará lugar a su disolución.

Art. 63. — Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos:

- a) La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro años;
- b) La no presentación en distrito alguno en tres elecciones consecutivas sin causa debidamente justificada;
- c) No obtener en alguna de las dos elecciones anteriores el dos por ciento del padrón electoral en ningún distrito;
- d) La violación de lo determinado en los artículos 7º, incisos e) y g) y 44, previa intimación judicial.

Art. 64. — Los partidos se extinguen:

- a) Por las causas que determine la carta orgánica;
- b) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgánica;
- c) Cuando la actividad del partido, a través de la acción de sus autoridades o candidatos no desautorizados por aquéllas, fuere atentatoria a los principios fundamentales establecidos en los artículos 3º, 22 y 23;
- d) Por impartir instrucción militar a los afiliados u organizarlos militarmente.

Art. 65. — La cancelación de la personalidad política y la extinción de los partidos serán declaradas por la sentencia de la Justicia Nacional Electoral, con todas las garantías del debido proceso legal, en que el partido será parte.

Art. 66. — 1. En caso de declararse la caducidad de la personalidad política de un partido reconocido, en virtud de las causas establecidas en esta ley, previa intervención del interesado y del procurador fiscal electoral, podrá ser solicitada nuevamente después de celebrada la primera elección, cumpliendo con lo dispuesto en el título II.

2. El partido extinguido por sentencia firme no podrá ser reconocido nuevamente, con el mismo nombre, la misma carta orgánica, declaración de principios, programa o bases de acción política, por el término de seis años.

Art. 67. — 1. Los bienes del partido extinguido tendrán el destino establecido en la carta orgánica, y en el caso de que ésta no lo determinare, ingresarán, previa liquidación, al «Fondo partidario permanente», sin perjuicio del derecho de los acreedores.

2. Los libros, archivos, ficheros y emblemas del partido extinguido, quedarán en custodia de la Justicia Nacional Electoral, al que, pasados 6 años y previa publicación en el Boletín Oficial por 3 días, podrá ordenar su destrucción.

TITULO VII

Del procedimiento partidario ante la justicia electoral

CAPITULO I

De los principios generales

Art. 68. — El procedimiento partidario electoral será sumario, verbal y actuado, en doble instancia.

Art. 69. — La prueba se ofrecerá en la primera presentación y se producirá en la audiencia.

Art. 70. — Tendrán personería para actuar ante la Justicia Nacional Electoral los partidos reconocidos o en constitución, sus afiliados, cuando les hayan sido desconocidos los derechos otorgados por la carta orgánica y se encuentren agotadas las instancias partidarias, y los procuradores fiscales electorales en representación del interés u orden público.

Art. 71.—La personería se acreditará mediante copia autenticada del acta de elección o designación de las autoridades o apoderados, o por poder otorgado ante escribano público o por acta poder extendido por ante la secretaría electoral.

Art. 72.—1. Ante la Justicia Nacional Electoral se podrá actuar con patrocinio letrado.

2. Los tribunales de primera y segunda instancia podrán exigir el patrocinio letrado cuando lo consideren necesario para la buena marcha del proceso.

Art. 73.—Las actuaciones ante la Justicia Nacional Electoral se tramitarán en papel simple, y las publicaciones dispuestas por ella, en el Boletín Oficial, serán sin cargo.

CAPITULO II

Procedimiento para el reconocimiento de la personalidad

Art. 74.—El partido en constitución que solicitare el reconocimiento de su personalidad deberá acreditar la autenticidad de las firmas y demás documentación mediante certificación de escribano o funcionario público competente; en su defecto el juez nacional electoral verificará dicha autenticidad arbi-trando los medios idóneos a ese fin.

Art. 75.—1. Cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, y vencidos los términos de notificación y publicación dispuestos por el artículo 18, párrafo 2º, el juez nacional electoral convocará a una audiencia, dentro de los diez días hábiles siguientes, al procurador fiscal electoral y a los apoderados de los partidos reconocidos o en formación del distrito de su jurisdicción, así como a los de otros distritos que se hubieren presentado invocando un interés legítimo.

2. En ese comparendo verbal podrán formularse observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de las condiciones y requisitos exigido por ley o referentes al derecho, registro o uso del nombre partidario propuesto, debiendo concurrir quien las formule con la prueba en que se funde, sin perjuicio de la intervención del ministerio público por vía de dictamen.

3. Los comparecientes a la audiencia antes indicada podrán apelar.

Art. 76.—1. El juez nacional electoral, cumplidos los trámites necesarios, procederá mediante auto fundado, y dentro de los diez días hábiles, a conceder o denegar la personalidad solicitada.

2. Concedido el reconocimiento, ordenará publicar en el Boletín Oficial, por un día, el auto respectivo y la carta orgánica del partido.

Art. 77.—1. De toda resolución definitiva o que decida artículo, las partes interesadas y el procurador fiscal electoral podrán apelar dentro del término de cinco días hábiles para ante la Cámara Nacional Electoral.

2. Este recurso se concederá en relación y a los efectos regulados en los artículos siguientes.

CAPITULO III

Del procedimiento contencioso

1. Primera instancia

Art. 78.—1. Iniciada la causa se correrá traslado a los interesados por cinco días hábiles. Vencido el

término, el juez nacional electoral convocará a una audiencia dentro de los cinco días hábiles, bajo apercibimiento de celebrarse con la parte que concurra, debiendo expedirse en el plazo de diez días hábiles de realizada ésta. La incompetencia o la falta de la personería del representante deberá resolverse previamente.

2. El procurador fiscal electoral, dictaminará en la audiencia o dentro de los tres días hábiles de celebrada aquélla.

3. Los términos establecidos por esta ley son perentorios. No obstante, durante el proceso comicial, la Justicia Nacional Electoral podrá aplicar los plazos determinados por la legislación electoral, cuando sea justificada la urgencia.

2. Segunda instancia

Art. 79.—1. De toda sentencia o resolución definitiva o que decida artículo, podrá apelarse dentro del plazo de cinco días hábiles, para ante la Cámara Nacional Electoral, excepto en el caso previsto por el artículo 61 de la ley electoral.

2. La apelación se concederá en relación y en ambos efectos, y comprende el recurso de nulidad.

Art. 80.—Al interponerse el recurso ante el juez nacional electoral, las partes interesadas constituirán domicilio en jurisdicción de la Capital Federal. En su defecto, la Cámara Nacional Electoral intimará a hacerlo dentro de los cinco días hábiles bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en sus estrados.

Art. 81.—1. Recibidos los autos se pondrán en la oficina por el término común de cinco días hábiles, durante el cual podrán presentar las partes un memorial que haga a sus derechos. El tribunal, como medida para mejor proveer, podrá disponer la recepción de pruebas no rendidas en primera instancia u otras diligencias probatorias así como comparendos verbales, todo dentro del plazo de diez días hábiles.

2. Agregados los memoriales o vencido el término y producción la prueba o efectuado el comparendo verbal, en su caso, el procurador general electoral dictaminará. Agregado el dictamen, pasarán los autos al acuerdo para dictar sentencia.

3. Las partes podrán pedir pronto despacho, en cuyo caso el procurador general o la Cámara, según corresponda, deberá pronunciarse dentro del plazo de quince días hábiles.

Art. 82.—1. En el recurso de queja por retardo o denegación de justicia, vencidos los términos legales, el interesado podrá ocurrir ante el superior.

2. En igual término podrá interponer recurso de queja por denegación de apelación.

3. La aclaratoria de las sentencias definitivas podrá interponerse, en ambas instancias, dentro de las veinticuatro horas de la notificación y deberá ser resuelta en primera instancia, dentro de las cuarenta y ocho horas. La interposición de la aclaratoria interrumpirá el término para la apelación.

Art. 83.—Declarada la nulidad de una sentencia o resolución definitiva que decida artículo, la cámara dispondrá que los autos pasen al subrogante legal, para que dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

Art. 84.—En todo lo no previsto en los artículos anteriores se aplicarán por analogía los principios generales del derecho procesal en relación con la naturaleza de la materia.

TITULO VIII

Disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Art. 85. — Quedan derogados la ley 15.793 y los decretos leyes 2.390/63, 3.284/63, con excepción de los artículos 5º y 10; 12.530/62; las disposiciones de los decretos leyes 7.163/62, 8.163/62, 13.053/62, que se opongan a esta ley, así como también todas las normas legales que se opongan a la misma.

Art. 86. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas generales, con imputación a la misma.

TITULO IX

Disposiciones transitorias

Art. 87. — Los partidos nacionales y las confederaciones existentes y reconocidos a la fecha del comienzo de la vigencia de esta ley conservarán su personalidad jurídica-política, nombre y demás atributos, derechos y poderes inherentes a la misma en todos los distritos del país, hayan actuado o no en alguno de ellos, siempre que soliciten su inscripción ante la justicia nacional electoral del domicilio de las autoridades centrales y acrediten que su organización y funcionamiento se ajustan a lo dispuesto en los títulos I, III, IV y V, dentro del plazo de un año. Igual derecho se reconoce a los partidos inscritos en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 88. — 1. A todos los fines de esta ley se considerarán también partidos preexistentes:

- a) El que haya resultado de la fusión, registrada o no, de dos o más partidos que a la promul-

gación de esta ley tuviesen personalidad reconocida, a cuyo efecto estos últimos deberán acreditar su voluntad de fusionarse, expresada por los órganos competentes;

- b) El que a la fecha de promulgación de la presente ley tenga su personería en trámite ante la justicia nacional electoral y haya cumplido las exigencias del decreto ley 12.530/62, siempre que así se declare por sentencia.

2. El partido fusionado gozará de todos los derechos, franquicias y beneficios legales y patrimoniales que hubiesen correspondido a cada uno de los partidos originarios. Así mismo mantendrá las autoridades que hubiesen sido elegidas conforme a su carta orgánica.

3. Los partidos a que se refiere este artículo deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior a los efectos de conservar su personalidad jurídica-política.

Art. 89. — La justicia nacional electoral no oficializará listas de candidatos para los primeros comicios nacionales que se realicen a partir de la vigencia de esta ley, pertenecientes a partidos que no hayan cumplido con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 28. A los efectos dispuestos en dichos artículos, la sanción o ratificación podrá efectuarse para dichos comicios con posterioridad a la elección de candidatos y sancionarse por la vía del máximo organismo ejecutivo.

Art. 90. — Por esta única vez todos los trámites establecidos por la presente ley a los efectos del reconocimiento de partidos políticos o sus alianzas podrán cumplirse hasta cincuenta días antes de la fecha de realización de los primeros comicios nacionales.

Art. 91. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

II

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GHIOLDI

FINANZAS PARTIDARIAS COMPARADAS

Notas sobre la práctica formuladas
con vistas a una teoría

Por ARNOLD J. HEIDENHEIMER
(Universidad de Florida)

Para llegar al estudio más auténticamente comparativo de lo relativo a las finanzas partidarias se hace necesario, por un lado, reunir ingentes conjuntos de datos e información y, por otro lado, unificar conceptos que puedan coadyuvar a relacionar estructuras peculiares a los diversos sistemas en términos de denominadores comunes realísticamente concebidos. Este simposio contiene valiosas contribuciones en ambos aspectos. Aunque se ocupan principalmente de la tarea que les fuera adjudicada de describir los procesos financieros partidarios de un país, muchos autores llegan también a sugerir mucho en razón de las técnicas de síntesis y análisis que emplean. El propósito de este artículo es también doble: intentar una evaluación comparativa inicial de datos e interpretación presentada aquí y en otras partes, y explorar los problemas, más teóricos, de método. Como la cuestión relativa a qué conceptos pueden ser aplicables al estudio comparativo de la política financiera de los partidos es tan importante, el intento se realiza para mostrar las ventajas y desventajas de varios enfoques posibles mediante el ordenamiento

del material de acuerdo a ellos. Tres conceptos clave que parecen promisorios al respecto son: primero, algunas formas simplificadas de análisis de ingresos y egresos centrados sobre los partidos como instrumentos de competencia electoral; segundo, un cuadro de análisis basado sobre la noción de transferencia, y especialmente sobre los papeles asumidos en el proceso de transferencia de apoyo político; y tercero, modelos de desarrollo que reflejen cambios de significación en las relaciones recíprocas de electorados y partidos en las diferentes fases de las sociedades que se están industrializando (1).

(1) Al buscar conceptos mediante los cuales vincular la investigación en materia de finanzas partidarias comparativas con los temas de interés de los estudiantes de política comparada, el autor ha recurrido grandemente a la obra ajena en su mayor parte indirectamente. Muchos conceptos han surgido de la masa de material fecundo en sugerencias que pueden encontrarse en el estudio de Alexander Heard sobre las finanzas partidarias, en tanto que los escritos de Teodoro Eschenburg han resultado altamente instructivos. En relación a ideas más generales y conceptos el autor reconoce haber extraído muchos de las obras de esos estudiosos renovadores que son Gabriel Almond, Karl Deutsch, David Easton, S. M. Lipset, Otto Kirchheimer, Stein Rokkan y W. W. Rostow. El conocimiento de los estudios de especialistas en finanzas partidarias de países en particular, especialmente las contribuciones a este simposio, han resultado altamente valiosas. Extremadamente fecundas fueron las oportunidades de cambiar ideas con Herbert E. Alexander, Rupert Breitling, William B. Gwyn, Franck C. Langdon, Richard Rose y David Wurfel. No obstante, la responsabilidad por las opiniones aquí expresadas son mías.

INGRESOS PARTIDARIOS

Fuentes y cantidades

La mayor parte de los estudios de finanzas partidarias se han estructurado en base a categorías simplificadas relacionadas en forma más bien difusa con conceptos de análisis de ingresos y egresos. Generalmente se ha tratado de realizar estimaciones de la suma total de recursos de partidos y candidatos, e indicar cómo esto permitía a uno u otro competidor tener una ventaja en materia de organización o propaganda. Esta información es esencial para la construcción de análisis más refinados. Sin embargo, en parte porque la información siempre es fragmentaria, en parte porque los conceptos de decisión electoral están siempre en proceso de cambio, no es posible comparar los análisis de ingresos y egresos correspondientes a un número de países. Lo que se puede, no obstante, emprenderse, es una discusión de las impresiones recogidas a través de un examen de la información sobre algunos aspectos comparables importantes.

Los estudiantes que conocen la literatura general sobre partidos y organización partidaria, de Michels a Duverger, quizá adhieran a dos modelos contrapuestos en su imagen de procesos financieros partidarios. El del partido de masas, con sus miembros bien habituados a pagar sus cuotas, y el del cuadro partidario, cuyas finanzas dependen del capricho de unos pocos contribuyentes en gran escala, ocultos y de «intereses». Una generación atrás los dos partidos generalmente considerados como ejemplos por excelencia de los respectivos tipos, los Demócratas Sociales alemanes y los Socialistas Radicales franceses, se financiaban a sí mismos en formas que se ajustaban estrechamente a estas imágenes. James K. Pollock, un pionero en el estudio comparativo de finanzas políticas, describía así el modo de operar del Partido Social Demócrata Alemán:

Con un millón de afiliados en 1929, y un ingreso de 12 millones de marcos formados con cuarenta y dos millones de contribuciones individuales, cada miembro del partido hacía una contribución individual de 10 a 12 marcos... En su promedio, cada contribución semanal ascendía a de 20 a 25 peniques... Estas cifras son en realidad un elocuente testimonio de la excelencia y perfección del sistema socialdemócrata... Ni siquiera el Estado tiene tan buena suerte con la recaudación de impuestos.

En contraste, Daniel Halevy describió las finanzas de la oficina central de los radicales:

En el congreso partidario de 1930 hubo un nuevo esfuerzo por parte de los dirigentes para incrementar las cotizaciones... Pero los delegados se resistieron... con grandes dificultades resultantes. Curiosamente, a partir de 1930 los dirigentes, habiendo extraído conclusiones de su derrota, no repitieron sus solicitudes, y en 1932 anunciaron que todo iba bien... que tenían los fondos necesarios para las elecciones... Por la misma época el comité se mudó a los atractivos cuarteles que habían sido dejados vacantes por la Comisión Republicana de Comercio, Industria y Agricultura... Los dos comités colaboraron. El comité radical contribuyó con su influencia, el comité Mascaraud con el dinero, reunido ¡Dios sabe cómo!

Tomando estos dos modelos como puntos de partida, puede hacerse un número de generalizaciones que podrían ser aplicables a la mayor parte de los partidos actuales de Occidente.

En primer lugar, tanto los partidos de cuadro que tratan de convertirse en partidos de afiliados, y los partidos de afiliados que tratan de permanecer así, se han topado con una disminuida voluntad de sus miembros para hacer sacrificios financieros de importancia en pro de su partido, causando así que las cotizaciones de los afiliados sigan siendo o se vuelvan inadecuadas.

En segundo lugar, como una mayor cantidad de partidos han buscado convertirse en partidos de masas de un género u otro, ha habido una tendencia a la diversificación en lo que respecta a las fuentes de su apoyo financiero.

En tercer lugar, las diferencias en las estructuras financieras, como las que existían entre los partidos socialistas y los de clase media, han tendido a disminuir.

Una forma más bien estricta de identificar a los partidos que merecen el rótulo de partidos de afiliación en términos de sus fuentes de apoyo financiero, sería determinar cuáles son capaces de cubrir por lo menos dos tercios de sus gastos anuales, no correspondientes a periodos de elección, con las cuotas de sus afiliados. Para ser rigurosos y comparativos, habría que excluir a prueba los pagos de afiliación de los miembros colegiados, tales como los sindicatos. Si uno hace eso y examina los países estudiados en este simposio, uno se encuentra que sólo hay un partido en los ocho países que satisface el criterio, y él es el Partido Socialdemócrata de Alemania. Hasta hace unos pocos años el Partido Socialdemócrata cubría la mayor parte de sus gastos de campaña así como los gastos permanentes con las contribuciones individuales de sus miembros, y en esto se diferenciaba no solamente de sus competidores alemanes, sino de la mayor parte de los demás partidos importantes de Europa Occidental. Los socialistas austríacos, con sus enormes proporciones de afiliados, también se presentan como otros partidos laboristas de pequeños países con estructuras de enorme estabilidad electoral, en la que muchas funciones electorales son llevadas a cabo por organizaciones vinculadas al partido más que por los partidos en sí mismos.

El ingreso medio procedente de cuotas individuales de los principales países occidentales que tienen base de afiliación y tratan de reunir contribuciones, constituye cerca del 20 % de sus gastos normales en años que no tienen elecciones. Algunos partidos logran reunir de esta forma hasta la mitad de sus necesidades financieras, otros se quedan por debajo y sólo recaudan un 10 por ciento o menos. Estos bajos ingresos reflejan probablemente una declinación en la afiliación mucho más que la circunstancia de que los viejos partidos han sufrido el impacto de que los cambios en las contribuciones han quedado muy atrás de los incrementos de los ingresos personales de los afiliados. La mayor parte de los partidos occidentales podrían llegar a satisfacer mejor sus necesidades si tuviesen que recibir de cada afiliado o activista un día de salario. No obstante, de los partidos socialistas solamente el Mapai recauda un día de salario, lo que veríamos es insuficiente debido al inusitado nivel de gastos en Israel. Hasta el Partido Socialdemócrata recauda solamente el equivalente anual de seis horas de trabajo (masculino e industrial).

Las cifras de otros tipos de ingresos, tales como contribuciones de los grupos de presión, beneficios

de empresas de partidos, etcétera, son difíciles de determinar, aunque la investigación al respecto puede ser esmerada. La tendencia evidente es que la mayor parte de los partidos tienden a la diversificación en lo que hace a las categorías y funciones de los donantes. En los casos de la anteguerra, en que los conservadores británicos estaban financiados predominantemente por ricos candidatos y patrocinadores en el nivel local y por grandes suscripciones procedentes de unos pocos sostenedores ricos en el nivel nacional, han abierto durante la década pasada muchas nuevas fuentes entre sus afiliados y simpatizantes. El Partido Laborista, menos flexible, no ha disminuido su dependencia de los gremios en medida significativa, pero ha seguido a los *tories* en la explotación de sucesos sociales y aleatorios para provecho del partido. El dinero les llega así de un variado número de personas que actúan en diversas funciones: militantes partidarios, trepadores sociales, calculadores directores de compañías, secretarios de gremios, etcétera. En países como Italia, Israel y Austria todos los grandes partidos reciben indirectamente grandes subsidios de bancos, industrias nacionalizadas y otras empresas en que sus designados tienen enorme poder.

Estas fuentes de ingresos se han desarrollado junto a las fuentes tradicionales de donde provienen la mayor parte de los fondos para los partidos políticos —el comercio privado—. Las firmas industriales y comerciales y los bancos aún se cuentan entre los mayores donantes de fondos políticos a partidos de centro y de la derecha, pero probablemente en la mayor parte de los países tienen estos recursos un significado mucho menor del que tenían hace unos años. En medida cada vez mayor, los partidos políticos se han dirigido al Estado buscando muchas formas de asistencia financiera abierta —muy generalmente mediante la provisión de mayores servicios gratuitos, y en algunos, en un creciente número de países, especialmente Alemania Occidental— mediante la introducción de subsidios directos a los partidos con fondos públicos.

Hay no obstante importantes diferencias entre los partidos, por ejemplo en lo que hace al grado en que dependen de una corriente «ascendente» de fondos procedentes de los afiliados, o una corriente «descendente», procedente de arriba, obtenida de fuentes externas o públicas. Para un partido como el de los liberales japoneses, las sumas anuales de ingresos llegaron a sólo un 1 % de los gastos en que incurrieron en un período reciente de campaña proselitista, mientras que el Partido Socialdemócrata alemán conoció una proporción del 50 %. La misma proporción correspondió al Partido Laborista británico, si los pagos de afiliación al sindicato sería del 100 %. Para un partido extremadamente activo como el Mapai, de Israel, la proporción desciende a cerca del 20 por ciento, para un partido como el CDU, alemán, al 10 por ciento.

En países como Italia, Israel y Australia, las similitudes entre las fuentes de recaudación y los métodos de los grandes partidos socialistas y no socialistas parecen ser mayores que las diferencias. El intento de los demócratas cristianos por constituir una organización sobre el modelo comunista los ha forzado a buscar ávidamente fondos, pero los comunistas y los socialistas son igualmente incapaces de mantener sus organizaciones con el producido de sus fuentes internas, y deben recurrir a estratagemas como lo hacen los demócratas cristianos. En el altamente politizado Israel, las contribuciones de los afiliados son importantes para todos los partidos, pe-

ro en el grado en que no llegan a cubrir sus gastos, no parece variar muy grandemente entre los partidos de la izquierda y la derecha. En Australia, donde los intereses comerciales proveen el grueso del apoyo a los liberales australianos, el Partido Laborista, aparte de las contribuciones y de la afiliación, debe buscar el apoyo financiero de cierto tipo de intereses comerciales.

En tanto que los gastos estimados por votos son habitualmente mayores para los partidos no socialistas, de ninguna manera ello constituye una regla general, y en la mayor parte de los países el margen entre los importantes partidos no socialistas y socialistas se ha ido estrechando. Alemania, donde en la mitad de la década del 50 las diferencias entre la estructura financiera del Partido Socialdemócrata alemán y el CDU eran aún tan notables como para proveer bases sustanciales para que una corte constitucional en 1958 invalidase la deductibilidad de contribuciones. En 1953, los socialdemócratas limitaron sus gastos de campaña electoral al equivalente del ingreso de un año de cuotas, mientras que el CDU gastó tres veces más. En 1961 los socialdemócratas habían elevado sus gastos a probablemente más de dos tercios del total del CDU.

EGRESOS PARTIDARIOS

Factores estructurales que determinan gastos

Pasando de la columna de ingresos a la de gastos, se vuelve mucho más difícil establecer fórmulas comparadas o generalizaciones, precisamente porque ha habido tan poca base para el estudio riguroso de las relaciones entre los gastos partidarios, la conducta electoral y las subsiguientes decisiones por la Legislatura y el gobierno. No tenemos datos seguros sobre los gastos partidarios para poder establecer correlaciones. Lo único que podemos hacer por ahora —aunque solamente como ensayo— es elaborar retroactivamente algunas estimaciones seguras del monto total de gastos durante los períodos de campaña proselitista. Si tomamos dichas estimaciones y las reducimos a un común denominador, tenemos un conjunto de índices que podemos tratar de elucidar en relación a otra información que tengamos sobre el funcionamiento de los procesos políticos electorales y de otra índole en los países en cuestión.

Las estimaciones utilizadas para establecer los índices abajo usados han sido tomadas de las mejores fuentes disponibles, en general de datos presentados en esta edición. Respecto de la mayor parte de los países, se basa en una combinación de análisis de datos oficiales y de los partidos, una cuidadosa evaluación de los cálculos hechos por personas ajenas al proceso, tales como expertos en publicidad, periodistas, etcétera. Las estimaciones cubren no solamente los gastos de todos los niveles de las organizaciones partidarias, sino que también incluyen los gastos de organizaciones afiliadas y adherentes, en la medida en que estén dirigidas a hacer más que meramente activar a sus propios miembros a través de los habituales conductos asociativos. Por otra parte, no se han intentado subsidios ocultos, o el costo de obras públicas que puedan haberse emprendido para influir en la campaña. En una tentativa para igualar todo lo posible los niveles de gastos en sistemas que tienen partidos que giran en torno de campañas electorales con aquellos que tienen partidos basados en organizaciones permanentes y cuerpos directivos, se tomó como base de comparación un período proselitista de nueve meses. En este lapso todos los fondos gastados

El mantenimiento de las organizaciones partidistas, los gastos para la campaña, así como lo contribuido por las organizaciones paralelas y adherentes, han sido utilizados para establecer estimaciones comparativas.

Las estimaciones así obtenidas fueron elaboradas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Indice de gastos:

- Gastos totales.
- Cantidad de votos emitidos.
- Salario horario medio de trabajadores industriales masculinos.

De acuerdo con el procedimiento descrito fue posible establecer los siguientes índices de gastos para los nueve países enumerados:

TABLA 1

Indice de gastos

Pais y año considerado	Indice de gastos
Australia, 1958	0,45
Gran Bretaña, 1959	0,64
Alemania, 1961	0,95
Estados Unidos, 1960	1,12
India, 1961	1,25
Japón, 1960	1,36
Italia, 1958-60	4,5
Filipinas, 1961	16
Israel, 1960	20,5

Aunque este intento de formación de índices debe ser considerado como una prueba muy incipiente de manejo de un problema metodológicamente muy complejo, puede servir por lo menos para establecer un marco de referencia de ensayo mediante el cual uno pueda determinar si los gastos son «mayores o menores» en un país que en el otro. Aparte de los cálculos y reflexiones sobre el tema, han habido muy pocos intentos de establecer algún tipo de criterio útil para hacer un análisis comparado o para discutir esencialmente lo que los índices intentan medir son los montos de apoyo financiero y material conferido, aparte y por sobre las contribuciones directas de personas y de grupos institucionales, para activar a los votantes a participar en recientes campañas electorarias en los países examinados. Se supone que los partidos y las campañas proselitistas cumplen funciones razonablemente similares en los países aquí mencionados.

ESTIMACIONES Y DATOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS INDICES

- Australia, 1961, A L 1 5,4, 3 chelines, 9 peniques, 8 chelines, 3 peniques, 0,45.
- Alemania, 1961, marcos 90, 33, marcos 2,73, marcos 2,88, 0,95.
- Estados Unidos, 1960, dólares 175, 69, dólares 2,53, dólares 2,26, 1,12.
- India, 1958, rupias 90, 123, rupias 0,75, rupias 0,60, 1,25.
- Japón, 1960, yen 6.000, 40, yen 150, yen 110, 1,36.
- Italia, 1958, 29.000, 29,5, 1.000, 220, 4,5.
- Filipinas, 1961, p. 80, 6,5, p. 12, p. 0,75, 16.
- Israel, 1960, il. 27, 1,05, il. 25,7, il. 1,25, 20,5.

¿Cómo podemos comenzar a explicar por qué insurrección una vez y media más gastos financieros activar a un votante alemán que a uno británico, por qué

los partidos en Italia consideran necesario gastar el equivalente de cuatro veces la cantidad horas de salario que en los Estados Unidos o por qué la política en Israel ha de ser tan cara que en cualquiera de los otros países de Europa acerca de los cuales tenemos información? El tipo de interacciones sumariadas por los datos relativos a gastos parece estar más bien determinado por algunos factores estructurales así como por procesos de desarrollo socio-político más dinámicos. Los factores estructurales que ayudan a explicar las divergencias en materia de gasto partidista que surgen de los índices comprenden: a) El margen de politización partidista característico del sistema; b) El grado en que las adherencias partidistas estarán a punto de sufrir cambios; c) El volumen y naturaleza del electorado y los distritos geográficos y sociales en que están circunscritos; d) El grado en que los fondos públicos y controles son utilizados para minimizar los gastos de los partidos. Trataremos de determinar qué significación pueden tener estos factores en ayudarnos a establecer las diferencias sugeridas por la tabla arriba consignada.

a) *Importancia de los partidos* (politización partidista). — Esto debe entenderse como medición del grado en que los partidos predominan dentro del conjunto de instituciones políticas del sistema, y el grado en que se vinculan a otras estructuras sociales y económicas. El alto grado de especificidad de funciones, que caracteriza a los partidos británicos, y la considerable extensión en que estructuras como la administración, las universidades, los grupos de interés, etc., son aislados de influencias partidarias pueden explicar en cierta medida el bajo índice británico, comparado por ejemplo con el de los Estados Unidos. Alemania es un país donde la influencia partidista penetra más bien profundamente en la administración y otras estructuras, pero el grado de politización es mucho menor que en Israel, donde la amplia gama de instituciones sociales, gremios, granjas colectivas, dependencias administrativas y de producción— fueron fundadas y alimentadas por partidos o sus organizaciones adherentes. El índice mayor que existe en las Filipinas, comparado por ejemplo con el del Japón, puede ser explicado en parte por el mayor y predominante poder de los políticos electos sobre la administración y otras estructuras que en Japón tienden a estar dominados por grupos de poder algo más autónomos.

b) *Adherencias partidistas* (lealtad partidaria). — El grado de competencia entre partidos está básicamente relacionado con el grado en que ellos creen poder persuadir amplios números de votantes, o al menos márgenes decisivos, para cambiar su elección política. El mayor desequilibrio en el sistema partidario alemán, cuando se lo compara con el británico, llega a explicar el gasto de los partidos alemanes. Las lealtades partidarias alemanas han sido mucho más afectadas por los cambios sociales, ideológicos y en las comunicaciones. Las comparaciones entre los sistemas partidistas no muy férreamente estructurados, como los sistemas americano y filipino, pueden también ilustrar este punto. Mientras que la personalidad de los candidatos y la forma en que ellos llevan las campañas pueden causar cambios relativamente amplios en la conducta electoral americana y las posibilidades para influir sobre los políticos, los delegados a convenciones y los votantes para que cambien su lealtad, parecen ser mucho mayores, en Filipinas son mucho mayores, de donde, en parte, la mayor inversión en gastos electorarios.

c) *Electorado y distritos.* — El tamaño del electorado y el grado en que es posible simplificar el proceso de llevar a él el mensaje de un partido es indudablemente un factor fundamental que afecta los gastos. Los votantes en los Estados Unidos e Israel son políticamente informados, pero el costo per capita que demande cada votante a través de los medios disponibles de comunicación son inmensamente mayores en el país más pequeño. Los costos en Israel están influidos probablemente por la necesidad de llegar a diversos grupos de inmigrantes recientes en sus propios lenguajes y en el marco de sus diferentes aspiraciones culturales. En las Filipinas, una población menos alfabetizada es costosa de informar en razón de la dispersión geográfica. La homogeneidad cultural relativa de un país como Gran Bretaña también contribuye a mantener bajos los costos en contraste con un país como Italia, con sus subsistemas electorales y regionales. Los aspectos técnicos son también importantes. El hecho de que en Gran Bretaña el deber del elector sea sencillamente votar por un solo candidato, mientras que en Alemania hay candidatos y listas partidarias, y en Italia y Japón hay complejas posibilidades para expresar votos preferenciales dentro de las listas de los partidos, probablemente contribuye a las discrepancias en el esfuerzo realizado.

d) *Fondos públicos y controles.* — El grado en que se suministran fondos públicos y servicios a los partidos y a los candidatos indudablemente afecta el total de gastos. Así los mayores costos entre los Estados Unidos y la mayor parte de los países europeos quedan explicados por el hecho de que en los últimos todos los medios radiales y televisivos son suministrados a los partidos, libres de cargo. Un país como Japón, que ha adoptado la concesión de servicios libres de cargo a los partidos y candidatos según modelos europeos, puede tener gastos políticos menores en comparación con Filipinas, que ha sido inspirada más por el modelo americano del *laissez-faire*. En qué medida los controles particulares en materia de gastos, como existen particularmente en los países de habla inglesa, son efectivos en reducir los costos es difícil de discernir. Probablemente en el sistema británico de legislación, aunque paulatinamente se está poniendo fuera de moda, ha tenido influencia en tener bajos los gastos en relación a países como Alemania e Italia, que no conocen límites legales para nada. Una vez que tengamos un conocimiento más preciso de los procesos de política financiera, puede ser posible decir con seguridad algo mayor por qué determinados tipos de control funcionan o fracasan bajo diferentes circunstancias.

APOYO CONSISTENTE EN TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y SU DISTRIBUCION

La indagación de ciertas facetas claves de los procesos de finanzas partidarias, pueden producir nuevos rumbos si se intenta ver no solamente cómo los ingresos financieros se equiparan a otros tipos de participación política, sino para distinguir a las características que diferencian al apoyo financiero de la perspectiva del donante y del beneficiario. Una característica obviamente distintiva del dinero, como Simmel lo ha demostrado con gran penetración, pero como también cualquier ama de casa puede testimoniar, es la facilidad con que puede convertirse en una gran variedad de bienes y servicios, sin revelar necesariamente su fuente original. En contraste con el dinero, es participación personal directa como queda

evidenciada en acciones como votar, oficiar de fiscal, presentar candidatura y conversar sobre política.

En contraste con otra categoría políticamente esencial de apoyo institucional y de grupo —ejemplificado por editoriales periodísticos, grupos de interés o apoyo de comités— el dinero tiene ventajas mayores desde el punto de vista de poderse transferir el apoyo donde más se le requiera. Tanto el apoyo personal como el institucional pueden ser adquiridos por dinero u objetos con valor en el mercado, pero teóricamente puede ser distinto pero así mismo pueden ser diferenciados de los apoyos consistentes en transferencia —financieras y de otra índole— que están destinadas a facilitar la persuasión y activación de otras personas que no sean el donante. La mayor parte de las contribuciones financieras —sean cuotas, donaciones, afiliaciones, coimas u otros objetos de valor— de mercado brindados para una campaña política o para el apoyo de organizaciones directamente conectadas.

En la práctica, muchos políticos de nivel inferior que hacen política de oído, prefieren apoyo financiero no transferible con todas sus limitaciones porque ellos son inexpertos en decidir cómo y dónde gastar grandes sumas de dinero. Pero las grandes organizaciones partidarias, especialmente aquellas que no brotan pocas semanas antes de las elecciones, habitualmente cuentan con experiencia para canalizar los fondos en donde puedan tener su máximo beneficio marginal. Sin embargo, este tipo de apoyo financiero resulta el más sospechoso. Para muchos ciudadanos parecen inherentemente antidemocráticos porque lógicamente chocan contra el concepto de igualdad política asociado con el principio de «un hombre-un voto». Aun para aquellos que participan de los conceptos más sofisticados y pluralistas de la adopción democrática de decisiones, los ejemplos de la compra de influencia ocurren tan frecuentemente a través del otorgamiento de fondos que las actividades de cualquier organización que se especialice en la recolección y transferencia de fondos queda automáticamente en sospecha. El problema de la legitimación de los apoyos financieros transferibles a partidos políticos ha sido facilitado para los países de Europa Occidental respecto de organizaciones como los gremios británicos y escandinavos, que están afiliados a los partidos y al mismo tiempo no tienen que lidiar con competencia en lo relativo a la lealtad de sus miembros. Ellos pueden alegar que todas las transferencias de fondos que tienen lugar son de naturaleza interna (entre las ramas gremiales y políticas del mismo movimiento laboral), que el apoyo financiero se extiende concomitantemente con el apoyo institucional y directo, y finalmente que el apoyo es pequeño cuando se lo divide por el número de afiliados al partido.

Pocos países intentan prohibir las donaciones políticas procedentes de corporaciones (sociedades comerciales) como se hace en los Estados Unidos. Las transferencias a partidos políticos están muy influidas por el tratamiento impositivo que reciben. En algunos países el dinero gastado en fines políticos puede ser deducido hasta un cierto porcentaje de los beneficios imponibles, en otros países sólo son deducibles si puede probarse que esos donativos han promovido los intereses de una firma comercial. En otros se pueden deducir si el dinero es canalizado a través de asociaciones profesionales como contribuciones.

Fundamental para la naturaleza de las transferencias de dinero es lo relativo a quien controla la distribución de los fondos, y si ellos son distribuidos

entre los candidatos individuales o los partidos, y con qué criterio. En Gran Bretaña, los fondos comerciales parecen haber ido directamente a los comités del conservadurismo. Bajo la 4ª República Francesa, los fondos eran colectados por los comités vinculados a las máximas asociaciones comerciales y distribuidos a los diputados individuales de diversos partidos del centro y de la derecha. La forma más centralizada de distribuir fondos han sido las asociaciones de apoyo establecidas por las máximas asociaciones comerciales en Alemania y Japón en la primera mitad de este siglo. Estas asociaciones recogieron fondos de sus miembros de acuerdo a modelos ya establecidos, los reunieron en tesoros proselitistas de cerca de 25 millones de marcos alemanes y de 2 billones de yens, respectivamente, y los distribuyeron principalmente a través de la jefatura central de los grandes partidos. Quedando así en situación de conservar a los partidos no socialistas más importantes en dependencia de ellos respecto a desde un tercio a la mitad de los fondos necesarios para su campaña, con lo que estas asociaciones están a veces en situación de ejercer considerable influencia en las políticas del partido relativas a la selección de candidatos y la formación de coaliciones. El CDU toleró estas presiones en tanto servían primariamente para debilitar a los partidos menores pero al debilitarse su propia situación alrededor de 1960-61 comenzó a ver las cosas en forma diferente. El resultado de este replanteamiento ha sido la adopción de un sistema de finanzas estatales mucho mayor que en otro país democrático importante.

Si bien los receptores de fondos que están orientados hacia los donativos o que tienen adherencias múltiples, son rémoras para los partidos, también lo son las estructuras de recepción de fondos que están demasiado estrechamente integradas con la organización y jefaturas del partido, por lo menos si tienen que recoger los fondos en medios extrapartidarios. Los receptores de fondos más directos son ellos mismos dirigentes del partido y candidatos. Lo que es crítico no es la identidad del colector de fondos sino la diversidad de papeles que tiene que invertir. Los sistemas partidarios que en otros aspectos son tan diferentes como los de los Estados Unidos, Australia y la India muestran notables similitudes en lo que respecta a los papeles típicos de los principales colectores de fondos de los partidos más populares y más «conservadores». Como Heard ha documentado admirablemente respecto de los Estados Unidos, la forma de coleccionar fondos entre los republicanos difiere de la forma de los demócratas en que desde un punto de vista de organización las estructuras de financiación están separadas, entre los republicanos, de la conducción del partido y de los candidatos, en tanto que los demócratas no han logrado establecer un conjunto de «financieros demócratas», que sean distintos de los «demócratas políticos». La presión resultante sobre los jefes de partido y candidatos de los partidos más populares para entrar dentro de la recolección de fondos si es que el dinero ha de ser colectado, constituye una desventaja considerable. Los partidos populares dependen mucho más del apoyo financiero de las industrias que económicamente son algo más marginales y socialmente algo más sospechosas (esto es, licores, entretenimientos, etcétera). En Nueva Gales del Sur es más fácil para el partido laborista quedar trabado por revelaciones de contribuciones de los intereses licoristas gestionadas por pedidos personales de su propio líder que

lo que puede suceder con los liberales oponentes, que tienen más cuidado en aislar a sus candidatos y funcionarios de las operaciones de recaudación de fondos.

Las limitaciones en la corriente de apoyo financiero adquieren caracteres particularmente agudos en los partidos que están descentralizados regionalmente. Como en los sistemas federales los intereses económicos, intereses de organizaciones, y aun la pertenencia a partidos tiende a estar diferenciada regionalmente, las categorías de relaciones donantes-recipiente son probablemente mucho más difíciles de vigilar, reglamentar e influir desde arriba. En estos partidos, la tendencia precedente de la responsabilidad de alto nivel en favor de la de bajo nivel (local) aumenta las probabilidades de que las donaciones estén vinculadas a propósitos específicos. En tales partidos las oficinas centrales dependen usualmente de pequeñas contribuciones de los niveles inferiores, o tienen dificultades en mantener sus propias fuentes de ingresos. Respecto de la limitada finalidad de las operaciones debida a la falta de fondos, la Oficina Federal del Partido Laborista lleva una especie de record, pues se mantiene con el ingreso de cuatro obreros calificados. Entre las funciones que esas débiles oficinas centrales no pueden cumplir con eficacia es la distribución de los recursos materiales disponibles con el máximo efecto para la campaña. Esto se aplica particularmente a la transferencia interregional de fondos partidarios. La especialmente intensiva búsqueda de Heard sobre este punto ha demostrado que ello constituye un gran problema para los partidos americanos.

Los donantes y los distribuidores del apoyo financiero juegan un papel quizá especialmente fundamental en los sistemas donde la política partidaria interna está dominada por facciones organizadas en el plano nacional. Donde las facciones tienen una base de adherentes a un conductor personal dentro de un partido mayoritario, como en Japón, el auge y la decadencia de la influencia facciosa están íntimamente ligados al apoyo financiero a disposición del jefe del partido, de modo que los fondos políticos usados principalmente para gastos «internos», del partido cumplen una función clave en la facilitación de redistribuciones ocasionales de poder. Las facciones de base más ideológica de Italia pueden ser consideradas instrumentos para salvar las lagunas del sistema multipartidario y el apoyo financiero puede ser una de las formas en que los extraños pueden influir sobre este complejo proceso político. El donante que realiza contribuciones a facciones específicas dentro de los demócratas cristianos y los socialistas, hace así para tratar de alcanzar objetivos que sólo serían realizables si algunas facciones de dos o más partidos cooperan tras la escena. El donante suprapartidario tiene una gran ventaja competitiva por estar relativamente libre de impedimentos para canalizar el apoyo a precisamente aquellos niveles que son más cruciales para lograr una decisión legislativa o ejecutiva deseada.

GASTO POLITICO Y CAMBIO SOCIOPOLITICO

Cuanto más uno compara las prácticas en materia de finanzas partidarias contemporáneas con las de unos sesenta años atrás, o los datos sobre sistemas del mundo occidental con los de algunos países en desarrollo, se hace más evidente que cualquier base para el análisis comparativo y la comprensión de las finanzas políticas requiere una dimensión que abarque la evolución histórica y el desarrollo político. ¿Por que en ciertos países en períodos relativamente

cortos de varias décadas hay pruebas de agudas alzas o caídas en índices de gasto partidista, que las explicaciones estructuralistas no parecen explicar suficientemente? Un enfoque genético de las finanzas partidistas nos puede ayudar a comprender mejor la dinámica motivante de los cambios en el estilo proselitista, y permite mayor base para juzgar si ciertos tipos de controles de finanzas partidarias, que en un país funcionan, pueden ser ajustados a la condición de otro sistema.

Un enfoque de este problema puede ser facilitado recurriendo a construcciones, de tipos ideales que abarquen nociones de experiencia común con electorados masivos en situaciones de política competitiva, mediante la extrapolación de síndromes identificados con procesos de persuasión política y activación en ciertas etapas del desarrollo económico, social y político. Los puntos esenciales de referencia aplicables a los sistemas que sufren industrialización así como democratización en lo que podría ser denominado «modelo representativo de países en vías de modernización», puede ser establecido dentro de las cuatro fases del modelo.

La fase A se caracteriza por una muy limitada politización del electorado, la conformación de la conducta por modos tradicionales y centros establecidos de autoridad. Generalmente el nivel de desarrollo económico es muy bajo, pero las relaciones de los votantes con los candidatos es tan remota que la idea de ver las elecciones como fuentes de beneficio personal no se les ocurre a la gran mayoría. Los esfuerzos y los fondos pueden ser concentrados en la inclinación del relativamente pequeño número de influyentes locales; técnicas de persuasión masiva meramente existen.

En la fase B la experiencia política de una o más generaciones, el desarrollo del alfabetismo y de las comunicaciones y las técnicas competitivas más agudamente desarrolladas de los partidos o agentes de la elección, o cualquier combinación de ellas, habrán producido un electorado que «sabe el juego», aunque la mayoría siga siendo pobre y relativamente poco educada. El desarrollo social y económico no se habrá producido en la extensión necesaria para producir clases de intereses ampliamente difundidos o ideologías de masa de modo tal que el votante percibe su interés en términos personales.

En la fase C la movilización política del electorado así como el desarrollo económico y las distinciones sociales de clase se habrán desarrollado a un grado muy alto. En Occidente, esta fase ha sido habitualmente coincidente con el logro de la sociedad industrialista. Los factores que determinan las adhesiones

sociales y políticas están primariamente basados en la identificación de clases y la ideología. Sobre esta base las asociaciones políticas pueden recabar muchas mayores sumas de apoyo en términos de trabajo voluntario y actividades de propaganda. La intensidad del conflicto entre partidos opuestos basados en clases e ideologías pueden hacer mucho más intensas las luchas electorales. Pero en comparación con la fase anterior, el gasto proselitista será mucho menor, porque el gasto per cápita en propaganda tiene probabilidades de ser menor.

En la fase D sin embargo, existe la tendencia a crecer, reflejando un bache mayor entre los recursos materiales necesarios para la persuasión política y el apoyo disponible en materia de esfuerzo voluntario y órganos institucionalizados de apoyo. La actividad política se torna variada y atractiva. Para enfrentar al desafío de técnicas cambiantes de persuasión, innovadas mediante la propaganda y los medios de entretenimiento, los partidos y los candidatos deben hacer grandes esfuerzos para captar votantes y usualmente los talentos y recursos necesarios deben ser pagados a precios de mercado. Los apoyos que pueden haber ayudado a hacer las campañas menos costosas antes —prensa partidaria, militantes para distribuir panfletos, grupos subsidiarios de propaganda, etc.—, pierden su capacidad de autosostén o su utilidad marginal.

Estos modelos no son absolutos. La experiencia de países en vías de modernización como las Filipinas y otros, donde los gastos han crecido rápidamente en un corto período de tiempo, pueden suministrar un acercamiento a la curva que culmina en la fase B. Es posible esperar que un país como la India siga una curva similar aunque menos pronunciada, a medida que desaparezcan las trabas comunales, de casta y tradicionales, así como también cuando desaparezcan las figuras carismáticas de la independencia y se afloje la dominación burocrática.

Los países como Alemania, donde el estilo electoral ha sido enérgicamente afectado por el eclipse de los movimientos de masas y el descubrimiento por parte de la población de la retribución del consumo privado, ha hecho ascender la curva. Los políticos británicos parecen estar cambiando sus hábitos acostumbrados, por los más brillantes y caros que sus propagandistas les recomiendan para gusto del electorado.

Traducido de separata del *Journal of Politics* (traducción abreviada).

Comparative Party Finance: Notes on practices and toward a theory, por Arnold J. Heidenheimer (Universidad de Florida).